

EUTOPÍA-6

Revista de Desarrollo Económico Territorial - N.º 6 - diciembre 2014



FLACSO
ECUADOR

EUTOPIA 6

Comité editorial

Luciano Martínez Valle (FLACSO, Ecuador)
Francisco Rhon Dávila (CAAP/FLACSO, Ecuador);
Fernando Guerrero Cazar (PUCE, Ecuador)

Revista Eutopía hace parte de los siguientes índices

Flacso-Andes- FLACSO-ECUADOR
LATINDEX, Catálogo. Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal-México.

Comité Asesor Internacional

Liisa North (York University, Canadá), Bert Helmsing (ISS,
Holanda), Cristóbal Kay (ISS, Holanda), Giancarlo Canzanelli
(PNUD-ART Internacional), Juan Pablo Pérez Sainz (FLACSO,
Costa Rica), Arilson Favareto (Universidade do ABC, Brasil),
Geneviève Cortes (Université de Montpellier 3, Francia),
Gerardo Otero (Simon Fraser University, Canadá), Sérgio
Schneider (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil),
Clara Craviotti (FLACSO, Argentina), Carmen Diana Deere
(University of Florida- FLACSO, Ecuador)

Director: Luciano Martínez Valle
Editora: Sara Gómez de la Torre Arias
Cuidado de la edición: Marcela Alvarado, Oscar Leiva,
Ginno Martínez, Diana Vásquez
Ilustración de portada: Antonio Mena
Diseño gráfico: Unidad Editorial FLACSO
Imprenta: V&M Gráficas

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador

La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito, Ecuador
Telf.: (593-2) 294 6800
Fax: (593-2) 294 6803
www.flacso.org.ec
www.eutopia.org.ec

ISSN: 1390 5708
Quito, Ecuador 2014

Índice

Presentación	5-8
--------------------	-----

TEMA CENTRAL

Agricultura familiar y soberanía alimentaria. Diversidades territoriales de las políticas públicas en Misiones y Buenos Aires (Argentina)	11-24
Mabel Manzanal, Mariana Arzeno, Federico Villareal, Fernando González, Mariana Ponce	
La agricultura familiar entre proyectos nacionales de desarrollo	25-40
María Fernanda de Torres Álvarez, Pedro Arbeletche, Eric Sabourin, Joaquín Cardelliac Gula, Gilles Massardier	
La agricultura familiar pampeana: notas sobre historia y actualidad	41-52
Eduardo Azcuy Ameghino y Gabriela Martínez Dougnac	

ESTUDIO DE CASO

La agricultura familiar: su relación con el abastecimiento alimentario a nivel familiar	55-71
Laura Boada	

CONTRA-PUNTO

Censos y registros de la agricultura familiar en Argentina: esfuerzos para su cuantificación	75-91
Raúl Paz, Cristian Jara	

RESEÑAS

**Movimientos sociales rurales en América Latina:
en el ojo de la tormenta** 95-116
Leandro Vergara-Camus

Jean Michel Sourisseau (Ed)

Agriculturas familiares y perspectivas hacia el futuro 117-121
Diego Martínez Godoy

POLÍTICA EDITORIAL 123-126

Presentación

Durante el 2014, declarado por las Naciones Unidas como el año internacional de la agricultura familiar (AF), se desarrollaron múltiples eventos, conferencias y publicaciones que destacaban la importancia de esta forma productiva en el contexto de la agricultura, sobre todo entre los países menos desarrollados. Las diversas publicaciones enfatizan el rol que tiene la AF en la alimentación, empleo, medio ambiente, destacando sobre todo su permanencia a través del tiempo y la necesidad del apoyo de las políticas públicas para su consolidación.

En el caso de América Latina, la mayoría de los estudios enfatizan el lazo de la AF con la soberanía alimentaria y la necesidad de repensar el desarrollo de la agricultura en base a modelos más sostenibles que generen empleo y al mismo tiempo ingresos en el medio rural. Se reconoce igualmente la diversidad de agriculturas familiares y la creciente importancia de las actividades no agrícolas en los ingresos familiares.

La agricultura familiar sin duda desempeña un rol importante en la producción de alimentos y en la conservación del conocimiento y el patrimonio simbólico y cultural relacionado con la alimentación. Igualmente, tiene un rol estratégico para el medio ambiente, en la medida en que los agricultores familiares poseen conocimientos ancestrales en el manejo y uso del suelo, la biodiversidad y el agua, que combinados con conocimientos científicos pueden ampliar la resiliencia de los sistemas productivos.

Recientes estudios muestran que la agricultura familiar es el principal reservorio de mano de obra del sector agrícola o espacio rural en muchos países de América Latina.

[S]e estima que las explotaciones que pertenecen al sector de la agricultura familiar en América Latina ascienden a cerca de 17 millones de unidades, que agrupan a una población de alrededor de 60 millones de personas. Se calcula que cerca del 57% de esas unidades se encuentra en Sudamérica. Aunque no se cuenta con cifras exactas para todos los países, se considera que la agricultura familiar representa una proporción del total de unidades productivas superior al 75% en casi todos los países latinoamericanos y sobrepasa el 90% en muchos de estos¹.

1 CEPAL-FAO-IICA (2013). Situación y perspectivas de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe, en, Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. San José-Costa Rica. IICA, p 47.

A pesar de las dificultades en encontrar una definición de AF que se pueda generalizar a nivel global, en casi todos los estudios se ha llegado a un consenso sobre los elementos centrales que caracterizarían a la AF: trabajo del grupo familiar, actividades agropecuarias e ingresos provenientes mayoritariamente de estas actividades. En cambio, no se ha llegado a un consenso sobre el tamaño de la unidad productiva que respondería a características específicas de los países, regiones y territorios.

Hay que señalar, no obstante, que existen en la realidad algunos obstáculos que impiden una caracterización más objetiva de la AF. El principal obstáculo es la falta de estadísticas actualizadas que dificultan su medición sobre al menos las tres características básicas antes mencionadas, en especial sobre el trabajo realizado por la familia o algún miembro familiar. La noción de AF debe ser contextualizada en los territorios, regiones o países donde se la estudia para evitar que se convierta en un “cajón de sastre” donde pueda haber todas las formas productivas que no pueden ser consideradas como agricultura capitalista².

Tal como lo sugerimos en la convocatoria a este número, es importante considerar a la AF en el contexto territorial, lo que permite analizar tanto las amenazas internas como externas y las estrategias que despliega para enfrentarlas. Como lo muestran algunos de los artículos presentados, las AF enfrentan tanto amenazas que provienen del proceso de globalización así como aquellas que provienen de la misma crisis o desestructuración de esta forma productiva. Así, en territorios donde predomina la agricultura capitalista en gran escala y la minería, la AF queda subordinada a roles secundarios o complementarios del gran capital, mientras en aquellos territorios donde la gran empresa no es predominante la AF desempeña un rol productivo y social importante, vinculado sobre todo al abastecimiento de alimentos y a políticas de soberanía alimentaria.

De allí que las políticas públicas implementadas en los territorios sean vitales para la consolidación de la AF. No es por azar que en Brasil, por ejemplo, el apoyo de las políticas públicas hacia los productores rurales familiares haya significado no solo la institucionalización de la AF, disputando recursos económicos a la agricultura capitalista y facilitando la organización de estos productores, sino que se convierte en el eje de políticas orientadas a solucionar los problemas de desnutrición y pobreza en el medio rural. En cambio, el caso ecuatoriano es paradigmático en el sentido que no dispone de políticas orientadas específicamente a este sector y hasta hace poco ni siquiera de una visión sobre la importancia de la AF, menos aún de alguna iniciativa organizacional.

Los artículos presentados en este número abren la discusión principalmente sobre los vínculos de la AF con la soberanía alimentaria y con las políticas públicas en los países del cono sur. Así, el artículo sobre Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria escrito por Mabel Manzanal, Mariana Arzeno, Federico Villareal, Fernando González y Mariana Ponce, en base a una comparación entre Misiones y Buenos Aires, enfatiza que las políticas

2 Luciano Martínez Valle, *Las agriculturas familiares en el Ecuador*, en, Clara Craviotti (Compiladora), *Agricultura familiar en Latinoamérica*, Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2014.

públicas orientadas hacia la AF son más bien acciones puntuales y herramientas limitadas que no terminan por resolver los problemas centrales vinculados al acceso a la tierra y a más recursos económicos. La soberanía alimentaria no constituye una cuestión central en las políticas públicas a nivel provincial, de este modo, las políticas de apoyo a la AF y a la soberanía alimentaria quedan en segundo plano frente a aquellas que privilegian la producción de *commodities* para el mercado mundial.

El artículo “La Agricultura Familiar entre proyectos nacionales de desarrollo” de María Fernanda de Torres Álvarez, Pedro Arbeletche, Eric Sabourin, Joaquín Cardelli Gula y Gilles Massardier, se refiere al caso de Uruguay y muestra que a pesar de que en ese país existen políticas favorables a la AF, persisten políticas que también favorecen a las estrategias foráneas y locales de los agronegocios. Si bien existen amenazas internas para la permanencia de la producción familiar como el envejecimiento de la población rural, el aumento de la esperanza de vida, la ausencia de incentivos al retiro, también se han incrementado las oportunidades de empleo fuera del sector agropecuario que inciden en el “costo de oportunidad de permanecer en el medio rural”. El avance a nivel organizativo de la AF ha permitido incrementar su participación y el nivel de representatividad política, no obstante como bien lo señalan los autores, las políticas públicas también privilegian la agricultura productivista basada en la inversión de capital transnacional, la concentración de tierra y las cadenas productivas cada vez más internacionalizadas que amenazan la estabilidad de la AF.

El artículo de Eduardo Azcuy Ameghino y Gabriela Martínez Dougnac, muestra, a través de un análisis de corte histórico, la evolución de la agricultura “chacarera” en la pampa argentina que actualmente, como lo señalan los autores, “tiende a descomponerse, a integrarse o a redefinirse”. En este territorio, la consolidación del capitalismo agrario conduce a la desaparición creciente de unidades productivas donde predomina el trabajo familiar. Las estrategias que implementan las AF, como la tercerización o contratación de servicios, por ejemplo, significaría el abandono de la “condición de productor directo” y por lo mismo, la desaparición de una de las condiciones del trabajo familiar. Los autores abren un espacio de discusión sobre la crisis de las agriculturas familiares en el territorio pampeano.

En la sección estudios de caso se presenta un trabajo realizado por Laura Boada titulado “La agricultura familiar: su relación con el abastecimiento alimentario a nivel familiar”. Si bien se trata de un estudio de caso en la sierra ecuatoriana, la autora analiza el rol de la agricultura familiar en el abastecimiento de alimentos para las mismas familias productoras, además de la producción para el mercado. Entre las estrategias desplegadas por las familias estudiadas, se destaca la importancia de las redes sociales y familiares, es decir del capital social que ayuda especialmente en el abastecimiento de alimentos para el grupo familiar. No obstante, otras estrategias como el trabajo fuera de la unidad productiva y la venta de productos en el mercado conforman la principal fuente de los ingresos familiares y por ende de la alimentación familiar.

Finalmente, el artículo “Censos y registros de la agricultura familiar en Argentina: esfuerzos para su cuantificación” presentado en la sección contrapunto, elaborado por Raúl Paz y Cristian Jara, muestra las dificultades de medición y cuantificación de la AF en el caso argentino, que obedece no solo a la heterogeneidad de los actores sino también a la especificidad de los territorios donde estos se insertan. Los intentos por cuantificar la agricultura campesina tienen sus limitaciones sobre todo en el nivel de representatividad de este sector. No obstante, muestran aspectos muy interesantes, como los datos sobre la importancia de los ingresos no agropecuarios de los Núcleos de Agricultores Familiares (NAF), que según los autores abren nuevamente el debate sobre los procesos de descampesinización. Las políticas públicas, concluyen los autores, para que sean eficaces deberían considerar las especificidades territoriales.

Sin duda la AF en Latinoamérica representa al grueso de los productores campesinos que carecen de políticas públicas adecuadas y de un rol proactivo del Estado para que este pueda consolidarse como un sector productivo y social estratégico en la coyuntura actual, donde la tierra y los alimentos se convierten en ejes estratégicos del futuro global. Los trabajos presentados en este número muestran el desafío que para los académicos y políticos tiene la dinámica de las agriculturas familiares, especialmente si se pasa desde consideraciones excesivamente teóricas a la realidad que se expresa en los territorios.

Luciano Martínez Valle
Sergio Schneider



Tema central

Agricultura familiar y soberanía alimentaria. Diversidades territoriales de las políticas públicas en Misiones y Buenos Aires (Argentina)*

*Family farming and food sovereignty.
Territorial diversity of public policies in Misiones
and Buenos Aires (Argentina)*

Mabel Manzanal, Mariana Arzeno, Federico Villareal, Fernando González, Mariana Ponce**

Fecha de recepción: agosto 2014
Fecha de aceptación: noviembre 2014

Resumen

Este trabajo presenta avances de una investigación grupal en la que se analizan políticas públicas que articulan agricultura familiar –AF– y seguridad y soberanía alimentaria –SSA– en Argentina a partir de la década de 2010. Desde esta temática se busca contribuir al conocimiento de la problemática del desarrollo y del territorio, basándonos en experiencias localizadas en las provincias de Buenos Aires y Misiones.

El artículo contextualiza y analiza el surgimiento de las políticas de AF y de SSA, así como sus diferenciadas modalidades de gestión e implementación en los casos seleccionados. Todo lo cual se dirige a poner en discusión las siguientes preguntas: ¿Qué rol se le asigna a la AF en la política de desarrollo rural? ¿Qué concepción de “soberanía alimentaria” se encuentra detrás de estas políticas?

Palabras clave: políticas públicas, agricultura familiar, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, Argentina.

Abstract

As part of an ongoing research project, this paper discusses public policies that link family farming (FF) and food security and sovereignty (FSS) which have been promoted in Argentina since 2010. The objective of this research is to contribute to knowledge about developmental and territorial issues, based on the study of experiences located in the provinces of Buenos Aires and Misiones.

The article contextualizes and analyzes the emergence of FF and FSS policies, as well as the differences in the ways in which they were managed and implemented in the cases selected. All of this raises the following questions: what role is assigned to FF in rural development policy? What conception of “food sovereignty” lies behind these policies?

Key words: public policies, family farming, food security, food sovereignty, Argentina.

* Este artículo se enmarca en el contexto del proyecto: “Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria. ¿Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Territorial? Estudios de caso en provincias argentinas”, dirigido por Mabel Manzanal, con financiamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBACyT 2011-2014, F154) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (PICT 2011-0836). Otros dos proyectos individuales se desarrollan vinculados al anterior: “Desarrollo y Territorio. Políticas públicas regionales y territoriales de Argentina. Estudios de caso en perspectiva histórica” dirigido por Mabel Manzanal, PIP-CONICET 00273, 2012-2014; y “Desarrollo rural, políticas públicas y territorio. Un análisis de las políticas públicas para la agricultura familiar y la seguridad/soberanía alimentaria en Misiones” dirigido por Mariana Arzeno, PIP-CONICET 00331, 2012-2014. Los autores agradecen a los dos pares anónimos que enriquecieron con sus comentarios el documento final del presente trabajo.

** Miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede de trabajo en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Correos electrónicos: mabelmanzanal@gmail.com; mariana_arzeno@yahoo.com; fv@agro.uba.ar; gonzalezjosefer@gmail.com; mariana.ponce@fibertel.com.ar

Introducción

En el presente trabajo consideramos que las políticas públicas para la agricultura familiar (AF) que se formulan en Argentina en particular (aunque también en otros países latinoamericanos) dirigidas a promover la seguridad y soberanía alimentaria, se enmarcan en un contexto nacional y mundial sumamente adverso para este sector socio productivo. Porque, más allá de la existencia de políticas específicamente pensadas para la AF, éstas no pueden contrarrestar los efectos y consecuencias negativas resultantes de la expansión de los *commodities*; que, por su propio peso y trascendencia nacional, conlleva al desplazamiento, expulsión y marginación de numerosas familias de agricultores y trabajadores rurales.

Desde luego que esto sucede en el marco de una gran diversidad de situaciones territoriales que requieren ser analizadas y diferenciadas. De aquí nuestro interés por investigar comparativamente casos representativos de tal heterogeneidad. Precisamente, las provincias de Buenos Aires y Misiones evidencian, a priori, modelos territoriales significativamente contrapuestos. Lo cual surge inmediatamente, apenas se observa el predominio de la AF más pobre en Misiones y la más capitalizada en Buenos Aires. Esta distancia se replica al detenernos en el modelo productivo tecnológico: agroindustrial en Misiones (tabaco, yerba mate y té) y sustentado en la producción de alimentos en Buenos Aires (hortalizas, carnes –bovina, porcina, aviar–, granos y lácteos).

Precisamente nos interesa mostrar estas disyuntivas, dando cuenta de *particularidades territoriales* que configuran similitudes, divergencias, contradicciones y oposiciones en la aplicación de dichas políticas públicas.

Antecedentes y contexto teórico-metodológico

Desde el inicio del segundo milenio, en América Latina en particular (aunque también en África y Asia) se sucedieron diversos cambios tecnológicos, productivos y de mercado vinculados con la agricultura, que intensificaron la producción y exportación de *commodities* agrícolas, con preferencia de especies vegetales destinadas a biocombustibles –caña de azúcar, maíz, palma aceitera, soja– y/o al engorde de ganado –soja, maíz. En este contexto, Argentina ha tenido una expansión notoria de la producción de soja (pasa prácticamente de no producir esta oleaginosa en la década de 1970 a participar en 2012 con el 17% de la superficie y de la producción mundial) (Manzanal, 2014).¹

1 En Argentina, en el crecimiento de la soja jugó un rol central la desregulación de la década de 1990. En particular, el decreto 2284 de 1991 que eliminó las juntas reguladoras (Junta Nacional de Granos, de Carnes, Dirección Nacional del Azúcar, etc.) y los sistemas de cuotas de producción y/o precios sostén de la actividad agropecuaria. Además, en esos mismos años, se introdujo la soja transgénica y la siembra directa (en 1996 se produjo la liberalización de la soja transgénica). Los incrementos productivos se vieron también impulsados por la suba de precios y de demanda. En los hechos, se conformó un contexto productivo, económico, climático y de innovaciones biotecnológicas, muy favorable, donde

Esta expansión de los *commodities* agrícolas se ha constituido en una oportunidad única, histórica, de importancia económica trascendental, tanto para los sectores hegemónicos del agro nacional, sumados a los intereses de las empresas vinculadas a la producción de insumos, tecnologías y biotecnologías, como para el gobierno nacional, al asegurarse crecientes recursos fiscales provenientes de las retenciones a las exportaciones de estos granos. Sin embargo, para el sector que nos ocupa, este modelo plantea una competencia por el uso del suelo y de los recursos naturales; significando, además, una pérdida de soberanía alimentaria.

Específicamente, la AF se enfrenta a: (i) La competencia por el uso de la tierra entre la producción de *commodities* y de alimentos. (ii) La destrucción de los sistemas productivos locales de alimentos básicos, componentes tradicionales de las dietas regionales. (iii) La transformación del espacio a favor de configuraciones territoriales más regresivas y dependientes del proceso de acumulación del capital global, financiero y especulativo. (iv) La consecuente expulsión de población, destrucción de fuentes de trabajo, depredación de suelos, contaminación ambiental y pérdida de la biodiversidad (Manzanal, 2014). En este marco se insertan las políticas para la AF dirigidas a promover la seguridad y la soberanía alimentaria. Pero esto a su vez sucede en ámbitos territoriales muy diferentes a lo largo de todo el país.

En el caso de las provincias de Buenos Aires y Misiones, el tipo de AF es diametralmente opuesto. Una aguda diferenciación se da entre una y otra, lo cual surge del análisis de la información procesada por Obschatko (2009) del Censo Nacional Agropecuario 2002 (último dato censal disponible).²

De este procesamiento surge que las explotaciones familiares bonaerenses son el 66% del total de explotaciones de Buenos Aires (y 13% del total nacional). Y lo que las caracteriza centralmente es que representan a las explotaciones de la AF más capitalizada del país (23% del total de explotaciones de ese tipo del país).

Por su parte, las explotaciones familiares de Misiones, se caracterizan por su alta participación provincial (91% del total de explotaciones misioneras pertenecen a la AF) y, fundamentalmente, porque esta AF es casi íntegramente pobre (85% de las explotaciones de la AF misionera es pobre, representando, asimismo, el 14% de las más pobres a nivel nacional).

En este contexto, y para un análisis en profundidad de la problemática, se recurrió a la selección de casos de estudio (municipios) en cada provincia. Dicha selección tuvo como referente original nuestra experiencia previa (sustentada en trabajos de investigación, material bibliográfico, censal, estadístico y entrevistas a informantes calificados a nivel nacional y provincial). La elección de los ámbitos locales se sustentó en un comienzo en un trabajo

gobiernos y empresas agropecuarias (especialmente en Argentina y Brasil) se posicionaron para promover y ampliar el área y la producción de soja (Manzanal, 2014).

2 Esta fuente aplica el concepto de AF a partir de la unidad censal EAP (explotaciones agropecuarias). Considera EAP Familiares a las dirigidas directamente por la familia y que no poseen más de 2 trabajadores no familiares remunerados permanentes. Las divide en 4 categorías que van de las más pobres (A) a las más capitalizadas (D). En este trabajo, y para facilitar la comprensión de los casos provinciales, se agruparon en dos grupos: A y B por un lado y C y D por el otro, considerando las primeras de menores recursos y las segundas más capitalizadas.

de campo, de carácter exploratorio, a partir del cual comprobamos que se necesitaba diferenciar los abordajes aplicados a cada territorio. Así, para Misiones, centramos la investigación en la respectiva política provincial y, en Buenos Aires, el análisis se volcó a la realidad local y municipal, pero en ambos casos investigando sus formas de articulación con el ámbito nacional. Con respecto a la información que producimos, la misma es mayormente de fuentes primarias (entrevistas, observaciones participantes), sin descartar la proveniente de fuentes secundarias.

La política pública nacional sobre desarrollo rural en Argentina, viene orientándose a fortalecer a la AF, otorgándole un rol central en la producción y provisión de alimentos para el mercado interno.



La cuestión de la agricultura familiar y de la soberanía alimentaria en las políticas públicas: conceptualización y diferentes abordajes según provincias

En los últimos años, la política pública nacional sobre desarrollo rural en Argentina, viene orientándose a fortalecer a la AF, otorgándole un rol central en la producción y provisión de alimentos para el mercado interno. En el presente, el rol de este sector de la producción agraria en la seguridad y soberanía alimenta-

ria constituye una “cuestión”, es decir, un tema socialmente problematizado que moviliza a distintos actores, genera variadas disputas e incide en la definición de las acciones concretas que el Estado adopta (Oszlak y O'Donnell, 1995).

Desde esta perspectiva, consideramos que las ideas que subyacen a las diferentes concepciones de agricultura familiar y de seguridad y soberanía alimentaria, provenientes de diversos ámbitos (Estado, organismos internacionales, organizaciones sociales) enmarcan proyectos políticos distintos que se necesita diferenciar (Arzeno et al, 2013).

En otras palabras, quiénes integran la AF, qué se entiende por ‘soberanía alimentaria’ y de qué manera la AF cumpliría un rol en la seguridad y soberanía alimentaria, delimitan un campo de negociación y disputa entre Estado, actores y organizaciones sociales.

En este marco analítico, AF es una categoría política, surgida de procesos de mediación y negociación entre diferentes actores. Como resultado de esa mediación se imponen significados amplios y ambiguos para el término (Neves, 2007).

Esto se complejiza aún más si tenemos en cuenta la enorme diversidad de casos y situaciones que se enmarcan bajo el término AF y otros que se utilizan como sinónimos o sustitutos (pequeño productor, unidad agropecuaria familiar).

Por su parte, seguridad y soberanía alimentaria aparecen más recientemente en expresiones oficiales. Sin embargo, hay cierta indefinición en relación a la concepción que sub-

yace.³ Lo cual resulta evidente en relación a “soberanía alimentaria” que, en algunos ámbitos específicos, se utiliza con más frecuencia, no explícitamente definida, aunque vinculada a la producción local de alimentos, revalorización de mercados locales y conservación y reproducción de semillas nativas.⁴

Esta mirada de la soberanía alimentaria a nivel local, concuerda con otra idea cada vez más difundida desde el ámbito público, relacionada con la identificación y posibilidad de convivencia armoniosa de “dos modelos de desarrollo rural”: uno encarado por el “agro-negocio” que continuaría garantizando la inserción argentina en el mercado mundial de alimentos y otro por el sector de la AF, a quién se le reconoce su capacidad de producir de manera diversificada y de proveer alimentos, dada su pequeña escala, en los ámbitos locales.

En este contexto, desde la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF) se propone promover la “soberanía alimentaria local y regional” a partir de la producción de la AF. Justamente el trabajo de campo y el análisis “territorial” de Misiones y Buenos Aires, busca interpelar y poner en discusión esta política, mostrando diferencias y contradicciones según ámbitos provinciales y locales.

En Misiones, la soberanía alimentaria cobra el carácter de “cuestión”, y en los últimos años adquiere centralidad en la agenda provincial de políticas, con distintas modalidades o grados de articulación con las políticas nacionales con intervención en la provincia (en particular aquellas definidas desde el ámbito de la SAF). Esta centralidad, sin embargo, se da en un contexto en el que se siguen promocionando actividades económicas consideradas centrales para el desarrollo provincial, que plantean múltiples contradicciones para la AF, en particular, en relación con la presión de este sector sobre el acceso a la tierra (Arzeno y Ponce, 2014). Dado que el tema de la tierra es de dominio provincial y uno de los ejes de movilización de las organizaciones de la AF (que reclaman tierra para la producción de alimentos), en nuestra investigación nos focalizamos en la política provincial con fines de soberanía alimentaria, observando qué concepción de soberanía subyace y cómo se expresa en las propuestas concretas. Este caso ejemplifica modalidades de gestión que se dan bajo el discurso de la soberanía alimentaria. Se trata de proyectos productivos que no siempre (o no necesariamente) se orientan a dar solución al tema de la producción y acceso a los alimentos de manera generalizada para la población e incluso se desentienden del fortalecimiento de la AF más pobre.

En cambio, en Buenos Aires, la seguridad y soberanía alimentaria no ha constituido una “cuestión” que amerite la incorporación explícita de la temática en la agenda política

3 Desde nuestra perspectiva abonamos las siguientes concepciones: “Seguridad Alimentaria” como el acceso físico y económico a suficientes alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias, concepción que tuvo consecuencias en las políticas de corte asistencialista que se llevaron a cabo durante las últimas décadas del siglo pasado (Manzanal y González, 2010). Y “soberanía alimentaria” como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción” (Vía Campesina, 2001). Este concepto incluye la idea de seguridad pero enfatiza en “cómo” lograrla, poniendo en cuestión el modelo agroalimentario vigente.

4 Por ejemplo, el Programa Pro Huerta y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar –CIPAF–, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA– y de la SAF.

provincial. Este escenario estaría generado, fundamentalmente, por dos situaciones: i) en la provincia históricamente se han producido más alimentos de los que se consumen, por lo que la soberanía no constituiría una *cuestión* con la suficiente relevancia para ser atendida por la política pública; y ii) la AF bonaerense presenta niveles de capitalización y especificidad productiva que la diferencian de otras provincias (no se la piensa como proveedora del mercado interno).

En Buenos Aires, al omitirse dentro de la discusión provincial estos temas, se delegó su abordaje en los gobiernos locales. Quienes, entonces, quedaron comprometidos en la articulación de sus acciones con el gobierno nacional. Y es por ello que, en este caso, tuvimos que dirigir la indagación hacia el ámbito local y municipal de las políticas vinculadas con la AF y la SSA.

Qué concepción de “soberanía alimentaria” se encuentra detrás de las políticas

En Misiones, la cuestión de la “soberanía alimentaria” cobra características particulares. Se trata de una provincia especializada en la producción forestal, yerbatera y tabacalera, con una fuerte presencia de productores familiares insertos en estas dos últimas actividades, dominadas por grandes empresas agroindustriales.⁵ Asimismo, es un territorio que presenta importantes niveles de concentración de las tierras, conflictos y una fuerte movilización social en torno a este tema, que constituye el nudo de la cuestión agraria de la provincia.

Por estas características, y por la vulnerabilidad que presentan los productores familiares misioneros, en lo que respecta al acceso a los alimentos en contextos de crisis productivas y de precios de la actividad yerbatera y tabacalera, el accionar orientado a promover la producción de alimentos para el autoconsumo, está presente en la provincia desde la década de 1990.

Sin embargo, es recién hacia el 2008 cuando se inicia, desde el ámbito estatal provincial, la orientación de una política (un conjunto de acciones, que se especifican más adelante) que promueve la producción de alimentos con el objeto explícito de alcanzar la “soberanía alimentaria”, otorgando un rol central a la AF, predominante en la estructura agraria misionera.

Se debe resaltar que, de todos modos, esta política se da en un contexto en el que se mantienen y continúan promocionando actividades que entran en conflicto con la AF, de manera más o menos explícita. Y esto sucede porque se trata de actividades que compiten por la tierra con la AF, como es el caso de la forestación y el turismo. O bien subordinan a la AF a una modalidad productiva y laboral en condiciones de elevada precariedad, como ocurre con el tabaco (Arzeno y Ponce, 2014).

5 De acuerdo con datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002, el 31% de la superficie implantada en la provincia corresponde a cultivos industriales, especialmente de yerba mate, té y tabaco, mientras que el 49% de la superficie corresponde a montes implantados, en particular con pinos. Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos –IPEC (2012), la agricultura, ganadería, granja y silvicultura representa el 9% del Producto Bruto Geográfico (PBG). En lo que respecta a las exportaciones de la provincia, el tabaco representa el 17% del total de exportaciones, el té el 19% y la pasta de papel el 31%, por lo que estos tres rubros aportaron el 67 % del total de exportaciones en 2011 (IPEC, 2012).

Concretamente, la idea de soberanía alimentaria que se promueve pone énfasis en el autoabastecimiento de alimentos a nivel provincial. De ahí que la política se dirige centralmente a diversificar la matriz productiva, a través de distintos instrumentos. En particular, caben destacar: (i) un programa de créditos –Programa Provincial de Producción de Alimentos– orientado a alentar distintas producciones; (ii) la apertura de mercados concentradores en algunas ciudades importantes para vender la producción misionera –Mercado Concentrador Zonal de Posadas y otros dos proyectados en las ciudades de Eldorado y Oberá; y (iii) la reactivación del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, organismo dependiente del Ministerio del Agro y la Producción de la provincia, que coordina el Mercado Concentrador y además financia emprendimientos, cooperativas, inversiones en infraestructura, entre otras acciones. Sin embargo, un análisis detallado de las ideas claves que subyacen y de las acciones que orientan esta política, permite observar que son ciertos sectores de la AF (con mayor disponibilidad de recursos) cuando no directamente medianos y grandes productores, quienes estarían participando más activamente (o con mejores resultados) de este proceso de diversificación, a los que se agregan algunas grandes cooperativas y empresas (Arzeno et al, 2013).

Lo anterior responde, en parte, a que se priorizan las actividades consideradas más rentables. Un caso representativo es el de la ganadería vacuna, una actividad fuertemente incentivada por el estado provincial y que se presenta como ejemplo de los resultados de la política implementada, aduciendo que se estaría por alcanzar el autoabastecimiento de carne.⁶ Nada se dice, sin embargo, acerca del modelo concentrado en que la misma se desarrolla (a través de productores más grandes) que, incluso, está generando conflictos por la tierra en diferentes zonas (como sucede, por ejemplo, con la ganadería).

Así, el discurso y accionar para la soberanía alimentaria de parte del gobierno provincial, aunque se dirige a todos los productores, se están haciendo de manera selectiva (favoreciendo ciertas producciones en las que sólo participan determinadas organizaciones y tipos de productores). También se observa que se favorecen ciertos procesos de concentración (organizaciones que pasan a controlar varias actividades dentro de una cadena productiva, como sucede con la producción de cerdos o lácteos; o con la ganadería, que tiende a centrarse en productores grandes, que van ampliando su escala de producción) (Arzeno, 2014).

Así, el discurso y accionar para la soberanía alimentaria de parte del gobierno provincial, aunque se dirige a todos los productores, se están haciendo de manera selectiva (favoreciendo ciertas producciones en las que sólo participan determinadas organizaciones y tipos de productores).



⁶ Este proceso de promoción y expansión debe enmarcarse en el contexto de corrimiento, por el avance de la soja, de la ganadería de la pampa húmeda hacia zonas no tradicionales de producción, entre ellas Misiones.

Esto nos permite ver que bajo una misma idea (indefinida, ambigua) se apela a un tema/concepto esencialmente político, conduciendo a políticas a favor de sectores que no son los más perjudicados de la AF, sino aquellos que son parte del modelo de desarrollo impulsado por el Estado (orientado a la diversificación productiva de productos de mayor rentabilidad e inserción en el mercado). Y a este modelo acceden de manera más competitiva quienes

cuentan con mejores condiciones económicas, en términos de disponibilidad de tierras y capital.

No deja de llamar la atención que esto suceda en una provincia con una fuerte movilización social en torno a la tierra y a la producción de alimentos como modalidad para promover un desarrollo rural alternativo y autónomo respecto de las agroindustrias (con presencia dominante en dos de las principales actividades económicas provinciales –yerba y tabaco). Lo cual da cuenta que cuando se habla de soberanía alimentaria, es importante tener en cuenta *quién lo enuncia* y en *qué contexto*, *qué significado* le otorga y fundamentalmente *qué acciones concretas* se llevan adelante.

Estos interrogantes adquieren una dimensión diferente al avanzar en el caso de Buenos Aires donde, como se anticipó, no identificamos una política pro-

vincial en torno al desarrollo rural en general y dirigida a la AF y la seguridad y soberanía alimentaria en particular. Sin embargo, sí reconocemos, a partir del análisis de las políticas públicas vinculadas con la AF y la seguridad y soberanía alimentaria, que la modalidad de transferencia de responsabilidades a favor de los actores locales (ONG, gobiernos municipales, organizaciones) se refiere a una descentralización focalizada en estas cuestiones. Porque, frente a la ausencia de políticas provinciales, los municipios han comenzado a diseñar e implementar medidas de gobiernos locales vinculadas a instituciones nacionales (Secretaría de Agricultura Familiar e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA) que, en algunas circunstancias, reconocen las demandas de los productores familiares relacionadas con una mayor soberanía alimentaria.

Sin embargo, aunque estas instituciones reconozcan la importancia de la participación de los agricultores familiares, las decisiones sobre las acciones de política relacionadas con este sector social, con la seguridad y soberanía alimentaria en la provincia de Buenos Aires, se encuentran condicionadas por el ‘consenso’ y las disputas a nivel local en torno de estas temáticas. Por ejemplo, la capacidad de la AF para promover políticas municipales acordes a su visión de soberanía alimentaria se enfrenta a quienes buscan imponer otros intereses en el ámbito local, vinculados a actividades de mayor rentabilidad (grandes productores locales, complejos agroalimentarios, servicios agropecuarios, emprendimientos inmobiliarios, entre otros).

La capacidad de la AF para promover políticas municipales acordes a su visión de soberanía alimentaria se enfrenta a quienes buscan imponer otros intereses en el ámbito local, vinculados a actividades de mayor rentabilidad.



En este sentido, creemos que a nivel provincial se privilegian estas últimas actividades, dejando las iniciativas vinculadas con la AF en un lugar secundario y a nivel local. Así, la soberanía alimentaria queda relegada al abastecimiento local de algunos productos. Por ejemplo, municipios bonaerenses como Tapalqué, Coronel Suárez y San Cayetano han desarrollado acciones tendientes a garantizar el abastecimiento en carnes y lácteos, en línea con propuestas generales de seguridad alimentaria y buscando alternativas que contengan el precio de los alimentos en un contexto inflacionario.⁷

En casos como el de Benito Juárez, se trata de la adecuación de instituciones anteriores (abastos municipales) a los nuevos requerimientos que la Secretaría de AF de la Nación establece para la provincia. Otros partidos realizan experiencias más vinculadas a la perspectiva de la economía social (Tres Arroyos, Florentino Ameghino). Y en la gran mayoría de los partidos donde esta Secretaría tiene inserción, se busca instaurar espacios de comercialización de la AF y Mesas de Desarrollo Local en los ámbitos del gobierno local. Pero en todos, dichas políticas deben ser cogestionadas con el municipio, a través de los agentes de desarrollo.

¿Qué rol se le asigna a la AF en la política de desarrollo rural?

Las políticas públicas dirigidas a la AF (con o sin fines de seguridad y soberanía alimentaria), en particular aquellas diseñadas desde el ámbito nacional, están orientadas hacia los agricultores que reúnen ciertas características pautadas por los Programas de Desarrollo Rural ejecutados desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las mismas se implementan a través de instrumentos que ya se venían utilizando (subsidios, microcréditos, créditos, asistencia técnica) pero siempre en el marco de lo que se define desde los programas de desarrollo rural. En este sentido, tanto en Misiones como en Buenos Aires, no siempre hay coincidencia entre el rol que demandan las organizaciones de la AF en las políticas de desarrollo con el que les es asignado y ejercen.

En el caso de Misiones, hay una gran cantidad y diversidad de organizaciones que nuclean a la AF, muchas de ellas son cooperativas (yerbateras, tabacaleras, tealeras, o bien azucareras, almidoneras, apícolas, etc.).⁸ Otras, en cambio, son organizaciones de pequeños productores que han surgido de la lucha por la tierra o a partir de la implementación de programas de desarrollo rural. En estos dos últimos casos es donde encontramos una discusión mayor respecto del tema de la seguridad y soberanía alimentaria. En la medida que su accionar se orienta fundamentalmente a desarrollar la producción de alimentos con vistas

7 En Coronel Suárez, en la localidad de Huanguelén, funciona un Frigorífico Municipal con el que se abastece a instituciones estatales. En Tapalqué se impulsa una batería de políticas que buscan producir lo que se consume a nivel local (Martínez, 2014; Hoffman y Taylor, 2013). En San Cayetano una Usina Láctea Municipal entró en funcionamiento en los últimos años. Benito Juárez amplía la compra del abasto municipal a productos de la agricultura familiar (cerdos, pollos).

8 Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, sólo bajo la figura de cooperativas agropecuarias hay registradas 171 organizaciones.

a generar alternativas de trabajo que permitan a los productores familiares independizarse de las agroindustrias, a las que se encuentran subordinados una parte importante de ellos.

Asimismo, las organizaciones asumen un rol en la producción de alimentos sanos con vistas a abastecer a la población. Esto se inserta, a su vez, en el contexto de la lucha por la tierra, puesto que su uso se disputa con empresas que se orientan hacia la exportación (en particular, forestales) cuando no adoptan un modelo especulativo o depredador.

Desde el ámbito público provincial, en cambio, se le otorga a la AF un rol fundamentalmente productivo. Y la participación de sus organizaciones sólo se da en comisiones técnicas con fines operativos, dirigida a canalizar los financiamientos (Arzeno et al, 2013). Por su parte, desde el ámbito público nacional, el rol asignado a la AF, en relación con la seguridad y soberanía alimentaria, es productivo pero también político.

En lo que se refiere al rol político, la delegación provincial de la SAF promueve, a través del FoNAF,⁹ que la AF en Misiones logre avances en la correlación de fuerzas con los sectores dominantes de los complejos agroindustriales yerbateros y tabacaleros (por ejemplo, en la disputa por la definición de los precios).

Sin embargo, más allá de cierta aparente coincidencia entre la política de la SAF en Misiones y las demandas de las organizaciones, la intervención concreta se lleva adelante a través de acciones muy puntuales y de los instrumentos que forman parte del repertorio estable de las políticas para el desarrollo rural (subsidios, microcréditos, asistencia técnica sobre temas específicos). Y todos éstos resultan muy limitados para abordar las múltiples problemáticas que enfrentan los productores y sus organizaciones, fundamentalmente en términos de acceso a distintos recursos económicos y a la tierra (Arzeno et al, 2013). Con lo cual, el rol que se le pretende asignar queda más en un plano discursivo que práctico.

En Buenos Aires, las organizaciones del sector manifiestan sus demandas hacia el Estado nacional y mantienen una visión crítica de estas políticas de desarrollo rural, según los resultados obtenidos en nuestras indagaciones en torno al rol que la AF asume y el que se propone en la política pública provincial (Villareal et al, 2013).

Por su parte, respecto a las organizaciones, si bien se reconocen diferentes tipos (como cooperativas, asociaciones civiles, empresas, etc.) hacemos referencia a las agrupaciones que han alcanzado un cierto grado de institucionalidad y manifiestan sus demandas hacia las políticas de desarrollo rural en diferentes ámbitos de decisión (local, provincial o nacional). Organizaciones de este tipo no tienen una larga tradición en la provincia de Buenos Aires, por lo que su importancia como actor de peso en las políticas de desarrollo resulta aún débil. Precisamente, son pocas las organizaciones que emergen como actores relevantes en el diseño de las políticas públicas (locales, provinciales y nacionales). Identificamos a la “Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares” como una de ellas. Dentro de

9 El FoNAF es un espacio que surge del diálogo y negociación entre las autoridades nacionales y organizaciones de la agricultura familiar para la representación de los agricultores familiares argentinos en el ámbito de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar –REAF– del Mercosur.

ésta, la “Asociación de Familias Productoras de Cañuelas” (en el municipio homónimo) y “Madre Tierra” (en el municipio de Tres Arroyos) son consideradas las más influyentes. En la mayoría de los municipios de la provincia se registran grados de organización menores, habiendo muchos municipios donde no hay organizaciones de la AF.

Estas organizaciones consideran que, como representantes de la AF, deben ejercer un rol predominantemente político. En tanto evalúan que constituyen un sujeto capaz de lograr cambio social, tanto a través de acciones de reivindicación política, como a partir de la revalorización y difusión de conocimientos y prácticas culturales, desde las cuales podrían generarse alternativas viables al agro-negocio y a la profundización del capitalismo (Villarreal et al, 2013). Para estas organizaciones, la soberanía alimentaria es democratización de los recursos naturales, defensa de las semillas criollas y lucha contra los agrotóxicos.

En cambio, desde las instituciones nacionales de desarrollo rural, con presencia en municipios de la provincia, es otra la orientación que se identifica respecto al accionar político-participativo de los agricultores familiares. De este modo, se promueve su participación en el FoNAF considerando que cualquier cambio o mejora se da en el marco de la intervención de los agricultores en el diseño y administración de las políticas públicas; promocionando desde lo productivo, la comercialización de excedentes en el mercado local.

En estos ámbitos institucionales, donde el componente productivo cobra mayor relevancia, se propone a la AF como proveedora de alimentos para el mercado, impulsando mejoras en sus técnicas de producción en sentido amplio, donde se toman en cuenta cuestiones ambientales, sociales, productivas y económicas.

Desde el gobierno local, por su parte, si bien suele tener una influencia menor en el diseño técnico de la política, se evidencian con más claridad la oposición entre actores de poder por cuestiones vinculadas con el rol asignado a la AF. Se trata de demandas provenientes, por ejemplo, del agro-negocio, de los sectores inmobiliarios y turísticos, entre otros. Es común que en estos casos el Estado municipal opere como mediador entre los intereses contrapuestos que se dan en este contexto.

En Buenos Aires, el rol asignado a la AF en municipios bonaerenses está principalmente ligado a la provisión de soluciones productivas o de mejoras en la comercialización. Por el contrario, una política que promueva la fortaleza de la AF en la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria aparece de manera aislada o como caso puntual.

**Para estas organizaciones,
la soberanía alimentaria
es democratización
de los recursos naturales,
defensa de las semillas
criollas y lucha contra
los agrotóxicos.**



Reflexiones finales

El abordaje realizado respecto a la política de seguridad y soberanía alimentaria relacionada con la AF evidencia claramente, en los casos de las provincias de Misiones y Buenos Aires, la importancia de la perspectiva “territorial” en el diseño, análisis e investigación de la política pública. Este enfoque da cuenta de restricciones territoriales, tanto de carácter estructural

como coyuntural, que de otro modo quedarían desdibujadas u ocultas detrás de variadas generalizaciones.

Los actores, instituciones y organizaciones nacionales, provinciales, municipales, locales, su fortaleza, debilidad y/o poder, operan diferencialmente en cada contexto espacial. Y ello determina procesos y consecuencias frecuentemente impensados de las políticas públicas.

Desde esta perspectiva, en el caso de Misiones observamos que la soberanía alimentaria es una “cuestión socialmente problematizada” y que es interpretada y definida diferencialmente por los actores. Esto sucede en el marco de un amplio predominio de la AF en situación de vulnerabilidad social y económica, de concentración y conflictos por la tierra y de fuerte movilización social. Mientras, desde el ámbito público provincial, se promueve una política activa orientada a incrementar la producción de alimentos. Sin embargo,

y bajo esta misma política, se generan procesos de concentración económica y de tierras, que operan en contra de los intereses de la AF. Lo cual resulta de la promoción de actividades que son incluidas por su mayor rentabilidad en términos de mercado (en particular, carne vacuna y de cerdo, cítricos, stevia, entre otras) pero ligadas a una concepción de soberanía alimentaria diferente a la sostenida por las organizaciones de la AF. Se trata de la perspectiva que enfatiza el autoabastecimiento de alimentos a nivel provincial y que deja en segundo plano (o desconoce) otras variables significativas (como la distribución de la tierra, la participación de las organizaciones).

En otros ámbitos de decisión política, como la SAF o el FoNAF, se promueve el fortalecimiento productivo, el asociativismo y el cooperativismo, como formas de potenciar la producción de alimentos. Sin embargo, se trata de acciones muy puntuales y herramientas muy limitadas, que no terminan resolviendo la cuestión crucial para la AF, centrada en el acceso a la tierra y a mayores recursos económicos.

En el caso de Buenos Aires, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria aparece especialmente ligado con la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria no constituye

Los actores, instituciones y organizaciones nacionales, provinciales, municipales, locales, su fortaleza, debilidad y/o poder, operan diferencialmente en cada contexto espacial. Y ello determina procesos y consecuencias frecuentemente impensados de las políticas públicas.



una cuestión que amerite su inclusión en la política pública provincial. En este contexto, y de acuerdo a los lineamientos de la política nacional en la provincia, se desarrollan acciones puntuales a escala local, como frigoríficos municipales o usinas lácteas, que se presentan desarticuladas a nivel provincial.

Esta vinculación coyuntural con los temas de seguridad y soberanía alimentaria podría explicarse por tratarse de una provincia autosuficiente en lo que respecta a la producción de alimentos y en donde predomina el agro-negocio. La soberanía alimentaria no emerge como una “cuestión” que deba ser problematizada y sólo se activa su significado político cuando el acceso a los alimentos de ciertos sectores se encuentra amenazado.

Podríamos considerar que la política provincial se manifiesta “por omisión”, dado que no se diseñan ni se implementan acciones coordinadas en este sentido. En parte, esto se debe a la ausencia de organizaciones de la AF capaces de promover políticas provinciales que incluyan sus demandas. En tanto, hacer efectivas las mismas, implicaría enfrentarse con los intereses de los grandes productores (pools de siembra, financieras locales y regionales, entre otros), los complejos agroalimentarios, sus estructuras de integración vertical y los servicios agropecuarios, directamente vinculados a las grandes empresas proveedoras de semillas y agro tóxicos.

En este contexto, donde el sector más desfavorecido de la AF queda relegado frente a una estructura productiva que se consolida en la producción de *commodities* (especialmente soja, para el mercado internacional) las políticas de apoyo a la AF y a la seguridad alimentaria promovidas por los municipios quedan en un segundo plano y tienden a repetir, y no revertir, las mismas modalidades que llevaron a una situación de desigualdad y exclusión.

Por último, debemos subrayar que en cada caso corresponde diferenciar las propuestas territoriales, sabiendo a priori que no es lo mismo aquella que provenga desde las organizaciones de productores comprometidas con la idea de aquella soberanía alimentaria como autonomía, que la que surja desde los Estados, donde en las disputas de intereses la presión a favor de los sectores dominantes suele terminar ganando la pulseada.

Y asimismo, importa reconocer que si bien en ambas provincias hay acciones explícitas tendientes a favorecer el rol de la AF como proveedora de alimentos, el margen de acción que tienen estas iniciativas es escaso frente a un modelo de desarrollo que promueve la reprimitización de la economía y que aparece como alternativa predominante en el territorio, especialmente frente a las oportunidades que surgen del contexto mundial caracterizado por la fuerte demanda de *commodities*.

En pos de una transformación socialmente más progresiva, es necesario recordar que esta oposición entre AF y agronegocios es una realidad que incumbe no sólo a Argentina, se extiende a Latinoamérica, y más. Lo cual nos habla del alcance del problema y consecuentemente de la magnitud de las redes de poder de los sectores que ejercen la dominación, pero también de la importancia de consolidar y ampliar las redes de construcción de resistencia desde las organizaciones que defienden la AF y la soberanía alimentaria.

En otras palabras, imponer a la AF como proveedora de alimentos exige, además de políticas tecnológico-productivas y de comercialización, conformar redes de poder que sumen aliados (a distintas escalas espaciales y sectoriales) y adherir a los movimientos sociales organizados a favor de la AF, tanto del orden nacional, como regional y mundial.

Bibliografía

- Arzeno, Mariana (2014). “El territorio en las políticas públicas dirigidas al logro de la “soberanía alimentaria”. Reflexiones sobre el caso de Misiones.” *Terceras Jornadas Nacionales de Investigación y Docencia en Geografía Argentina*, mayo de 2014. Tandil.
- Arzeno, Mariana y Mariana Ponce (2014). “Las contradicciones de las políticas públicas: desarrollo territorial en Misiones, Argentina”. En: *Revista Cuadernos del Cendes* N° 85. UC de Venezuela.
- Arzeno, Mariana, Rocío Deheza, Lucila Muñecas y Aymara Zanotti (2013). “Seguridad y soberanía alimentaria en Misiones. Discusiones en torno a su construcción desde las políticas públicas y las organizaciones de la AF”. En: *VIII Jornadas Interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales*, UBA, noviembre 2013. Buenos Aires.
- Hoffman, Julio y Jorge Taylor (2013). “Modelos de desarrollo y políticas públicas: Matorero municipal de Tapalqué”. En *III Jornadas de Agricultura Familiar de la UNLP*. Facultad de Ciencias Veterinarias. Buenos Aires
- IPEC (2012). Gran Atlas de Misiones. IPEC, Pcia de Misiones, Posadas.
- Manzanal, Mabel (2014). “Territorio, desigualdades y relaciones de poder. Producción del espacio y procesos de sojización en el Cono Sur latinoamericano: el caso argentino”. XIII Seminario RII, UF de Bahía.
- Manzanal, Mabel y Fernando González (2010). “Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar. Oportunidades y desafíos del caso argentino”. En *Realidad Económica* N° 255, Diciembre 2010. IADE, Buenos Aires.
- Neves, Delma Pessanha (2007). “Agricultura Familiar: quantos ancoradouros!” en: Obschatko, Edith de (2009) *Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina: un análisis a partir de los datos del Censo Nacional agropecuario 2002*. MAGyP, IICA, Buenos Aires.
- Oszlak, Oscar y Guillermo O’ Donnell (1995). “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación” en *Redes*, Vol. 2, Núm. 4, UNQui, Quilmes.
- Vía Campesina (2001). *Declaración Final del Foro Social Mundial sobre Soberanía Alimentaria*, septiembre 2001, La Habana, Cuba.
- Villareal, Federico, Paula Acero Lagomarsino, Nicolás Navós López y Carmen Varela (2013). “El rol de la Agricultura Familiar Organizada en las políticas públicas de desarrollo rural. Casos en provincia de Buenos Aires”. En *VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales*, FCE, UBA, noviembre de 2013. Buenos Aires.

La agricultura familiar entre proyectos nacionales de desarrollo

Family farming between national development projects

María Fernanda de Torres Álvarez*, Pedro Arbeletche**, Eric Sabourin***, Joaquin Cardelliac Gula**** y Gilles Massardier*****

Fecha de recepción: septiembre 2014

Fecha de aceptación: diciembre 2014

Resumen

En los últimos diez años, Uruguay transita por la implementación de políticas públicas que buscan ampliar la capacidad colectiva sobre las formas de ordenamiento territorial, los recursos del Estado y las relaciones con el medio vivo. El mismo impulso produce políticas específicas de reconocimiento y apoyo a la agricultura familiar, como actor fundamental de un futuro rural al que se aspira, con mayor justicia y preservación de una forma de vida rural. Sin embargo, el diseño de ese proyecto compite con otra realidad de la modernización del agro, determinada por la agricultura empresarial en gran escala y la minería, donde la irrupción de grandes capitales no deja mucho espacio para la participación colectiva. El artículo muestra el caso de un país pequeño, con perspectivas agropecuarias, que ha iniciado en la última década políticas específicas hacia la agricultura familiar y la descentralización, pero que tiene que coexistir con una política económica que privilegia todavía a los grandes capitales.

Palabras clave: políticas públicas, agricultura familiar, agricultura agro-industrial, descentralización, territorialización.

Abstract

During the last ten years, Uruguay has pursued public policies aimed at expanding the collective capacity to decide about forms of land use planning, shaping relationships with the environment, and access to public resources. The same impulse has generated specific policies of recognition and support for family farming as a key component of a rural future with greater justice and the preservation of the rural lifestyle to which we aspire. However, the design of this objective competes with another reality of agricultural modernization, determined by corporate agriculture and mining, where the emergence of large-scale capital does not leave much room for collective participation. This article presents the case of a small country, with agricultural potential, that initiated specific policies to support family farming and decentralization during the past decade, but those initiatives have to coexist with economic policies that still favor big business.

Key words: public policies, family farming, corporate agriculture, decentralization, rural territories.

* Universidad de la República (UDELAR), Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo. Correo electrónico: mfdetorres@gmail.com

** UDELAR, Facultad de Agronomía, EEMAC, Paysandú. Correo electrónico: arbe19@hotmail.com

*** CIRAD/ART-Dev y Universidad de Brasilia-UnB, Centro de Desarrollo Sostenible –CDS, Brasil. Correo electrónico: eric.sabourin@cirad.fr

**** UDELAR, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo. Correo electrónico: joaquin.cardeillac@gmail.com

***** CIRAD/ART-Dev, Montpellier, Francia. Correo electrónico: gilles.massardier@cirad.fr

Introducción

El paisaje agrario cuenta con 175 000 personas viviendo en lugares dispersos, esto es, en los establecimientos rurales o en pueblos de menos de 5 000 habitantes, en una superficie que alcanza las 16 millones de hectáreas.



En Uruguay, la preocupación por definir el tipo de población rural que acompañe los proyectos nacionales de desarrollo ha estado presente en la agenda del gobierno nacional, ya sea, imaginando paisajes modernizados envueltos en el modelo civilizatorio europeo o en la conservación de los grandes establecimientos de la ganadería extensiva (Moraes y de Torres, 2013). Si bien, no es hasta principios del siglo XXI que se diseñan políticas específicas para la agricultura familiar, la misma población ha recibido atención por dos vías. Por un lado, están las políticas que buscan reducir la pobreza rural, a través de la mejora de la vivienda, la salud y la regulación del trabajo agrario. Por otro lado, se busca ensayar territorios poblados de unidades pequeñas y medianas de producción, donde se practiquen las tecnologías producidas por la ciencia agronómica, asegurando el acceso a la tierra mediante una cartera de tierras fiscales.

A pesar de la existencia de la gremial rural que representa actualmente la agricultura familiar, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) desde 1915 como nucleamiento del minifundio, y

donde ya se reivindicaba la modernización del territorio a través de políticas específicas de transferencia de tecnología para desarrollar las fuerzas productivas. La categoría de agricultura familiar aparece en la década de los ochenta y noventa (Astori, 1984; Piñeiro, 1985) y recientemente, con los gobiernos de izquierda, logra posicionarse como un actor legítimo para la negociación de recursos públicos.

La agricultura familiar sigue siendo una forma de colonizar el territorio nacional. En efecto, la población rural más estable ha sido tanto los agricultores familiares como los asalariados rurales, que se han desplegado en más de 16 millones de hectáreas. El paisaje agrario cuenta con 175 000 personas viviendo en lugares dispersos, esto es, en los establecimientos rurales o en pueblos de menos de 5 000 habitantes, en una superficie que alcanza las 16 millones de hectáreas. Los asalariados rurales, según el Censo del 2011, son 68 200, lo que aún dibuja un campo donde no se encuentra mucha población humana. Éste panorama, aunque aproximado, alcanza a mostrar el devenir del medio rural en relación a las ciudades atractoras del contingente poblacional y al mismo tiempo, resalta la pertinencia de la agricultura familiar como forma de sostener un poblamiento deseado del territorio nacional, aspectos de soberanía, cuidado del territorio, entre otros. Las controversias han

estado colocadas en relación a cómo hacer un *buen lugar* del territorio nacional, ofreciendo a toda la población un buen vivir, analizando colectivamente los límites del desarrollo y el lugar de los espacios rurales.

Reconocer para poder moldear: avances y límites de la política pública para la agricultura familiar

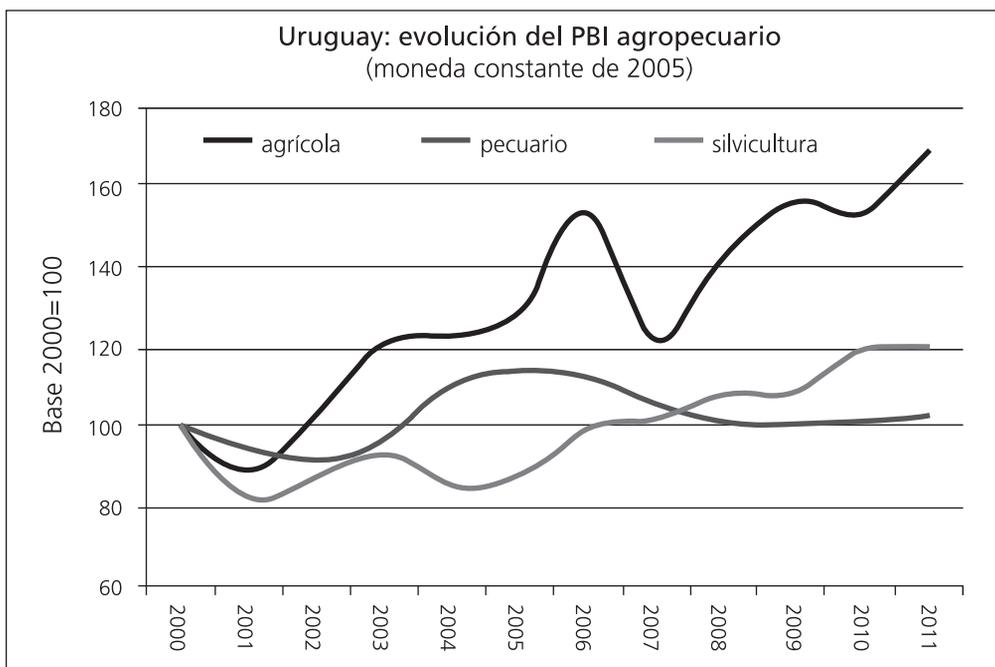
Contexto histórico

La adopción de una categoría analítica traída desde las ciencias sociales por la política pública, tuvo que recibir el impulso de la región (Brasil y Argentina) para comenzar a ser incorporada dentro de las agendas del desarrollo nacional. En efecto, la creación de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 2003 y la incorporación de un eje de investigación sobre agricultura familiar por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), fue decisivo en el proceso de la descentralización agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la cual participan organizaciones de base de productores agrarios.

Es en el contexto de crecimiento agrario, caracterizado por la concentración de tierra y con un negocio agropecuario con fuerte presencia de capitales extranjeros, que se inicia la opción de una política específica para la producción familiar. Si bien la gremial que representa a la producción familiar ha buscado constituirse como actor y objeto legítimo de las políticas públicas, incluso en una política de apertura irrestricta de los mercados, es recién en el contexto actual y con el gobierno de izquierda que consiguen obtener la atención del gobierno. El presidente de la CNFR señaló recientemente que por primera vez en su historia de 15 años de militante, y probablemente en la historia de la organización, fueron recibidos por el Presidente de la República, José Mujica, con agenda abierta y sin hora de finalización¹. En efecto, el peligro de la extinción de la población rural y de la pequeña producción es proporcional a la fuerza de los capitales agrarios y financieros que irrumpieron en el territorio nacional.

1 En entrevista realizada en CNFR, a cargo de María Fernanda de Torres Álvarez, agosto de 2013.

Gráfico 1. El peso de los cultivos en el PIB agropecuario



Fuente: OPYPA en base a BCU

Como muestra el gráfico 1, la agricultura es el sector de mayor dinamismo. Entre 2001 y 2011, el PBI agrícola creció a una tasa media anual de 6,7%, superior al crecimiento anual de 3,8% del sector forestal y al 0,8% anual del sector pecuario. Como consecuencia, se modifica la importancia relativa de las distintas actividades, creciendo notoriamente el peso de la agricultura en el PBI sectorial, pasando de 22% en 2001 a 32% en 2011. El otro rubro que muestra crecimiento es la forestación, ocupando entre ambos rubros, agricultura y forestación, 3,3 millones de hectáreas. Este crecimiento en superficie ha resultado en una transformación de los paisajes y la vida rural.

Aun cuando el crecimiento de la agricultura y la forestación transformó la economía y buena parte de los paisajes rurales, la superficie nacional sigue siendo mayoritariamente ocupada, según el Censo General Agropecuario del 2011 (MGAP-DIEA, 2013), por la ganadería. En efecto, los productores que tienen como primera fuente de ingreso a uno de los tres principales rubros de producción animal o a uno de los dos principales rubros de producción vegetal, ocupan casi el 97% de la superficie agropecuaria del país. Este proceso de expansión del PBI agropecuario se caracterizó a su vez, por un aumento de la concentración de la tierra, donde el 56% de los productores ocupan menos del 4,5% de la tierra y en contraposición el 2,3% de productores ocupa el 33% de la misma (Cuadro 1), y por las ventas y arrendamientos de las tierras a sociedades anónimas (Piñeiro, 2011). Como conse-

cuencia de esta expansión, se incrementaron los precios de la tierra, llevándolos a los niveles de los países de la región, complicando la competitividad de los pequeños productores. Sin embargo, las demandas de las organizaciones rurales no fueron tan radicales, debido a que también significó la revalorización de su propio capital (Piñeiro, 2011).

Cuadro 1. Número de explotaciones y superficie explotada, según tamaño de la explotación

Tamaño de la explotación (ha)	Explotaciones		Superficie explotada		
	Total	%	Total (ha)	%	Hectáreas por explotación
Total	44 890	100	16 227 088	100	361
1 a 19	12 274	27,3	104 696	0,6	9
20 a 99	12 657	28,3	632 564	3,9	50
100 a 199	5 540	12,3	790 426	4,9	143
200 a 499	6 473	14,4	2 078 220	12,8	321
500 a 999	3 808	8,5	2 680 466	16,5	704
1 000 a 2 499	2 970	6,6	4 493 059	27,7	1 513
2 500 y más	1 168	2,6	5 447 657	33,6	4 664

Fuente: Censo General Agropecuario 2011.

Finalmente, al tiempo que los nuevos capitales agrarios y financieros que transformaron el paisaje nacional y generaron alertas para la soberanía por la concentración y extranjerización, también subrayaron la vulnerabilidad de la sostenibilidad de la población rural. La reconfiguración de las formas de habitar el campo, cada vez más concentrado en pequeñas y medianas ciudades (Cardelliac, 2013), ubica a la población de productores familiares como actor privilegiado para sostener la colonización del territorio nacional.

Una política basada en la definición de la categoría Agricultura Familiar

Lo primero fue establecer, con el impulso de la REAF y de los países de la región, una medida y definición de la agricultura familiar, para poder diseñar políticas específicas que busquen disminuir la desigualdad y apoyar un modelo de producción que sostiene y forma a la población rural, y que se postula como una alternativa al modelo de expansión del capitalismo agrario, o por lo menos, a una segunda vía capaz de coexistir con él.

Este tópico, que ha sido largamente discutido en la academia (ya sea desde la perspectiva marxista como desde otras perspectivas), ha quedado relativamente circunscripto al ámbito académico y no fue interrumpido hasta hace aproximadamente una década, don-

de es posible encontrar un resurgir de la problemática (Fernández, 2002; Piñeiro, 2004; Rossi, et al, 2008), seguramente vinculado al nuevo contexto político institucional y a la relevancia de la misma para las nuevas políticas orientadas al desarrollo.

A partir de aquella discusión, así como de los debates y opciones que se han tomado en la región (Scheinkerman, et al, 2007; Scheinkerman, 2009) en el 2004, la producción familiar fue definida mediante una serie de atributos que deben poseerse conjuntamente para obtener

el reconocimiento y el acceso a los recursos públicos: i) realizar la actividad productiva con la colaboración de hasta dos asalariados permanentes, o su equivalente en jornales zafrales (500 jornadas); ii) residir en la explotación o a una distancia no mayor a 50 km; iii) explotar un total de hasta 500 hectáreas CONEAT 100² bajo cualquier forma de tenencia; y iv) obtener su principal ingreso de la actividad y/o cumplir la jornada laboral en la explotación.

A partir de ésta definición el MGAP realizó en 2004 un relevamiento de la producción familiar, definiendo la existencia de 39 120 establecimientos que ocupan el 25% del territorio productivo y que participaban de una cuarta parte del Valor Bruto de Producción (OPYPA, 2005). Aquel estudio identificó que la gran mayoría de la producción familiar está dedicada a la ganadería (79%), lechería (11%)

y horticultura (12%); y se constató que no se contratan asalariados de forma permanente (85%) ni zafrales (78%), es decir, que utilizan principalmente el trabajo familiar en los predios donde residen (MGAP, 2013)

La definición no pasó sin controversia, tanto sea en relación a los atributos específicos definidos antes, como por el concurso para la obtención de los recursos públicos (que al mismo tiempo es bien amplio). Piñeiro (2005) señala que la principal controversia está en el tamaño de la explotación, es decir, una variable continua donde se traza un límite arbitrario, de manera que según el tipo de actividad que se realice podría ser un mediano productor (ganadería en suelo superficial) o uno grande (horticultura). En otro orden, la caracterización del productor como *familiar* excluye, por oposición, a otro conjunto de productores, que por no cumplir con todos los atributos antes señalados, no son reconocidos con el adjetivo.

A pesar de las diferencias, el MGAP inició un Registro de Productores Familiares auto-identificados, a partir del cual se revitaliza la idea de una creciente pérdida de productivo-

En otro orden, la caracterización del productor como *familiar* excluye, por oposición, a otro conjunto de productores, que por no cumplir con todos los atributos antes señalados, no son reconocidos con el adjetivo.



2 Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra.

res familiares, que ahora son 21 038³. Los datos recabados muestran un envejecimiento de esta población, con una edad media de 53 años. De las 65 629 personas que viven en las explotaciones familiares, el 53% son mujeres y 47% varones, lo que revierte la tendencia de la población rural dispersa relevada en el Censo de Población del 2011 (INE, 2014). En cuanto a la superficie, los productores auto-identificados como familiares que integran el registro en 2013 acumulaban 1 642 111 hectáreas. Si se analiza la distribución por tamaño, se observa que el 40% trabaja 20 hectáreas o menos, el 25% de 50 a 100 hectáreas, el 20% de 20 a 50 hectáreas, el 11% de 100 a 300 hectáreas, y solo el 3% más de 300 hectáreas (MGAP, 2013).

Otro aspecto sustantivo para comprender el fenómeno de la producción familiar son las relaciones de producción. Al respecto, el 85% de los productores familiares que componen el registro no contrataron ningún asalariado permanente, el 14% contrató un asalariado permanente y solo el 1% contrató dos. Si se analizan los jornales contratados, se observa que el 79% no contrató jornales, el 5% contrató de 1 a 100 jornales, el 14% contrató de 100 a 350 jornales y el 2% contrató más de 350 y menos de 500⁴ jornales. En relación con la residencia, los datos del registro muestran que el 77% de los productores identificados residen en el predio, mientras que el resto lo hacen fuera (MGAP, 2013).

Por último, cabe señalar que la producción familiar implica una transferencia de generación a generación. Así, uno de los elementos que caracterizan a la producción agropecuaria en Uruguay, como en el resto del mundo, es que, a diferencia de la mayoría de los sectores de la economía, usualmente los negocios se traspasan a la interna de la familia (Mishra et al, 2010). Esto implica que al heredar la propiedad se asume también una identidad, que centra la actividad en la persona. En efecto, en el caso de Uruguay la herencia del establecimiento comienza con la designación de un sucesor, que habitualmente es varón (Malán, 2008; Gallo y Peluso, 2013). A pesar de esta modalidad de formación, de enseñar el gusto por la tarea del campo, no siempre los jóvenes optan por continuar el proyecto familiar.

Al respecto, dos fenómenos recientes conspiran contra la opción por permanecer en la producción familiar. Por un lado, la prolongación de la esperanza de vida, sumado a la ausencia de incentivos al retiro (en general, las jubilaciones rurales son extremadamente bajas) que posterga la salida de la producción de los responsables actuales de la explotación. Esto aumenta el costo para los potenciales herederos, que ven prolongarse el “tiempo de espera” hasta la asunción plena de las responsabilidades laborales, que en el caso de la producción familiar, se asocian a la conformación de un hogar (Gallo et al, 2011; Cardeillac y Juncal, 2014). Por otro lado, el contexto de crecimiento de Uruguay ha generado muchas oportunidades de empleo fuera del sector agropecuario, lo cual es un factor adicional que eleva el costo de oportunidad de permanecer en la producción familiar.

3 Como el formulario prevé la posibilidad de que exista más de un titular por predio, el número de personas físicas “productores familiares”, en tanto que titulares de explotaciones, asciende a 23 103.

4 De la definición oficial de productor familiar se deriva que 500 jornales equivalen a 2 asalariados permanentes.

Por estos motivos, la sucesión y transferencia intrafamiliar de las explotaciones es, sin dudas, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de productores familiares.

Modelo productivo liberal vs preservación ambiental y territorialización

A partir del diagnóstico de la población, y en función de las prioridades del gobierno (mejorar las condiciones de igualdad en el agro y la conservación del modelo familiar), se trazan estrategias para mejorar la competitividad e integración a las cadenas productivas de esa categoría. En esta clave, el diseño de la política pública busca desarrollar una pedagogía hacia la racionalidad empresarial para impregnar a los predios familiares, sostenidos en concepciones desarrollistas ya diagnosticadas en la segunda mitad del siglo XX por organismos Latinoamericanos y nacionales de análisis de la economía (CEPAL, Instituto de Economía de UDELAR, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico).

La novedad de este siglo ha sido la voluntad del gobierno de transversalizar las políticas y descentralizar el Estado en el territorio nacional. Es en el periodo actual de gobierno que se aprobó la Ley 18126 de Descentralización y Coordinación de las Políticas Agropecuarias con Base Departamental. La misma crea tres órganos: el Consejo Agropecuario Nacional (CAN), los Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural (MDR). El CAN es presidido por el MGAP y reúne al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al conjunto de las instituciones agropecuarias (INAC, INAVI, INASE, INALE, INIA, IPA, INC). Cada una de esas instituciones, integradas por miembros del Poder Ejecutivo y del sector privado, junto a representantes de gremiales rurales e industriales, coordina sus acciones con la política pública en dicho consejo. Esta institucionalidad es una novedad en el modo de conducción de las instituciones que tenían, hasta entonces, márgenes de libertad, hasta para apartarse de las prioridades definidas en las políticas públicas.

Sin embargo, la inversión y el grado de compromiso del presupuesto nacional son todavía escasos. En un país pequeño, con agricultores familiares relativamente menos pobres que en el resto de América Latina, la mayoría de las políticas públicas dirigidas a la producción familiar están financiadas por organismos internacionales, que generan compromisos de largo plazo de deuda pública. En efecto, las redes de actores locales y las agendas internacionales, han incorporado en el territorio nacional un conjunto de leyes que buscan por un lado, controlar el crecimiento económico en términos de costos ambientales (Ley de Suelos, Ley de Aguas, entre otras) y de ampliar la participación en la planificación colectiva de los territorios (Ley de Ordenamiento Territorial). Al mismo tiempo, se ensaya la transversalidad de las políticas (Descentralización del Desarrollo Rural y de la administración regional y municipal), esto es, con mayor coordinación de la acción y la planificación entre las distintas carteras de gobierno, y en algunos casos, hasta allí donde antes no había entendimiento.

El país, siendo abierto a las inversiones de capitales extranjeros, que intensificaron la productividad de la tierra por medio de la agricultura de secano y la forestación, encontró necesario realizar movimientos hacia la mitigación del daño en el suelo y sobre los recursos naturales. En efecto, por una parte la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que busca poner un límite colectivo de la explotación tolerable, que fue votada en 1981, regulada en 1990 y solo tomó fuerza en el 2008 para ser aplicada únicamente en formato piloto en el 2012 y generalizarse a partir del 2013, a través de planes de manejo para la agricultura de secano de más de dos mil hectáreas. La trayectoria de la ley ha sido objeto de resistencias de los gobiernos anteriores, así como del lobby agro-empresarial y de la minería. Pese a tener el impulso necesario, aún sufre el freno de la capacitación de los técnicos de campo y el lograr la efectiva fiscalización. Por otra parte, el aumento de las prospecciones mineras en todo el país pone en evidencia la falta de coordinación dentro del gobierno en relación al cuidado del suelo y los recursos naturales.

Por otra parte, la Ley de Aguas crea una nueva institución, la Dirección Nacional de Aguas, dentro del Ministerio que se ocupa del Medio Ambiente, para concentrar la planificación sobre este recurso, antes disperso en varias instituciones de gobierno. Se prevé la regulación en los Consejos Regionales de Recursos y Comisiones de Cuencas, como órganos deliberativos y asesores, que recientemente comenzaron a funcionar. La articulación entre los niveles de participación produce malentendidos y tensiones, que permiten ajustar y mejorar las herramientas. De hecho, este nuevo modo de políticas públicas exige mucha más institucionalidad y mayores esfuerzos de coordinación.

En relación al mercado de tierras, Uruguay ha revitalizado el Instituto Nacional de Colonización encargado de una política de acceso a la tierra fiscal que, desde el 2006, innovó en modalidades colectivas de manejo y uso de la tierra (en régimen de arrendamiento a privados e instituciones públicas). Una prioridad para el otorgamiento de tierras está en los asalariados rurales, en forma individual, pero también colectiva (por ejemplo sindicato de trabajadores de la caña de azúcar y cítrícolos) y a los productores familiares, favoreciendo a las titulaciones femeninas⁵.

5 Si bien esta no es una política explícita del INC, sí es una práctica en la asignación de tierras (INC, 2013, entrevista realizada por María Fernanda de Torres Álvarez, agosto 2013).

El país, siendo abierto a las inversiones de capitales extranjeros, que intensificaron la productividad de la tierra por medio de la agricultura de secano y la forestación, encontró necesario realizar movimientos hacia la mitigación del daño en el suelo y sobre los recursos naturales.



En el primer período de gobierno del Frente Amplio se entregaron 45 mil hectáreas y se espera alcanzar las 55 mil hectáreas al final del período, señaló el presidente del INC⁶, de tal manera que en los diez años de gobierno se adquiriera el 25% del total de tierras que hoy tiene. El INC controla que los productores vivan en la explotación, que cuiden el recurso suelo y que, por lo tanto, no se lo arriende a las multinacionales. De acuerdo con el INC, ha habido un aumento de los presupuestos asignados a la adquisición de tierras y la cantidad de familias asentadas en las mismas en los últimos años (Cuadro 2). Se destaca que por ley, toda propiedad de más de 1 000 hectáreas que se venda en el mercado debe ser ofrecida previamente al INC, el cual tiene la primera opción de compra, al precio que el oferente está solicitando. Normalmente, los bajos presupuestos disponibles para la adquisición de tierras hacen que el INC no pueda adquirirlas y finalmente se vendan en el mercado de tierras entre privados.

Cuadro 2. Asignación de tierras por INC

	2010	2011	2012
Tierras ofrecidas (ha)	177 600	196 163	163 495
Valor promedio (US\$/ha)	3 900	4 500	5 440
Tierras compradas (ha)	6 000	6 194	11 705
Fracciones adjudicadas	177	48	77
Superficie adjudicada	28 000	8 985	8 628
Adjudicatarios individuales	177	36	51
Adjudicatarios grupales	378	276	381
Adjudicatarios totales	555	312	432

Fuente: INC, 2014

Los programas dirigidos a distintos sectores de la agricultura familiar buscan reducir la vulnerabilidad de tener que abandonar la producción por la venta de la tierra que arriendan; así como el generar acceso a tierras para el pastoreo colectivo por parte de los productores de la ganadería de cría que carecen de tierra suficiente. El objetivo es sostener la población rural en los predios, promoviendo el uso responsable del suelo y prohibiendo su arrendamiento a multinacionales. El INC también está en un proceso de ampliación de las capacidades locales del diseño de política a través de consulta a los Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo, de sus políticas y planes estratégicos (INC, 2014).

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) busca la descentralización a escala local, de la planificación del uso del territorio, y que si bien ya está en marcha su implementación, tiene los problemas de la novedad en un territorio sin antecedentes de esta apertura. Como las leyes anteriores, ésta es donde además confluyen todas

⁶ Entrevista realizada en agosto 2013 en el INC.

las dimensiones de la vida colectiva en un territorio determinado. Igual conjuga distintos niveles y tipos de controversias, entre otras epistemológicas (entre distintos expertos y la ciudadanía en general) así también de intereses y de competencias entre los distintos ámbitos de gobiernos y los nuevos dispositivos de descentralización.

Además de este conjunto de leyes, en el período de gobierno de izquierda se han aprobado varias políticas en universalización de la educación digital (una laptop por niño), políticas de descentralización para el acceso a la producción y formación en cultura, universalización de la electricidad en todo el territorio nacional, y la continuidad con la política de vivienda rural. Todas estas líneas han buscado mejorar las condiciones de vida, así como las posibilidades de futuro en cada territorio.

Finalmente, cabe destacar los esfuerzos desde la investigación, donde recientemente se pone énfasis en la agricultura familiar y en la co-construcción⁷ de conocimiento y demanda, conviviendo con lógicas de transferencia de tecnología que tiene más historia y suponen un actor empresarial en el ámbito rural⁸. Estos esfuerzos, sin embargo, representan apenas un 5% del presupuesto destinado a la investigación por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

A ese impulso económico se sumó un cambio de gobierno, y la llegada de la coalición de izquierda al poder, lo que implicó un giro hacia políticas de desarrollo productivo y social.



Primeros resultados y perspectivas

Los últimos diez años han estado caracterizados por un fuerte proceso de crecimiento del sector agropecuario. A ese impulso económico se sumó un cambio de gobierno, y la llegada de la coalición de izquierda al poder, lo que implicó un giro hacia políticas de desarrollo productivo y social. Entre los dos procesos, es posible encontrar buena parte de las causas de la reducción de los niveles de pobreza, medida según los ingresos de la población de Uruguay en general. No obstante, el impacto sobre la población rural, del crecimiento agropecuario y de las acciones del nuevo gobierno, es menos evidente. Así, al mismo tiempo que se ha dado una caída de la población que vive dispersa en el territorio, con base en las encuestas de hogares es posible determinar que la incidencia de la pobreza entre

7 La co-construcción del conocimiento refiere a un movimiento que pasa de la idea de la transferencia tecnológica a la construcción colectiva con los actores locales, en este caso los agricultores familiares, de la identificación de demanda tecnológica hasta la identificación de soluciones.

8 La investigación específica en agricultura familiar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria cuenta solo con 20 investigadores que atienden demandas específicas de tecnología e innovación.

esos hogares ha disminuido, aunque esto se deba fundamentalmente a que el número de integrantes de los hogares que se ocupan es mayor hacia 2011 de lo que era en el 2000, y en particular, al hecho de que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo (Cancela et al., 2004; Cardeillac, 2013). En síntesis, cambios a nivel de los hogares que han podido permanecer son los que han permitido aprovechar mejor un contexto de oportunidades menos restrictivo que el de inicio de siglo.

En efecto, el Frente Amplio encuentra en esta población, no sólo la posibilidad de mejorar las condiciones de igualdad y justicia en el campo uruguayo, sino también el fortalecimiento de su base electoral rural.



es casi 70% más entre los asalariados del cultivo de cereales, hortalizas y legumbres, que entre los asalariados no rurales; casi 80% más entre los asalariados de la granja (citricultura y animales pequeños) y casi 135% más entre los asalariados de la silvicultura (Cardeillac et al., 2013).

Según los dirigentes de la CNFR, el marco de la política de Uruguay fue siempre contrario a la agricultura familiar. Existe una fuerte herencia de una visión de agricultura productivista; es decir, sin límites a la explotación de los recursos naturales. Actualmente, aún con un gobierno favorable a la agricultura familiar, persisten amenazas tales como la inversión de capitales de origen transnacional, la concentración de tierras y la inseguridad a su acceso, cadenas productivas controladas por sectores industriales y financieros internacionalizados. Las políticas públicas para la agricultura familiar han sido accesibles a través de sus organizaciones y han generado más asociaciones o sociedades de fomento y más bases sociales revitalizadas, en particular mediante el proceso de las MDR. En la actualidad, la gremial ha aumentado su participación en instituciones de coordinación y planificación de

9 Debe aclararse que los umbrales de la línea de pobreza para la población dispersa (llamada “rural” por el INE) son más bajos que los de las demás, y es más frecuente que los hogares de asalariados ganaderos sean también de población rural dispersa.

la política sectorial, y ha sabido estilizar su presentación y legitimar el destino de recursos públicos para su base social. En efecto, el Frente Amplio encuentra en esta población, no sólo la posibilidad de mejorar las condiciones de igualdad y justicia en el campo uruguayo, sino también el fortalecimiento de su base electoral rural.

Aun así las evaluaciones de dicho colectivo subrayan la necesidad de aumentar la cartera de tierras y mejorar el marco regulatorio de éstas en dos direcciones: por un lado, el aumento del límite máximo de superficie que se puede transar o explotar; y por otro, la necesidad de aumentar el control sobre los capitales financieros que especulan sobre el precio de la tierra y presentan gran movilidad de rubros. En otra clave, señalan la necesidad de mayor consulta para el diseño de políticas, en particular aquellas que compiten con su *lugar* (por ejemplo, la minería) y la participación más activa del Estado en la regulación del agro-negocio de gran escala.

Las cooperativas agrarias también reúnen en su base producción familiar (sector lechero) pero aunque en escala colectiva llevan adelante el modelo empresarial de intensificación y allí es donde radica su mayor desafío: la escala tecnológica de insumos y de acceso a la tierra, así como el comercio y la industrialización. En esta clave, las demandas son bien distintas a las de los agricultores familiares propiamente dichos.

Conclusión: *Un buen lugar* en el futuro

En Uruguay, la agricultura familiar no sólo encara el problema fundamental de la disponibilidad y acceso a la tierra, sino también el de su participación en las formas de vida en el territorio y su capacidad de incidencia en los planes de desarrollo nacional, donde sigue primando una lógica de favorecer el crecimiento de la gran empresa y la apertura a los capitales extranjeros. Para los productores familiares, como para la ciudadanía en general, las nuevas políticas de descentralización y transversalización suponen la profesionalización de los participantes, en algunos casos requiriendo inversiones de tiempo y de capital que no son posibles de ser encaradas por los agricultores familiares alejándolos o excluyéndolos de sus establecimientos. Pero además, la novedad en la prioridad ambiental carece de un proceso de formación que acompañe la participación ciudadana, lo que dificulta el establecimiento de relaciones de igualdad en la definición colectiva de un *buen lugar* para vivir.

En efecto, una nueva generación de políticas públicas busca diseñar buenos lugares, a través de futuros de participación colectiva en la regulación de nuestra relación con los recursos naturales, pero también con el Estado y los servicios públicos. Aun así, anotamos la dificultad que tienen las poblaciones rurales para responder al aumento de espacios de decisión y participación colectiva, al tiempo que mostramos desigualdades para una participación con opinión formada. Por otro lado, otra serie de políticas que buscan el crecimiento económico presionan sobre la población rural (mayormente agricultores familiares)

y aumentan la desigualdad de incidencia de los distintos actores en la vida en colectivo. Un buen lugar comienza a dibujarse en los nuevos ámbitos colectivos para la regulación y en los conflictos derivados del cambio de uso del suelo.

Finalmente, ha quedado de manifiesto que el conjunto de políticas públicas que afectan, directa o indirectamente, a la agricultura familiar conviven con la memoria de una economía de apertura económica, que sigue viendo en la inversión extranjera la posibilidad de creación de trabajo, del desarrollo de las fuerzas productivas y de la modernización de la vida rural. Paralelamente, los esfuerzos por promover un mayor acceso a la tierra de los asalariados y los productores familiares se contraponen con los incrementos de los valores de la tierra y de sus rentas, no compitiendo con la gran empresa, y obligando al Estado a disponer de importantes volúmenes de capital para poder adquirir tierras para sus proyectos de colonización. El choque de ambos modelos en las distintas escalas que piensan un *buen lugar* resiste la sostenibilidad de un modelo de asentamiento rural donde las familias de agricultores pequeños logren desarrollar sus proyectos.

Bibliografía

- Astori, Danilo (1984). *Controversias sobre el agro latinoamericano: un análisis crítico*. Buenos Aires, Argentina, CLACSO.
- BCU (Banco Central de Uruguay) (2014). Sitio web institucional. Montevideo. Disponible en www.bcu.gub.uy. Visita 15 de junio de 2014
- Cancela, Walter, Alicia Melgar y Verónica Durán (2004). *El Uruguay rural: cuarenta años de evolución, cambios y permanencias*. Montevideo, CLAEH.
- Cardeillac, Joaquín (2013). Análisis de la pobreza de ingresos en los hogares rurales del Uruguay entre 2000 y 2009: transformaciones y caminos divergentes. *Revista de Ciencias Sociales* 32:53-72.
- Cardeillac, Joaquín, Alejandra Gallo y Bolívar Moreira (2013). Entre el reconocimiento y la apropiación: un análisis de las condiciones de vida de los asalariados rurales del Uruguay en un contexto de crecimiento económico y desarrollo social. *VII Congreso Latinoamericano de Estudos do Trabalho (2-5 de Julio, São Paulo, Brasil)*. *Proceedings*. Disponible en <http://www.alast2013.com.br/gt9.asp>.
- Cardeillac, Joaquín y Agustín Juncal (2014). Políticas Públicas de Juventud dirigidas a jóvenes rurales. En INJU, *Plan de Acción de Juventudes 2015-2025: Estudios* (págs. 113-129). Montevideo: Imprimex.
- Fernández, Tabaré (2002). La estructura agraria en el Uruguay entre 1951 y el 2000: Una aproximación descriptiva desde la distribución de la tierra. *El Colegio de México. Centro de Estudios Sociológicos*, XX (2).

- Gallo, Alejandra, Karina Molinaro y Natalia Osorio (2011). Modelos heredados: continuidades y rupturas. *Mirada Joven*, 1(1), 87-104.
- Gallo, Alejandra e Inés Peluso (2013). Estrategias sucesorias en la ganadería familiar: un enfoque de género. *Revista de Ciencias Sociales*, DS-FCS, 26(32):17-34. Julio de 2013.
- INC (Instituto Nacional de Colonización, Uruguay) (2014). Incorporación de tierras. Montevideo. Disponible en <http://www.colonizacion.com.uy/content/view/26/152>.
- INE (Instituto Nacional de Estadística, Uruguay) (2014). Sitio web institucional. Montevideo. Disponible en www.ine.gub.uy. Visita 15 de junio de 2014.
- Malán, Inés (2008). *El proceso sucesorio en la lechería familiar*. Montevideo: Tesis de grado para obtener la Licenciatura en Sociología, Universidad de la República.
- MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay) (2013). Registro de productores familiares en Uruguay Proceso y estado de situación. Montevideo. Disponible en <http://www.mgap.gub.uy/portal/agxppdwn.aspx?7,10,250,O,S,0,6888%3bS%3b1%3b15>.
- MGAP y DIEA (Dirección de Estadísticas Agropecuarias) (2013). Censo General Agropecuario de 2011 Montevideo. Disponible en <http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,694,O,S,0>.
- Mishra, Ashok, Hisham El-Osta y Saleem Shaik (2010). Succession Decisions in U.S. Family Farm Businesses. *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 35((1)), 133–152.
- Moraes, Maria Inés y María Fernanda de Torres (2013). Los futuros del pasado: una reflexión sobre los proyectos de desarrollo agrario del Uruguay. Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. Documento interno.
- OPYPA (Oficina de Política y Programación Agropecuaria, Uruguay) (2005). *Anuario OPYPA*. Montevideo, MGAP.
- Piñeiro, Diego (1985). *Formas de resistencia de la agricultura familiar. El caso del Nordeste de Canelones*. Tesis de Maestría, Montevideo. Uruguay, CIESU.
- _____; (2004). En Busca de la Identidad. La Acción Colectiva en los Conflictos Agrarios de América Latina. CLACSO. Buenos Aires. 344 pags.
- _____; (2005). *Caracterización de la producción familiar*. Disponible en <http://www.fagro.edu.uy/investigacion/GTI/docs/Caracterizacion%203.pdf>.
- _____; (2011). The Role of Private Academic Centres and Foreign Aid in Developing Social Sciences during Military Dictatorship. In Long-Term Solutions for a Short-Term World: Canada and Research Development. R.N. Harpelle; B. Muirhead. eds. Waterloo, Ontario, Canadá, Wilfried Laurier University Press. p. 187-194.

- Rossi, Virginia, Mercedes Figari y Rosario González (2008). Los productores familiares. En M. Chiappe, & M. y. Carámbula, *El campo uruguayo: una mirada desde la sociología rural*. Montevideo: Facultad de Agronomía. CSIC.
- Scheinkerman, Edith, María del Pilar Foti y Marcela Román (2007). “*Los pequeños productores en la República Argentina: importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al censo nacional agropecuario 2002*”. Buenos Aires: Gráfica Santander S.R.L.
- Scheinkerman, Edith (2009). *Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina: Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002*. Buenos Aires: POINDER, IICA.

La agricultura familiar pampeana: notas sobre historia y actualidad

*Family farming in the pampas:
notes on its history and present*

Eduardo Azcuy Ameghino y Gabriela Martínez Dougnac*

Fecha de recepción: agosto 2014
Fecha de aceptación: noviembre 2014

Resumen

Desde una perspectiva histórica se reflexiona en el presente artículo acerca del desarrollo de la agricultura familiar en la pampa húmeda argentina atendiendo a las transformaciones ocurridas en su seno a partir de la expansión del capitalismo agrario. Si bien se reconoce en la zona el significado histórico del productor de tipo familiar, el “chacarero” pampeano, destacamos asimismo, aportando algunas cifras al respecto y analizando sus particularidades regionales, la eficacia que ha tenido el proceso de descomposición de las unidades productivas de esta naturaleza, sobre todo durante las últimas décadas dando cuenta de un escenario en el cual la subsistencia del agricultor familiar se presenta cada vez más dificultosa.

Palabras clave: agricultura familiar; agro pampeano; capitalismo agrario; contratismo.

Abstract

This article analyzes on an historic perspective the developement of family farming in the humid pampas attending to the changes on it since the growth of the agrarian capitalism. Although we recognize the historic meaning of the family farmer in the region, the “chacare-ro” of the pampas, we stress with some statistics and regional singularities the success of the decomposition process of this kind of productive unities, mainly during the last decades, in which the survivance of the family farmers became more difficult.

Key words: family farms; pampas agriculture; agrarian capitalism; custom services.

* Investigadores del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: eduardo.azcuy@hotmail.com.ar ; gmd.ciea@yahoo.com.ar

Introducción

Los orígenes de lo que hoy muchos denominan –con diversos matices teóricos– agricultura familiar, se remontan al pasado colonial de la Argentina. Para entonces la actual región pampeana era un vasto espacio semidesierto donde la gran propiedad territorial y los latifundios generados por las políticas de tierras de la corona española coexistían con un campesinado relativamente disperso que debía, en la medida que sus heterogéneas formas de resistencia no lograran impedirlo, transferir plustrabajo o plusproducto a los propietarios de las condiciones de producción en virtud de un variado repertorio de compulsiones y presiones extraeconómicas. Entre las cuales se contaban el peonaje obligatorio, el arrendamiento forzoso y el sistema de agregados o arrimados en las estancias, donde a cambio de residencia, subsistencia y protección rendían una renta en trabajo participando de las diversas labores estacionales características de dichas explotaciones agropecuarias (Azcuy, 1995).

Estas formas de dependencia personal, más allá de la presencia de núcleos campesinos inestables y precariamente independientes, definen una situación donde la dependencia personal, los paternalismos, clientelismos, y otras manifestaciones de la fuerza de los terratenientes principales en cada comarca o región eran puestos en juego en virtud de la necesidad económica del campesinado colonial de transferir trabajo excedente a terceros. En tanto disponían de medios de producción y acceso directo a medios de subsistencia –en el marco de una legalidad todavía difusa en la vastedad de los campos– que les permitían reproducir su existencia en forma autónoma.

En suma, un campesinado de pequeños agricultores y/o pastores, que muy lentamente, durante las décadas que siguieron a la revolución de independencia, iría desembarazándose de las trabas a su libertad personal, participando vía diversos mecanismos de diferenciación social de los procesos de acumulación originaria de capital. Este cuadro, con los matices propios de la evolución económica y social, y de los planteos productivos, se extendió hasta los inicios de la agricultura en gran escala y la consolidación de la llamada “Argentina moderna” hacia fines del siglo XIX. En ese entonces el peso creciente del trabajo asalariado, especialmente en las cosechas y acopios, estableció el predominio –en principio en la región pampeana– del capitalismo agrario (Volkind, 2011), en un país que consolidaba su carácter de económicamente dependiente de las principales potencias de la época.

Campeños, chacareros y cuestión agraria pampeana a principios del siglo XX

Consistentemente con los rasgos históricos fundacionales que hemos esbozado, durante las primeras décadas del siglo XX el vertiginoso incremento de las superficies cultivadas se produjo dentro de un sistema socioproductivo denominado “el viejo arrendamiento”, en virtud del

cual la mayoría de los titulares de las pequeñas y medianas explotaciones que se iban habilitando en línea con la demanda de tierras motorizada por una inmigración creciente, sólo accederían a su uso mediante distintas modalidades de alquiler, en muchos casos condicionadas por la articulación con el negocio ganadero que operaba buena parte de los terratenientes rentistas, subordinando a esta actividad la instalación y rotación de los colonos dentro de sus estancias.

Dado que estas modalidades de arriendo se desarrollaban al calor de una extremada asimétrica relación de fuerzas –económica, social y política– entre los terratenientes y la gran mayoría de los arrendatarios, al tiempo que se recortaban sobre una historia reciente preñada todavía de rasgos precapitalistas, no llama la atención que en muchos contratos de arriendo junto con los montos o porcentajes de la producción a pagar se consignaran las más diversas y arbitrarias imposiciones sobre quien tomaba la tierra. Entre ellas por ejemplo, la indicación de qué sembrar y en qué orden hacerlo, a quién vender la producción, con quién trillar el grano, y otras obligaciones contractuales de similar sentido (Palacio, 2006). Como resultado es posible afirmar que durante casi medio siglo los pequeños y medianos productores arrendatarios de la región pampeana –alrededor de dos tercios del total– vieron fuertemente limitadas sus “libertades capitalistas” básicas (Boglich, 1937), es decir las de empresa y comercio. En este contexto la lucha por dichas libertades constituyó uno de los núcleos principales de lo que hoy denominamos la vieja cuestión agraria pampeana, la cual signó la conflictividad social rural, dando origen a grandes y pequeños episodios de lucha y protesta.

Si bien en el marco de estas notas sólo cabe mencionarlo, es importante destacar que las modalidades de la puesta en producción agrícola de la región pampeana, su carácter plenamente mercantil, el tipo de planteos productivos, el tamaño de los lotes, los correspondientes medios de producción, etc., impusieron el desarrollo de un tipo social que lentamente se iría alejando de los rasgos del campesinado que había laborado la tierra en la región durante buena parte del siglo XIX. Integrado éste en su mayoría por productores familiares relativamente poco capitalizados, las nuevas modalidades determinadas por el modelo agroexportador que se iba imponiendo (Azcuay, 2011), exigieron su adaptación a los rasgos que estaba adoptando la producción agrícola. Este es un punto muy poco estudiado por la historia agraria argentina, en el cual convergen el poco numeroso campesinado de origen local, con la masiva incorporación de labradores inmigrantes, y con las modalidades inherentes a la nueva agricultura, de resultados de lo cual surgiría en la región un campesinado crecientemente capitalizado –en relación con el de tipo tradicional con el cual coexistiría,

Como resultado es posible afirmar que durante casi medio siglo los pequeños y medianos productores arrendatarios de la región pampeana –alrededor de dos tercios del total– vieron fuertemente limitadas sus “libertades capitalistas” básicas.



a menudo solapado, durante algunas décadas— a tono con la moda predominante en el tamaño de los lotes oscilante en torno a las cien hectáreas (Pucciarelli, 1986).

Este tipo de campesino capitalizado recibiría el nombre de chacarero, y contaría entre sus posibilidades —aunque más como excepción que como norma— con la alternativa de acumular capital, rasgo que conservaría durante prácticamente un siglo hasta la actualidad.

Este tipo de campesino capitalizado recibiría el nombre de chacarero, y contaría entre sus posibilidades —aunque más como excepción que como norma— con la alternativa de acumular capital, rasgo que conservaría durante prácticamente un siglo hasta la actualidad.



fundamental durante la década de 1940, mediante las políticas de rebaja, congelamiento y extensión de los arrendamientos que brindaron una nueva estabilidad, si no económica al menos jurídica, al chacarero arrendatario. Lo cual fue acompañado por otras medidas concurrentes con la maduración del capitalismo agrario —como el Estatuto del Peón rural— y un relativo retroceso de la influencia de los grandes terratenientes ante el avance de la industrialización y las posiciones políticas de la burguesía industrial expresadas entonces por el peronismo (Martínez, 2009).

Mientras tanto, dos características de la producción chacarera contribuyeron fuertemente a su sostenimiento: la explotación mixta (agrícola y ganadera) y la residencia rural, las cuales estimularon el despliegue de la unidad familiar, al exigir —más allá de los picos estacionales— un aporte laboral permanente, el cual difícilmente se resuelve sin que toda o una parte suficiente del grupo doméstico resida en la explotación, la cual además de núcleo productivo es el espacio principal de socialización del grupo familiar.

Cabe recordar que la chacra mixta fue durante mucho tiempo, y especialmente en las primeras siete décadas del siglo XX, un tipo de establecimiento que sumó a la agricultura

—generalmente la actividad principal— el concurso de la ganadería vacuna (cría, engorde y tambo, en pequeñas escalas), del ovino y, especialmente en la zona maicera, del porcino. Estas actividades tuvieron en general una orientación comercial, pero también resultaron en muchos casos consistentes con el consumo doméstico, articuladas con la presencia de huertas, gallinas y otros animales de corral.

De manera que eran todas estas producciones, más que los cultivos extensivos propiamente dichos, las que reclamaban la presencia, con una considerable participación en el trabajo necesario, de un núcleo familiar residente en la explotación.

Un proceso lento pero constante de especialización productiva, de creciente profesionalización de las actividades, y las progresivas modificaciones en los planteos productivos determinadas por las rentabilidades relativas de las diferentes actividades, fueron horadando lentamente los esquemas tradicionales, que sufrirían un rudo cimbronazo —especialmente en el cinturón maicero— con la introducción del doble cultivo trigo-soja a partir de la década de 1970 (Martínez, 2013).

En este sentido, el abandono de la huerta y la cría de aves de corral, articulada con la mayor rentabilidad de la agricultura que tendió a desplazar a la actividad ganadera del interior de las chacras donde las características ecológicas de los campos lo permitieron —con la liquidación de las correspondientes instalaciones—, determinaron en muchos casos el abandono de la residencia en la explotación de muchas familias chacareras, lo cual acarrió por un lado un cambio de vida (Balsa, 2006), y por otro la apertura a otras actividades extraprediales, debilitando el contenido familiar de numerosas explotaciones, el cual quedó acotado al aporte laboral en el desarrollo de la agricultura extensiva.

Sin perjuicio de estas tendencias, y especialmente luego de cerrada en lo fundamental la antigua cuestión agraria, resulta indudable que durante el siglo XX, con hitos como la mecanización de la cosecha de maíz y la propietarioización de una parte de los chacareros arrendatarios, la agricultura familiar campesina capitalizada o chacarera mantuvo una presencia relevante —lo cual resulta de un balance de avances y retrocesos—,¹ sostenida en la combinación de escalas reducidas y niveles tecnológicos potenciadores de la suficiencia del trabajo chacarero, y también por la extensividad de la producción agrícola y la lentitud relativa de la tendencia a la concentración del capital agrario (incluida la eliminación de las unidades menos competitivas), circunstancias que se extendieron al menos hasta mediados de la década de 1970.

1 Cabe consignar que así como en el ámbito pampeano, sobre todo en la producción de granos, prácticamente ya no existen campesinos de tipo tradicional —productores familiares no capitalizados con bajísimas posibilidades de acumulación—, en regiones como la del noreste y noroeste del país aun resulta visible su presencia, más estable en aquellos territorios relativamente marginales respecto a la expansión del capital.

El desarrollo del capitalismo y el retroceso de la producción familiar chacarera

La producción familiar en la agricultura moderna, a partir de un prolongado proceso histórico y en el marco de las determinaciones que imponen las relaciones y el predominio del modo de producción capitalista, tiende a descomponerse, a integrarse y a redefinirse (Azcuy, 2004). Siendo un hecho históricamente irrefutable la descomposición –tendencial, *suficiente*² y progresiva– del campesinado y de la agricultura familiar, también hay que tener en cuenta que, en diversas medidas según los distintos países, no se trata de un proceso acabado o de inminente culminación. En este sentido, lo que sí se puede afirmar es que las leyes propias del desarrollo del capital estimulan una situación de inestabilidad de la organización social del trabajo familiar, alimentando la pulsión desestructurante que tendencialmente determina, en nuestro caso pampeano, la desaparición de numerosas pequeñas y medianas explotaciones, mayoritariamente chacareras.

Cuadro 1. Número de explotaciones agropecuarias (EAPs) de la región pampeana en 1988 y 2002, según provincias

Censos	Buenos Aires	Córdoba	Entre Ríos	La Pampa	Santa Fe	R. pampeana
1988	75.479	40.061	27.132	8.631	36.862	188.165
2002	51.107	25.620	21.577	7.774	28.034	134.112
Diferencia	24.372	14.441	5.555	857	8.828	54.053
%	32,3	36,0	20,5	9,9	23,9	28,7

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002.

Cuadro 2. Evolución del número de EAPs de la región pampeana entre 1988 y 2002, según escala de extensión (cantidades y porcentajes)

Región pampeana	Hasta 5 has	5,1 25	25,1 100	100,1 200	200,1 500	500,1 1000	1000,1 2500	Más de 2500	Total
EAPs 1988	9.792	22.003	53.259	35.845	37.665	15.543	9.731	4.327	188.165
EAPs 2002	4.484	12.550	33.496	24.294	29.352	14.978	10.294	4.664	134.112
Diferencia	5.308	9.453	19.763	11.551	8.313	565	563	337	54.053
Diferencia %	-54	-43	-37	-32	-22	-4	+6	+8	-29

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002.

Este fenómeno no se expresa solamente en la modalidad extrema de eliminación de unidades, sino que también la erosión capitalista de las formas de producción predominantemente familiares en el ámbito rural puede reconocerse en el hecho ya mencionado de que muchos agricultores continúan siendo productores directos mientras explotan trabajo asalariado, y también en que una parte de los asalariados rurales continúan operando explotaciones agrarias, propias o arrendadas, insuficientes para la reproducción del núcleo familiar (Murmis, 1974).

2 La descampesinización es condición y resultado de la extensión de las relaciones de producción en el campo basadas en el trabajo asalariado, pero ésta no es un proceso absoluto sino apenas suficiente. (Azcuy Ameghino, 2004).

Por otro lado, también la persistencia de campesinado de tipo farmer (parecido al chacarero pampeano) en las economías capitalistas más avanzadas da cuenta de la desigualdad del desarrollo del capital en la agricultura (Newby, 1982). Sin perjuicio de ello, resulta sin embargo un rasgo común –y sobre todo notorio a partir de las últimas décadas– que los productores familiares, constituyendo todavía una fracción bastante numerosa dentro del universo de las explotaciones agrarias, a medida que avanza el desarrollo capitalista van perdiendo su antigua incidencia en la producción, aunque de manera mucho más lenta e irregular que la forma lineal y absoluta que atribuyen algunos autores a la visión marxista del proceso de descampesinización.³

En el caso de la pampa húmeda argentina los números que expresan estos procesos se reflejan en la desaparición –incipiente pero ya visible a partir de los años 60– de explotaciones agropecuarias de base familiar, en su decreciente peso económico, y en el consiguiente recorte de sus recursos (tierra disponible, capital de trabajo, maquinaria). Por otra parte, este fenómeno tendencial, irrefutable en la larga duración, no deja de registrar ciclos habitualmente breves en los cuales, a partir de coyunturas relativamente excepcionales, se producen amesetamientos o reversiones parciales de los procesos estructurales (Martínez, 2008).

Con ser las más extendidas y estudiadas, las mencionadas hasta aquí no son las únicas modalidades mediante las cuales va perdiendo entidad la producción familiar de tipo chacarero, habiendo cobrado durante las últimas dos o tres décadas importancia creciente el efecto transformador que genera el recurso cada vez más generalizado al llamado contratismo de servicios.⁴

Ahora bien, ¿cómo incide en la caracterización de las explotaciones familiares (y de sus titulares) el recurso pleno al contratismo de servicios? ¿Qué queda del carácter familiar de las explotaciones donde hasta ese momento resultaba predominante el aporte de la mano de obra doméstica luego de la tercerización de las diversas labores agrícolas?

Si bien la utilización de contratistas es una actividad conocida desde el siglo XIX, cuando se destacaban los encargados de realizar la trilla, su influencia no revestía la trascendencia como determinante social que ha adquirido en los últimos años, sobre todo a partir de la extensión del doble cultivo trigo-soja y, muy especialmente, con la más reciente generalización de la siembra directa a partir de mediados de los noventa.

3 Este proceso sin duda no es lineal, y sí irregular y contradictorio. Así, en la región pampeana se observa que junto a las formas “clásicas” (*descomposición hacia “arriba”*, vale decir reproducción ampliada y aburguesamiento, en el sentido de suplantación de trabajo familiar por diversas formas de trabajo asalariado; y *reproducción incompleta* y expulsión de la producción de pequeños y medianos productores de base familiar) también se verifican otro tipo de transformaciones. Por ejemplo, la mayor capitalización –que puede expresarse en una superior dotación de maquinaria– puede conducir a algunos chacareros a una condición de puros burgueses, pero también, paradójicamente, a otros los afianza en su carácter de productores familiares, en la medida que dicha capitalización materializada en un incremento de la mecanización ahorra fuerza de trabajo los revaloriza como productores directos (tal como ocurrió en numerosos casos a partir de la mecanización de la cosecha de maíz en los años 50 del siglo XX)

4 El recurso al contratismo de servicios consiste en la tercerización de las tareas culturales. El denominado contratista, propietario de la maquinaria que presta el servicio de labores –de acuerdo al volumen económico de su empresa con mayor o menor participación de trabajo asalariado–, percibe como retribución una tarifa fijada por hectárea trabajada o un porcentaje de la producción.

**Este sujeto, que reorienta
crecientemente su aporte a
la producción afirmándose
cada vez más en el
desarrollo de funciones de
dirección y control,
difícilmente encuadra ya
en sus antiguas
denominaciones de farmer,
chacarero o productor
familiar capitalizado.**



En estas circunstancias este tipo de productores en proceso de transformación social ven potenciado su componente de inversores de capital –por ejemplo en semillas, agroquímicos y otros insumos–, al cual valorizan mediante la explotación indirecta del trabajo ajeno proveniente de su relación económica con los contratistas de servicios, que en presencia de trabajo asalariado cumplen el rol de capitalistas en activo en tanto apropiadores de primera mano de una masa de plusvalía que luego reparten con el organizador de la producción.⁵ Este sujeto, que reorienta crecientemente su aporte a la producción afirmándose cada vez más en el desarrollo de funciones de dirección y control, difícilmente encuadra ya en sus antiguas denominaciones de farmer, chacarero o productor familiar capitalizado.

De este modo las explotaciones “familiares” fundadas en la contratación de todas las labores deberían pasar a encuadrarse, según corresponda a su escala económica, en la pequeña y mediana producción capitalista. Y no ya en el sentido amplio de tratarse de unidades familiares subsumidas en el régimen capitalista, sino porque sus titulares –arrendatarios o propietarios (en cuyo caso teóricamente deberían percibir también la renta del suelo)– han

zanzar el rango de suficiente para transformar el carácter de dichas explotaciones chacareras, vaciándolas de sus contenidos específicos y definitorios. Lo cual, mediante su redefinición, tiende a reubicarlas al interior de la estructura agraria, conclusión inexcusable en la medida que se considere a la organización social del trabajo como núcleo duro en torno al cual definir a los diferentes sujetos.

En base a este fenómeno, cuyo progreso quedó reflejado por los datos que entregó el Censo Nacional Agropecuario del 2002 respecto a su predecesor de 1988, resulta que las explotaciones que podían identificarse como predominantemente familiares pierden total o parcialmente –según la proporción de labores que tercerizan– su carácter chacarero, al restringirse o desaparecer el aporte de trabajo físico, manual, del grupo doméstico.

5 Nótese que en el caso de los contratistas de labores de menor envergadura económica, con participación o predominio del trabajo familiar, no varía la dinámica mediante la cual el titular de la explotación se apropia del trabajo ajeno, que en este caso se halla originado en el plustrabajo de dichos contratistas.

dejado de ser productores directos, desnivelando su doble y contradictoria alma –capitalista y trabajador– a favor del primero de sus componentes.

Hemos explicado que dependiendo de la proporción de las labores tercerizadas queda abierta una vía para la transformación de la producción de base familiar en específicamente capitalista. Sin embargo, este no es el único efecto emergente de dicho recurso.

Como bien han observado algunos autores, también la *tercerización parcial* del proceso de trabajo puede vincularse a un segundo efecto que, en virtud de haber denominado al primero como *de transformación*, podría caracterizarse como *de permanencia* (Azcuay, 2009), en tanto se lo considere parte de las estrategias de supervivencia de productores familiares relativamente descapitalizados (Tort, 1983). Al respecto, partiendo del supuesto (anotemos que polémico) de que en los últimos años se produjo una disminución relativa de los costos de prestación de labores en virtud del agudizamiento de la competencia entre los contratistas, podría ocurrir que “aquellos que no pudieron realizar las inversiones encontraron en el mercado de contratación de labores la posibilidad de producir utilizando tecnologías de última generación” (Cloquell *et al.*, 2007: 129).

En este caso, una parte de la generación de valor en la unidad productiva –y proporcionalmente su propia reproducción– es aportada indirectamente por el plustrabajo aportado por el contratista. Esta plusvalía, originada por fuera del grupo familiar, reduce su participación y cuestiona –pero no altera completamente– el carácter de la explotación, la que aún retiene parte de su componente familiar. La paradoja de este sujeto social empobrecido, cuya tercerización defensiva de labores lo sostiene como agente productivo, es que se aburguesa tanto como se aproxima a la quiebra.

Expresiones de la crisis de la agricultura familiar

Sintetizando parte de lo expuesto, se puede afirmar que la profundidad de la crisis de las explotaciones de base familiar de la región pampeana, agudizada desde la década de 1990 bajo los efectos del modelo neoliberal impuesto por entonces (Cloquell y Azcuay, 2005), posee diversas expresiones y maneras de manifestarse, entre las que pueden mencionarse:

- a) la desaparición de establecimientos agropecuarios cuyos titulares se ven obligados a liquidar sus intereses y se retiran del sector;
- b) el cese forzado de la actividad de explotaciones deficitarias que deben vender parcialmente sus tierras y/o arrendarlas a terceros manteniendo de ese modo cierta conexión con el agro;
- c) la discontinuidad de la actividad productiva de EAPs cuyos dueños se ven tentados por la oferta de altos arriendos, que suelen representar –con menor riesgo– la suma de la renta y ganancia que podrían obtener manteniéndose en actividad;
- d) el abandono del trabajo manual, físico, en la producción –que los define como pro-

- ductores directos de base familiar– mediante el recurso a la tercerización de todas o casi todas las labores culturales mediante el contratismo de servicios;
- e) la difícil y amenazada permanencia en operaciones de unidades productivas que no alcanzan la reproducción ampliada, y acumulan años de reproducción simple, y/o la combinan con períodos prolongados de quebrantos y endeudamiento, característicos de formas de reproducción incompleta;
 - f) el recurso, cuando es obligado, a la pluriactividad del productor y/o miembros de su familia a los efectos de redondear un ingreso que complemente el proveniente de la EAP, contribuyendo de ese modo a mantenerla operativa;
 - g) las dificultades constantes –con quiebras frecuentes y generalizadas– de los pequeños y medianos contratistas de labores, que deben competir en condiciones desiguales con las empresas dotadas de numerosas, variadas, modernas y potentes maquinarias y equipos, cuyas tarifas y manejo de los tiempos les otorgan una posición de privilegio en el mercado de los servicios.

Complementariamente, incorporando otra línea de análisis, cabría pensar la interrelación entre los factores que asociamos con la crisis de la pequeña producción de base familiar con las características que asume actualmente la producción de cereales y oleaginosas en la región pampeana. En este sentido, en el caso de unidades puramente agrícolas, operadas por productores de base familiar capitalizados –es decir personas que siembran, cuidan y raramente cosechan sus cultivos en escalas relativamente reducidas–, se trata de agentes económicos cuya ocupación en calidad de productores directos se circunscribe en su mayoría a unos 10 o 15 días de trabajo sobre los 365 del calendario.

De esta manera, en el mejor de los casos, la vigencia de la producción familiar asociada a los granos de exportación, deja libres 350 días al año para explorar personalidades socioeconómicas alternativas o complementarias al carácter de chacareros, lo cual sin duda plantea una agenda de investigación en la que ocupa un lugar privilegiado el estudio de sus posibles actividades *off-farm* o pluriactivas (Craviotti, 2002).

Como puede observarse, incluso más allá de los efectos negativos provenientes de la concurrencia en un mercado dominado por los grandes capitales agrícolas (Fernández, 2010), las características de los procesos productivos en las escalas habitualmente operadas por las explotaciones chacareras resultan sugestivamente contradictorias con su supervivencia en cuanto tales productores familiares.

Reflexiones finales

Sin perjuicio de las diversas consideraciones que hemos realizado, del conjunto de situaciones expuestas, asociadas al momento actual (mediados de la década de 2010) del Estado y vicisitudes de la pequeña producción agraria pampeana de base familiar y la mayor parte de la

mediana, combinando una visión de los aspectos socioeconómicos de base estructural con la acción colectiva emanada de ese conjunto, se arriba a un diagnóstico o conclusión contradictoria, donde por un lado –en tanto colectivo de unidades productivas– dicho bloque se viene progresivamente debilitando y cediendo espacio en la trama socioproductiva. Y por el otro, continúa constituyendo –bajo la imagen y el concepto del *mundo chacarero*– un poderoso actor en virtud de una capacidad de movilización e incidencia política que marcha comparativamente desacompañada, y en cierto sentido desproporcionada, con su inserción estructural.

Es en este carácter que las pequeñas y medianas unidades agrarias –tanto las de base familiar como las predominantemente capitalistas– constituyen hoy día, entornadas difusamente por los dispersos y políticamente desprovistos asalariados rurales,⁶ la parte más visible de la base popular de lo que suele denominarse “el campo”, resultando como tal tanto víctimas de la concentración del capital como sujetos de la resistencia a su profundización.

En este último sentido, su remarcada capacidad de actuación se potencia por el hecho de que en el plano cultural –donde se define y expresa su identidad colectiva– la desestructuración de la producción de base familiar posee tiempos más lentos y modalidades menos agudas que en el ámbito material. Lo cual significa que, a nivel político-ideológico, lo relativamente desestructurado y disperso en el plano de la organización social de la producción tiende a reunirse y fortalecerse por la confluencia de una variedad de afluentes, compuestos por las diversas personalidades que comparten (y/o imaginan compartir) cercanas raíces chacareras. Entre ellos los chacareros pobres, los medios y la capa inferior de los más aburguesados, buena parte de los contratistas de labores, muchos mini rentistas, los pequeños capitalistas provenientes de la producción familiar por tercerización completa del cultivo, e incluso otros capitalistas de poca envergadura económica, que encuentran coherente su acomodamiento en el plano de la representación al interior del conjunto descripto. Todos ellos sin duda víctimas de la concentración del capital, la producción y el uso de la tierra por parte de una restringida elite de terratenientes capitalistas, grandes arrendatarios y pooles de siembras: los concentradores.

Bibliografía

- Ansaldi, Waldo (1991). “Hipótesis sobre los conflictos agrarios pampeanos”. *Revista Ruralia* N° 2. 7-28.
- Azcuy Ameghino, Eduardo (1995). *El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense*. Buenos Aires: García Cambeiro.
- Azcuy Ameghino, Eduardo (2004). “Capitalismo y campesinado: el marxismo y las clases sociales en el campo”. En *Trincheras en la Historia. Historiografía, marxismo y debates*, E. Azcuy Ameghino; 163-190. Buenos Aires: Imago Mundi.

6 Enfatizamos bajo este enunciado la débil sindicalización de los obreros agrícolas pampeanos, el carácter burocrático e irrepresentativo de su organización gremial, y su cuasi nula actuación en tanto actor político específico y diferenciado (Villulla, 2010).

- Azcuy Ameghino, Eduardo (2009). "El papel del contratismo de servicios de maquinaria en la caracterización socioeconómica de las pequeñas explotaciones agropecuarias". *Realidad Económica*, N° 244: 26-37.
- Azcuy Ameghino, Eduardo (2011). *Una historia casi agraria. Hipótesis y problemas para una agenda de investigación sobre los orígenes y desarrollo del capitalismo en Argentina*. Buenos Aires: Ediciones del PIEA.
- Balsa, Javier (2006). *El desvanecimiento del mundo chacarero*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Boglich, José (1937). *La cuestión agraria*. Buenos Aires: Editorial Claridad.
- Cloquell, Silvia y Eduardo Azcuy Ameghino (2005). "Las reformas neoliberales y las transformaciones en la estructura social agraria pampeana (1991-2001)". *Revista Alasru, Análisis latinoamericano del medio rural*. N° 1: 69-108.
- Cloquell, Silvia, R. Albanesi, P. Propersi, G. Preda y M. De Nicola (2007). *Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura*. Rosario: Editorial Homo Sapiens.
- Craviotti, Clara (2002). "Configuraciones socioproductivas y tipos de pluriactividad: los productores familiares de Junín y Mercedes". *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, N° 17: 93-118.
- Fernández, Diego A. (2010). "Concentración económica en la región pampeana: el caso de los fideicomisos financieros". *Revista Mundo Agrario* N° 21. Disponible en: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/rt/printerFriendly/v11n21a01/355>
- Martínez Dougnac, Gabriela (2008). "Subsistencia y descomposición: notas sobre el devenir de la agricultura familiar pampeana". En *Pasado y presente del agro argentino*, J. Balsa, G. Mateo y S. Ospital (Comps.): 571-587. Buenos Aires: Editorial Lumière.
- Martínez Dougnac, Gabriela (2009). "Capitalismo agrario pampeano y conflictividad durante el primer peronismo. Hipótesis y problemas". *Documentos del CIEA*, N° 4: 63-79.
- Martínez Dougnac, Gabriela (2013). "De los márgenes al boom. Apuntes para una historia de la sojización". En *De especie exótica a monocultivo. Historia económico-social de la sojización*, Gabriela Martínez Dougnac (Coord.): 1-30. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Murmis, Miguel (1974). *Tipos de capitalismo y estructura de clases*. Buenos Aires: La Rosa Blindada.
- Newby, Howard (1983). *Introducción a la sociología rural*. Madrid, Alianza Editorial.
- Palacio, Juan Manuel (2006). *Chacareros pampeanos. Una historia social y productiva*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Pucciarelli, Alfredo R (1986). *El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- Tort, María Isabel (1983). "Los contratistas de maquinaria agrícola: una modalidad de organización económica del trabajo agrícola en la pampa húmeda". *Documento de Trabajo CEIL* N° 11.
- Villulla, Juan Manuel (2010). "La política económica de los 90' y sus efectos sobre la organización social del trabajo agrícola en la pampa húmeda, 1991-2001". *Documentos del CIEA* N° 5: 73-90.
- Volkind, Pablo (2011). "Los procesos de trabajo agrícola en los cultivos de trigo y maíz durante la expansión agroexportadora, 1895-1920". *Documentos del CIEA* N° 7: 201-237.



Estudio de caso

La agricultura familiar: su relación con el abastecimiento alimentario a nivel familiar*

Family farming: its relation to food supply at the household level

Laura Boada**

Fecha de recepción: agosto 2014
Fecha de aceptación: diciembre 2014

Resumen

En la sierra Norte, la *estrategia familiar alimentaria* para acceder a la alimentación se manifiesta a través de una heterogeneidad de factores. Específicamente en las provincias de Carchi e Imbabura, donde predomina la actividad agrícola como un abastecedor de alimentos para el mercado nacional. Las familias campesinas alcanzan la diversificación en su alimentación a través de la *estrategia familiar alimentaria* conformada por un conjunto de factores en los que destacan la producción para el autoconsumo y la comercialización de los alimentos, pero sobre todo las redes sociales y familiares (capital social). La agricultura familiar como proveedor central del abastecimiento al mercado nacional, además debe alimentar a la familia que la lleva a cabo.

Palabras clave: dieta, hogares, diversidad, estrategias, alimentación.

Abstract

In the northern highlands of Ecuador, the family strategy for access to food is manifested through a diversity of factors. Specifically in the provinces of Carchi and Imbabura, there are activities directly related to food supply to the domestic market. Peasant families achieve diversification in their food through the family strategy which consists of a set of factors that include the production for their own consumption and for merchandizing, but especially family and social networks (social capital). Family agriculture as a central provider of supply to the domestic market, in addition should feed the family that develops this type of agriculture.

Key words: peasants; diet; households; diversity; strategies; alimentation.

* Este estudio se deriva del proyecto de investigación WOTRO, un proyecto multidisciplinario que investiga la heterogeneidad en el uso del agua para la producción de alimentos y en el uso de los alimentos para la nutrición. El mismo está financiado por la Academia de Investigación de los Países Bajos. Además este artículo parte de la tesis para la obtención del título en la Maestría en Desarrollo Territorial Rural en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Ecuador.

** Estudiante de la maestría Desarrollo Territorial Rural, FLACSO – Sede Quito.
Correo electrónico: laura.boada.molina@gmail.com

Introducción

El presente estudio de caso se localiza en la sierra norte del Ecuador, en las provincias de Carchi e Imbabura, en las comunidades de Jesús del Gran Poder y San Clemente respectivamente. En la comunidad Jesús del Gran Poder predominan la producción de leche y monocultivos de pasto y papa. La leche es entregada en centros de acopio cercanos a la comunidad, la papa es ofertada tanto en el mercado de la ciudad de El Ángel así como a intermediarios acopiadores. La comunidad se encuentra a una altura aproximada de 3 200 m.s.n.m., con una precipitación media anual de 500-2500 mm. Por otro lado, en la comunidad de San Clemente predomina la producción de cultivos como el tomate y fréjol, ofertados principalmente en el mercado mayorista de la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. San Clemente cuenta con una altura aproximada de 1 800 m.s.n.m., y una precipitación media anual de 480 mm.

La estrategia familiar alimentaria, como la denominaremos, se trata de un conjunto de factores que posibilitan a las familias campesinas acceder o no a una alimentación diversificada.



La *estrategia familiar alimentaria*, como la denominaremos, se trata de un conjunto de factores que posibilitan a las familias campesinas acceder o no a una alimentación diversificada. Se debe entender diversidad como algo positivo nutricionalmente. La estrategia se traduce en diferentes dietas, generadas por la heterogeneidad social, producto de la globalización, es decir a la existencia de múltiples formas sociales dentro de un mismo contexto (Long, 1996:3).

La relación entre la *estrategia familiar alimentaria* y el debate campesinista–descampesinista, el cual por un lado manifiesta la permanencia y por otro lado da cuenta del debilitamiento y hasta la desaparición del campesinado, cobra relevancia al ser un elemento que denota la persistencia y vitalidad de este campesinado o por otro lado su desaparición. Es decir, la sobrevivencia del campesinado cobra sentido si pensamos en algo tan básico y cotidiano como la alimentación. Lo anterior, debido a que nos encontramos con pequeños productores que continúan alimentando al mercado nacional (población urbana) a través de *circuitos inferiores*, propios de economías informales, intensivos en mano de obra y de tipo más local (Santos, 1979: 33-37 citado en Azevedo Da Silva, 2009:17). Y además continúan alimentándose a sí mismos. Pero ¿cuál es la calidad de la alimentación con la que la agricultura familiar (campesina) se alimenta a sí misma?

Es conocido que los descampesinistas encuentran que los campesinos se transforman en trabajadores asalariados (Bartra, 1975 referenciado en Ferrer, 2004). Mientras tanto los campesinistas manifiestan que no existe un alto grado de proletarización tal como lo pre-

sentan los descampesinistas y este está sujeto a las necesidades de la finca. Para Warman, el campesino es definido de la siguiente manera:

[...] [L]a esencia de ser campesino se encuentra en la complejidad de las relaciones sociales que lo rigen. La vida campesina no está organizada por el salario, aun cuando se venda la fuerza de trabajo parte del año e incluso la mayor parte de él. Su vida está organizada por la participación en la comunidad, por su acceso a la tierra, por su pertenencia a una familia, por el intercambio no comercial de bienes, servicios y trabajo [...] (Bartra et al, 1979: 86).

A mi juicio, la teoría de Chayanov (1947) respecto a la organización económica campesina explica la persistencia de estas economías, en las que existe un interés prioritario por suplir las necesidades de la familia y de la finca, y esto se realizará en función de lo que él denomina la *relación consumidores/trabajadores*. Sin embargo, algo está claro y es que, como afirma Meillassoux (1997: 140), el sector doméstico se mantiene porque le es útil al mercado, porque de este modo puede subsidiar la alimentación y la reproducción social del campesinado y de otros sectores en favor del capital. Lo anterior es remarcable debido a que es el campesinado quien provee de alimentos al mercado nacional, con una reducida competencia frente a los agricultores capitalistas.

Dicho lo anterior, la subsistencia del campesinado se ve marcada por las persistentes relaciones con el mercado a través de lo que Van Der Ploeg denomina con el *Proceso de Externalización en la Agricultura* (1990: 18-19). Este proceso se manifiesta a través de las relaciones con el mercado debido a que tanto en la producción agrícola, a través de la adquisición de insumos (fertilizantes, semillas y pesticidas) así como también en la alimentación de la familia campesina, con la compra de alimentos provenientes del (mercado) y no únicamente de la producción para el autoconsumo, con lo cual estaríamos frente a un *Proceso de Externalización de la [Alimentación]*. A mi juicio si este proceso se cumple en su totalidad, y no sólo parcialmente, esta sería otra condición que debilitaría al campesinado. Por lo tanto, la alimentación se convierte en un elemento determinante para la supervivencia del campesinado.

Para explicar la subsistencia del campesinado a través de la configuración de una *estrategia alimentaria* para acceder a la alimentación podemos considerar la importancia de las redes sociales y familiares, para lo cual utilizaremos el *capital social* que según Bourdieu, se trata del:

[...] conjunto de recursos actuales o potenciales, vinculados a la posesión de una *red duradera de relaciones* más o menos institucionalizadas de interconocimiento e interreconocimiento: o dicho de otro modo, a la *pertenencia a un grupo*, en tanto en cuanto que conjunto de agentes que poseen no solo propiedades comunes (capaces de ser percibidas por el observador, por los demás o por ellos mismos) sino que están también unidos por vínculos permanentes y útiles” (2001: 83-84).

Evidentemente este *capital social* no podrá mantenerse por sí sólo, y para que tenga una utilidad debe relacionarse con otros capitales, como el capital económico por ejemplo. Esto se da de manera clara incluso en las relaciones familiares, las cuales unen a los seres humanos (familia extendida) para lograr la reproducción de la vida.

Puesto en claro lo anterior, reconocemos la importancia de la *estrategia alimentaria* de las familias para acceder a la alimentación y la calidad de la misma como un elemento que contribuye a la subsistencia del campesinado. Sin embargo, cabe señalar que al momento de proponer políticas públicas dirigidas a mejorar la alimentación y la nutrición de las familias campesinas, éstas han sido impulsadas desde una mirada biológica de la alimentación, aislando los factores que guían las elecciones alimentarias (Gracia, 2005: 161) y que finalmente no logran tener un impacto importante. Tal como manifiesta Fischler (1995: 14-16), la alimentación se ha concebido como la actividad de ingerir nutrientes, tales como: carbohidratos, vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Sin considerar que estos recursos provienen directamente de alimentos producidos en la agricultura familiar o en el caso de que exista mayor vinculación con el mercado, estos alimentos serán comprados. Todo dependerá de la *estrategia familiar alimentaria* que cada hogar adopte. Estrategia que asegurará la subsistencia del campesinado al ser una de las condiciones básicas para permitir su reproducción.

Metodología

Selección de los hogares

Las familias fueron seleccionadas en base a una encuesta denominada recordatorio de 24 horas¹. Esta encuesta se llevó a cabo en las comunidades por parte del equipo del proyecto WOTRO². Para efectos de comparación he tomado los correspondientes a las comunidades Jesús del Gran Poder y San Clemente. Las familias seleccionadas fueron aquellas que presentaban distinta diversidad en la dieta, en cada comunidad según la encuesta realizada previamente.

Para determinar la diversidad en la dieta, y la *estrategia familiar alimentaria* se utilizó el método etnográfico, a través de observación participante y entrevistas a informantes clave. Para la medición del consumo de alimentos en el hogar se hizo una adaptación de la *Guía técnica para medir el consumo de alimentos a nivel de hogar* (Swindale & Ohri-Vachaspati,

1 Metodología para determinar la diversidad en la dieta a nivel de hogar o a nivel de individuo.

2 El proyecto WOTRO es un proyecto de investigación multidisciplinario que investiga la heterogeneidad en el uso del agua para la producción de alimentos y en el uso de los alimentos para la nutrición. Esta investigación parte de un estudio más grande en tres comunidades de la Sierra Norte del Ecuador. El mismo está financiado por la Academia de Investigación de los Países Bajos.

2005:1). En base a esta guía y a talleres con conocedores del tema nutricional³ se construyeron las categorías de diversidad en la dieta (DD) de la siguiente manera: DD alta - mayor a 8 grupos de alimentos; DD media - 5, 6 o 7 grupos de alimentos; DD baja - menor a 4 grupos de alimentos. Para obtener esta información se realizó un diario alimentario por cada familia.

Se realizó un estudio de caso con cuatro familias, lo cual es una limitación ya que se trata de una pequeña muestra por comunidad. Para los estudios de caso se utilizó a la familia como unidad de análisis, esta unidad nos ayuda a identificar patrones que podrían replicarse en otras familias e identificar las situaciones generales en el entorno que éstas comparten en relación al tema alimentario. Al respecto es necesario destacar la importancia de la etnografía como método para realizar estudios alimentarios y su gran potencial metodológico para obtener datos profundos y reales sobre la alimentación de las familias.

Resultados

Tabla 1. Diversidad en la dieta

Hogares	Comunidad	Diversidad en la dieta (DD) Etnografía	Porcentaje de autoconsumo Etnografía
Hogar 1	San Clemente (Zona Baja)	DD "media" n. de grupos = 7	28%
Hogar 2	San Clemente (Zona Baja)	DD "baja" n. de grupos = 4	13,2%
Hogar 1	Jesús del Gran Poder (Zona Alta)	DD "media" n. de grupos = 7	6,2%
Hogar 2	Jesús del Gran Poder (Zona Alta)	DD "media" n. de grupos = 7	20%

Fuente: Elaboración propia en base a observación participante comparada con información de segunda mano.

Los resultados de la Tabla 1 explican la diversidad en la dieta dada por grupos de alimentos. Para los dos hogares de la Zona Alta hay una diversidad en la dieta "media", así como para el hogar 1 de la Zona Baja, mientras que para el hogar 2 de la Zona Baja hay una diversidad en la dieta baja. Por otro lado, en la Tabla 1 el porcentaje de autoconsumo representa el porcentaje de alimentos que se consumen en el hogar los cuales proceden de la finca. Para el hogar 1 de la Zona Baja el 28% de los productos que se consumen en el hogar provienen de la finca. Evidentemente este porcentaje se encuentra relacionado con la diversidad en la dieta media de esta familia. Así como en el caso del hogar 2 de la Zona Alta el cual también tiene un alto porcentaje de autoconsumo respecto de los otros hogares, y esto al igual que el ejemplo anterior da como resultado una diversidad en la dieta media.

3 Grupo de nutrición - Proyecto WOTRO.

Estrategias vinculadas directamente con los alimentos

La diversidad en la dieta se encuentra relacionada con la *estrategia familiar alimentaria*. Dentro de esta estrategia alimentaria hemos identificado los siguientes factores: alimentos comprados; producción para el autoconsumo; cría de animales; comercialización de los alimentos y acceso a la información nutricional. Cada factor tiene diferente nivel de importancia para cada familia, por la relevancia que tiene este factor en la provisión de la alimentación, como lo veremos en la Tabla 2. Es evidente que para las familias, tanto las de la Zona Alta como las de la Zona Baja, la comercialización de los cultivos contribuye en alta medida a la diversificación o acceso a la alimentación.

Tabla 2. Estrategias alimentarias que contribuyen a diversificar la dieta

Factores	Zona Alta		Zona Baja	
	Hogar 1	Hogar 2	Hogar 1	Hogar 2
Alimentos comprados	Alta	Media	Baja	Media
Producción para el autoconsumo	Baja	Baja	Alta	Alta
Cría de animales	Baja	Alta	Media	Media
Comercialización de los cultivos (alimentos)	Alta	Alta	Alta	Alta
Acceso a información nutricional	Media	Media	Media	Baja

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas y observación participante.

Zona Alta – Hogar 1

En referencia a los *alimentos comprados*, los más comunes en la dieta fueron: arroz, lenteja, azúcar, panela, pimienta roja, zanahoria, brócoli, cebolla, lechuga, limón, naranjilla, pimienta verde, plátano, tomate, tomate de árbol, avena, maíz, melloco, pan, tallarín, aceite y salchicha. Tomando como referencia a Van Der Ploeg (1990: 18-19) en el caso de esta familia podemos hablar de un *Proceso de Externalización de la [Alimentación]* alto, debido a que la mayoría de sus alimentos proceden del mercado (compras), y así mismo mantienen un porcentaje de autoconsumo bajo, respecto de las otras familias (6.2%).

Otro de los factores que conforman la *estrategia alimentaria* es la *comercialización de los alimentos*, en el caso de esta familia, los alimentos que se comercializan son quinua y habas, como ya se mencionó antes, en vista de que el precio de las habas es bajo, este alimento es destinado para el autoconsumo, incluso para la alimentación de los animales. Por otro lado, en el caso de la quinua, este se trata de un alimento que se comercializa en su totalidad, debido a que el precio de este cultivo se encuentra alto en el mercado (\$100 a junio de 2014 según la Unidad Nacional de Almacenamiento), por lo tanto se prioriza su comercialización. Es importante destacar, sin embargo, que la quinua no es un alimento de consumo habitual en la zona, ni en la familia. Sin embargo, los ingresos de la comercialización de este

cultivo contribuyen a la compra de alimentos en el mercado, y por lo tanto al aumento en la diversidad en la dieta, para esta familia una diversidad en la dieta “media”.

Por otro lado el haba es un alimento particularmente diferente puesto que al tener un precio bajo en el mercado es destinado por exclusividad al autoconsumo. Sin embargo, este mismo patrón no ocurre con la quinua, debido a la gran demanda de este producto en el mercado, y la escasa cultura de consumo de este alimento. El factor *producción para el autoconsumo* tiene un nivel de importancia bajo en esta familia. En la Tabla 3 podemos observar el calendario alimentario de la familia. El color gris medio se refiere al consumo de alimentos, el color gris oscuro hace referencia a la siembra del cultivo, mientras que el color gris claro nos refiere a la cosecha, utilizaremos esta misma referencia para los casos siguientes. Como podemos observar esta familia únicamente dispone de 3 cultivos, papa (en muy pequeñas cantidades), haba y quinua. En este hogar la estrategia alimentaria está conformada principalmente por: alimentos comprados y la comercialización de los alimentos.

Tabla 3. Calendario alimentario año 2014 Hogar 1 – Zona Alta

	Ene	Feb (2013)	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov (2013)	Dic
Estación de lluvias													
Estación seca													
Papa													
Haba													
Quinua													

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista y observación participante⁴.

Zona Alta – Hogar 2

La familia 2 de la Zona Alta presenta como factor de alta importancia la *cría de animales*. Esta familia se dedica a la crianza de ganado para producción de leche. Esta actividad les da acceso durante todo el año a este producto, sin embargo, este alimento no es de consumo habitual en la familia. A pesar de ello, la actividad de *cría de animales* les da ingresos cada quince días (\$90 aproximadamente) para la compra de otros alimentos y cubrir otras necesidades (educación, transporte, insumos, etc.). Esta familia recientemente se dedica a la cría de pollos, estos no serán para el consumo familiar, sino para la venta por libras en peso vivo, y representarán un ingreso para la familia.

⁴ En color negro se encuentran especificadas las estaciones, sea de lluvia o seca. En color gris medio muestra el consumo de alimentos en el hogar, el color gris oscuro muestra la siembra de estos alimentos, y el color gris claro, muestra la cosecha de estos alimentos o productos. Se usará esta misma referencia para los casos siguientes.

En cuanto al factor de *comercialización de los alimentos* claramente este se encuentra relacionado con el factor de *cría de animales*. Aquí se destaca la comercialización de la leche, principalmente. Esta se comercializa durante todo el año, en las mañanas (10 litros) y en las tardes (7 litros) en los centros de acopio de la comunidad más cercana. Además existe la comercialización de haba y papa. A pesar de que se comercializan estos cultivos, estos también forman parte habitual de la dieta de esta familia. En el caso de la papa, esta se encuentra disponible durante todo el año, no sólo por la producción propia, sino por ser un cultivo que se obtiene como parte parcial del pago en las jornadas de “cave” o cosecha de este cultivo en otros predios.

En la Tabla 4 podemos observar los cultivos disponibles en el calendario alimentario de esta familia. Los cultivos y alimentos son papa, haba y leche. La papa se encuentre disponible para el consumo durante todo el año, mientras que el haba se encuentra disponible para el consumo únicamente durante el mes de septiembre y noviembre, esto debido a que se trata de un cultivo altamente perecible por lo que no puede ser almacenado. Por su parte, la leche se encuentra disponible, al igual que la papa, durante todo el año. El 99% de la leche producida se entrega en los centros de acopio. Sin embargo, esta familia mantiene un porcentaje de autoconsumo del 20%, y una diversidad en la dieta media, esto se debe principalmente al factor redes familiares, el cual desarrollaremos más adelante.

Tabla 4. Calendario alimentario año 2014 Hogar 2 – Zona Alta

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Nov (2013)	Dic
Estación de lluvias													
Estación seca													
Papa													
Haba													
Leche													

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista y observación participante.

Zona Baja – Hogar 1

A través del análisis se comprobó que esta unidad de producción campesina mantiene un 28% de autoconsumo⁵. Es decir, uno de los factores que conforman la *estrategia alimentaria familiar* es la *producción para el autoconsumo*. A pesar de que este hogar no mantiene una diversidad en la dieta “alta”, es importante remarcar que esta alta diversidad, respecto de las otras familias se alcanza debido a la alta diversidad en la producción en la finca, como

5 Este valor se refiere al porcentaje de alimentos que son cultivados por la familia y que son consumidos dentro del hogar. Sean estos alimentos destinados para el mercado o sólo para el autoconsumo.

podemos constatarlo en el calendario alimentario de la Tabla 5. En este calendario cabe destacar a los cultivos como el fréjol de palo (guandúl y cabascango), ambos cultivos son propios de la zona y crecen de manera natural, no necesitan de aplicación de insumos (fertilizantes, pesticidas, etc.) y son importantes dado que se producen durante todo el año. El pimiento y el tomate son cultivos disponibles para el consumo, pero a diferencia de los otros cultivos que observamos en el calendario alimentario, estos son cultivados en mayor cantidad. Mientras que los otros cultivos son cultivados de manera diversificada unos con otros, en menores cantidades, destinados principalmente para el autoconsumo familiar.

La *comercialización de los alimentos* en el caso del hogar 1 de la Zona Baja, se basa principalmente en la producción de hortalizas, como el tomate y el pimiento. Estos alimentos son comercializados en el mercado mayorista de la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. Evidentemente estas hortalizas alimentan al mercado nacional (población urbana), sin embargo, también forman parte de la dieta de la familiar, sobre todo en el caso del tomate, que es el cultivo que más predomina (monocultivo). Existe un menor consumo de pimiento, y también una menor producción del mismo respecto del tomate.

Tabla 5. Calendario alimentario año 2014. Hogar 1 – Zona Baja

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Oct (2013)	Nov	Dic
Estación de lluvias	■								■				
Estación seca				■								■	
Fréjol	■			■									
Pimiento	■			■									
Tomate		■		■			■				■		
Arveja	■			■							■		
Morocho	■			■									
Cebolla			■		■								■
Maíz		■				■							
Guandúl	■		■		■		■		■			■	
Cabascango	■		■		■		■		■			■	
Naranja	■			■		■							■
Limón				■		■							
Aguacate				■						■		■	
Camote				■									
Lechuga	■			■									
Zanahoria	■			■		■							

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista y observación participante.

Zona Baja – Hogar 2

A través del análisis se comprobó que esta unidad de producción campesina mantiene un 13,2% de autoconsumo⁶ de la producción de la finca. A pesar de que respecto del hogar 1 de la Zona Alta este hogar presenta un porcentaje de autoconsumo mayor, es importante tomar en cuenta que el hogar 2 de la Zona Baja presenta una diversidad en la dieta “baja”, es decir una frecuencia de consumo de 4 grupos de alimentos diarios. La *producción para el autoconsumo* es importante en este hogar debido a que el fréjol, cultivo de la finca, es el principal componente de la dieta familiar.

En relación a la *comercialización de los alimentos*, el producto comercializable se trata también del fréjol, por lo que el alcance de la diversidad en la dieta compite con la comercialización de este alimento. Esta familia también comercializa camote y yuca, alimentos que no son de consumo habitual en la familia. Así también podemos observar en este caso particular que la madre de familia es quien se encuentra mayormente relacionada con los cultivos para el autoconsumo, y el padre de familia es quien se encuentra relacionado con la producción para la comercialización. Por otro lado, es importante remarcar los cultivos como el fréjol de palo: guandúl y cabascango, cultivos que en momentos de escasez de alimentos son tomados en cuenta como un alimento principal para componer la dieta de esta familia.

Tabla 6. Calendario Alimentario año 2014. Hogar 2 – Zona Baja

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun (2013)	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estación de lluvias	■	■	■							■	■		
Estación seca				■	■		■	■	■			■	■
Fréjol (rojo del valle)		■		■	■								
Fréjol (mantequilla)			■		■		■	■	■				
Guandúl	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Cabascango	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Cebolla				■				■	■				
Plátano				■	■								
Zambo				■			■		■				
Morocho			■						■	■	■	■	■
Camote						■	■	■	■	■			
Yuca						■		■					

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista y observación participante.

6 Este valor se refiere al porcentaje de alimentos que son cultivados por la familia y que son consumidos dentro del hogar. Sean estos alimentos destinados para el mercado o sólo para el autoconsumo.

En los casos presentados anteriormente hemos visto la relevancia de algunos factores para la diversificación en la dieta de las familias campesinas. Salta a la vista el tema de la comercialización de los cultivos y de qué manera este contribuye a diversificar la dieta, de manera distinta, pero en todos los casos. Es evidente que se dan fuertes vínculos con el mercado, lo que permite tanto un *Proceso de Externalización de la Agricultura*, así como lo que hemos denominado *Proceso de Externalización de la [Alimentación]*. Si tomamos en cuenta estos casos, ya no nos encontramos frente a un campesinado que prioriza las relaciones no comerciales, sin embargo, sí se trata de un campesinado que mantiene relaciones sociales complejas y que así mismo presta su mano de obra. Es una mezcla de factores sin los que de otra manera no podrían subsistir. Nos encontramos frente a un campesinado que se transforma pero subsiste. En relación a lo anterior analizaremos las estrategias que según el trabajo etnográfico fueron las más relevantes al contribuir a la diversificación en la dieta en las unidades de producción campesina, sin que estén relacionadas con los alimentos directamente, tales como: *trabajo asalariado*, y las *redes sociales y familiares*.

Trabajo asalariado

Zona Alta – Hogar 1

Precisamente esta familia no recibe un salario, más bien se trata de trabajos esporádicos que no permiten abandonar por completo el trabajo en la finca. El *trabajo asalariado* se muestra como un factor que aporta en la diversificación de la dieta, debido a que se obtienen mayores ingresos. En el caso del hogar 1 el padre del hogar dispone de trabajo “asalariado”. Este trabajo no es constante sino se da a través de trabajos esporádicos como: preparación del terreno, recolección y almacenamiento de pacas como alimento para ganado, e incluso trabajos fuera de la ciudad como: conductor de transporte de carga (DGCJGP1, 2014, comunicación personal). Sin embargo, el padre de familia no se desvincula del cuidado de la finca, es quien principalmente dedica tiempo a las labores de la tierra.

Zona Alta – Hogar 2

En el hogar 2, el padre de familia es quien tiene un trabajo “asalariado” con mayor frecuencia, sin embargo, este trabajo es bajo la figura de jornalero, es decir, el pago lo recibe por el trabajo realizado diariamente. La madre también realiza trabajo de jornalera en épocas de cosecha de papa, en donde reciben el pago, y también un pequeño porcentaje de la producción de papa para el consumo propio. Durante los fines de semana el hijo

mayor del hogar 2, es quien tiene trabajo “asalariado” como jornalero. El trabajo diario, deja una remuneración de USD 11. La madre manifiesta que sus hijos demandan alrededor de USD 7/día, para transporte y alimentación. Es decir un porcentaje de estos ingresos se destina a la alimentación de la familia, por lo que se muestra como un factor que incide en la diversificación de la alimentación. A pesar de realizar el trabajo como jornaleros, el padre, la madre y el hijo también dedican su fuerza de trabajo a los predios familiares (propios o “al partir”⁷).

Indirectamente los hijos también dedican su mano de obra a las actividades agrícolas familiares pero la diferencia es que ellos perciben un ingreso directo de esta actividad.



Zona Baja – Hogar 1

El trabajo asalariado en el caso de esta familia también se trata de un factor que compone la estrategia de supervivencia y que interviene en la diversidad de la dieta. En esta familia los dos hijos acceden a trabajo “asalariado”. Por este trabajo cobran lo que se denomina el jornal, el cual consiste en USD 10/día. Con este dinero los hijos cubren las necesidades relacionadas con la educación, ropa y alimentación fuera del hogar. Ellos habitualmente trabajan en las tierras de los abuelos. Al trabajar como jornaleros, ellos tienen acceso a la alimentación diaria durante el mediodía.

Los otros miembros del hogar, tanto madre, padre y la hija mayor dedican su mano de obra a las actividades agrícolas de la familia. Indirectamente los hijos también dedican su mano de obra a las actividades agrícolas familiares pero la diferencia es que ellos perciben un ingreso directo de esta actividad.

Zona Baja – Hogar 2

En cuanto al trabajo asalariado, en la familia existen dos miembros del hogar que acceden al trabajo “asalariado”. En el caso del padre de familia este trabajo es ocasional, él trabaja “al diario” con la hacienda, o cuando alguien en la zona lo requiere. Durante mi estancia, las actividades más comunes eran realizando las labores de riego y la cosecha de tomate. Mientras tanto el hijo mayor de la familia tenía un trabajo asalariado “formal”. Esto quiere decir que trabajaba durante tres años en una florícola en la provincia del Carchi y accede a un ingreso seguro mensualmente. Además él no dedica su mano de obra a las labores agrícolas

⁷ La producción “al partir” se da a través de relaciones de confianza y quiere decir que uno de los tratantes oferta su mano de obra, mientras que la otra parte ofrece su predio y los insumos que requiera la producción durante el ciclo productivo.

en el hogar, a diferencia del padre; sin embargo, es el hijo quien aporta al nivel de ingresos para la compra de alimentos en la familia.

Redes familiares y sociales

Para el caso de los hogares de la Zona Alta y de la Zona Baja, el *capital social*, en términos de Bourdieu, a través de la estrategia de redes familiares y sociales les ha permitido a las familias diversificar su dieta de manera directa o indirecta. Este *capital social* en combinación con otros capitales como el económico genera mayores beneficios. Las redes sociales y familiares en combinación con otros factores generan mayor diversificación en la dieta, si lo vemos desde el enfoque de nuestro estudio.

Zona Alta – Hogar 1

Para el caso del hogar 1 podemos observar que el acceso a alimentos para la diversificación de la dieta se da a través de redes familiares. Principalmente por parte del abuelo y la abuela, parientes del padre del hogar 1. Ellos son quienes hacen posible esta red. Además esta red les permite a los miembros del hogar 1 acceder a maquinaria, tierra y alimentos. Lo primero, pues es la familia quien pone a disposición del hogar 1, la maquinaria agrícola para la preparación del terreno, propio o para el uso en el trabajo “asalariado” o al jornal. Así mismo, esta red familiar hace posible el acceso a la tierra, para cultivos comerciales. Y finalmente, la red familiar alimenta. Para el caso del hogar 1, esta red le ha permitido a la familia acceder a alimentos no disponibles en la producción propia –leche y papas para el resto del año–, así como tener una fuente alterna para la alimentación de algunos miembros del hogar, como es el caso del padre. La consanguinidad, en el caso de esta familia juega un papel fundamental, para la reproducción de la vida en este hogar. Las relaciones de proximidad, posibilitan la sobrevivencia en términos alimentarios de esta familia campesina.

Zona Alta – Hogar 2

En esta familia las redes familiares y relaciones de consanguinidad ayudan a que la familia disponga de acceso a la tierra. Esto es posible a través del abuelo y la abuela, padres de la madre de este hogar. La familia accede a la tierra a través del préstamo de terrenos, en los mismos mantienen al ganado lechero, y además cultivan papa y haba, en *producción al partir* con los propietarios del terreno.

Entonces el capital social se torna importante al momento de acceder a la alimentación. Dadas estas relaciones de proximidad, el hogar 2 accede a los alimentos para el autoconsumo a través de los abuelos, en este caso los padres del padre de este hogar. Son ellos quienes, a través de su huerto familiar, ponen a disposición de esta familia los siguientes alimentos: lechuga, melloco, pepino dulce, habas, nabos, cebolla. Alimentos que se encuentran disponibles para la familia durante todo el año y que le permiten a esta familia tener una diversidad en la dieta “media”.

El padre del hogar 2 es socio de la Organización Comunitaria Unión y Progreso. Esta asociatividad le permite a la familia acceder a otros beneficios en pro de la subsistencia de la familia campesina.

[...]El propósito...era para trabajar por la comunidad... Sacar proyectos, hacer alguna cosa y trabajar juntamente con la comunidad, para cualquier trabajo. A veces vienen ayudas con ONG y se puede. Como anteriormente nosotros trabajábamos en siembra de papas para hacer semilleros y si es posible vender a los que necesiten apoyar...Funciona así, se hacen los préstamos a los socios, y los pagos, los préstamos se hacen a 1,7%. Se presta a 6 meses hasta 8 meses, un valor de \$200 y \$300 y se va pagando cada 15 días, según las letras. [...] (DMPJGP1, 2014, entrevista).

La familia tiene acceso a préstamos al ser el padre miembro socio de esta organización. Por otro lado, pertenecer a una organización hace que la familia pueda tener acceso a oportunidades provenientes de Organizaciones No Gubernamentales, de esta manera la familia tuvo la oportunidad de empezar con la crianza de los pollos para su posterior venta.

Zona Baja – Hogar 1

El capital social, visto en nuestro estudio como redes familiares y sociales le posibilita a esta familia disponer de la dieta que poseen. Como observamos, esta familia dispone de una diversidad en la dieta “media”. Y respecto a las otras familias se trata de una diversidad en la dieta alta.

Consideramos que uno de los factores que posibilitan la diversificación en la dieta de este hogar, se trata de las redes familiares cercanas, aquellas dentro de la misma comunidad, como los abuelos, así como las redes familiares lejanas, como hermanos y primos. Esto permite que el hogar 1 de la Zona Baja, tenga acceso a una variedad de alimentos, como maíz, papas, trigo, cebada, habas y arvejas, que en ocasiones llegan al hogar a través del mecanismo de intercambios.

En el caso de esta familia creemos mucho más importantes las redes sociales ya que éstas posibilitan el acceso a la tierra, a través de la *producción al partir*. Esta actividad es posible a

través de las relaciones de confianza que se establecen. Gracias al acceso a la tierra a través de la *producción al partir*, el hogar 1 de la Zona Baja tiene la posibilidad de usar el terreno propio –el predio cerca de la casa– para la producción de alimentos para el autoconsumo. Mientras que en el terreno con la *producción al partir* se dispone un patrón de cultivo diversificado, entre cultivo comercial, y cultivo para el autoconsumo, priorizando el comercial.

Zona Baja – Hogar 2

Las redes sociales y familiares en esta familia son escasas, y no existen muchas relaciones de confianza para acceder a la *producción al partir* debido a malas experiencias previas. Las relaciones más fuertes se dan entre la familia y la hacienda, sin embargo, estas son inequitativas en cuanto al acceso a recursos como la tierra y el agua. Consideramos que este es un factor que dificulta la diversificación de la dieta en esta familia, como observamos esta familia es la que dispone de una diversidad en la dieta “baja”. A diferencia de los tres hogares citados anteriormente, las redes familiares pueden ser un aspecto determinante en el alcance de la diversidad en la dieta en esta familia.

La producción para el autoconsumo continúa siendo un factor determinante en el alcance de la diversidad en la dieta de las familias campesinas, y es un elemento importante que conforma la *estrategia familiar alimentaria*.



Conclusiones

La producción para el autoconsumo continúa siendo un factor determinante en el alcance de la diversidad en la dieta de las familias campesinas, y es un elemento importante que conforma la *estrategia familiar alimentaria*. Sin duda, en unas familias la producción para autoconsumo es un factor más importante que en otras, en todas las familias se producen alimentos para consumir en el hogar, sin embargo sólo en una familia este elemento contribuye a la diversidad en la dieta de manera importante (hogar 1, Zona Baja). Evidentemente, esto denota la reducida importancia de la producción para el autoconsumo proveniente de la agricultura familiar para la alimentación. Lo anterior, y en relación a los casos observados, se ve limitado en parte por la comercialización de los cultivos, la cual en muchos casos resulta ser prioritaria.

En cuanto a la comercialización de los alimentos como factor que promueve la producción agrícola. Esta producción para la comercialización principalmente se basa en monocultivos de ciclo corto. Si bien la comercialización indirectamente es un factor que alimenta

a la familia campesina, el hecho de que la comercialización promueva el monocultivo imposibilita que la familia disponga de diversidad de cultivos, lo cual se refleja en la diversidad en su alimentación. En ninguno de los casos existe una diversidad en la dieta alta, es decir mayor a ocho grupos de alimentos, lo que sería nutricionalmente adecuado. Lo anterior es preocupante pues en todos los casos las familias son proveedoras de alimentos para el mercado nacional (población urbana), en su conjunto, a través de la producción de leche, papa, haba, quinua, tomate, pimiento y fréjol (cultivos comerciales) estarían proveyendo de una diversidad de alimentos a este mercado, a esta población urbana, sin embargo, de manera individual no logran abastecerse a sí mismos de una alimentación altamente diversificada. Los alimentos que encontramos en mercados mayoristas o minoristas, sin duda tienen una carga subsidiada por la economía campesina o economía doméstica (Meillassoux, 1997: 140), la cual desconocemos al momento de pagar el precio de un producto proveniente de la agricultura familiar.

Por otro lado, consideramos que el *capital social* (Bourdieu, 2001: 83-84), visto en nuestro estudio como redes sociales y familiares, se torna en un factor de vital importancia y que hace la diferencia entre el alcance de una dieta más diversa o menos diversa. Lo anterior debido a que conocemos que el modo de producción campesina se caracteriza por una limitada disponibilidad de recursos, sin embargo, a través de estas redes la familia puede acceder al recurso tierra, a través de lo que se denomina *producción al partir*, este factor entonces posibilita el aumento y relativa diversificación en los cultivos y por tanto en la alimentación de las familias. A simple vista podemos notar que las familias que no poseen redes familiares y sociales fuertes, con relaciones de confianza ya establecidas, están relacionadas con familias con baja diversidad en la dieta. Por lo tanto estas redes sociales y la consanguinidad, en conjunto con otros factores, forman una *estrategia alimentaria*, la cual promueve y es fundamental para la reproducción de la vida de las familias campesinas, permitiéndoles asegurar su alimentación, que se torna en un elemento clave para la supervivencia del campesinado.

Bibliografía

- Azevedo da Silva, C. (2009). La configuración de los circuitos “de proximidad” en el sistema alimentario: tendencias evolutivas. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 11-32.
- Bartra, R. (1975). *La teoría del valor y la economía campesina: invitación a la lectura de Chayanov*. En: Comercio Exterior. México.
- Bartra, A. y Paré. L. (1979). *Polémica sobre las clases sociales en el campo mexicano*. México: Editorial Macehual.
- Coello, M. (1981). ¿Recampesinización en la descampesinización? *Revista Mexicana de Sociología*, 329-342.

- Chayanov, A. A. (1974). *La organización de la unidad económica campesina*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Ferrer, G. (2004). Campesinistas y descampesinistas, el debate y su influencia en los programas de intervención. *Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario*, 217-228.
- Fischler, C. (1995). *El (h)omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Gracia, M. (2005). MANERAS DE COMER HOY Comprender la modernidad alimentaria desde y más allá de las normas. *Revista Internacional de Sociología*, 159-182.
- Kay, C. (2005). Enfoques sobre el Desarrollo Rural en América Latina y Europa desde Mediados del Siglo Veinte. 337-429.
- Long, N. (1996). Globalización y Localización: Nuevos Retos para la Investigación Rural. In S. Lara, & M. Chauvet, *La Inserción de la Agricultura Mexicana en la Economía Mundial*, 1-19.
- Meillassoux, C. (1977). *Mujeres, graneros y capitales*. México, D.F.: siglo xxi editores, s.a. de c.v.
- Santos, M. (1979). O espaço dividido. Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Francisco Ales ed.
- Van Der Ploeg, J. D. (1990). *LABOR, MARKETS, AND AGRICULTURAL PRODUCTION*. Oxford: Westview Press.
- _____ (2006). O modo de produção camponês. En S. Sschneider (Org.), *A diversidade da agricultura familiar* (págs. 13-54). Porto Alegre: UFRGS.
- Warman, A. (1988). Los campesinos en el umbral de un nuevo milenio. *Revista Mexicana de Sociología*, pp. 3-12.



Contra-punto

Censos y registros de la agricultura familiar en Argentina: esfuerzos para su cuantificación

Censuses and registers on family farming in Argentina: efforts for its quantification

Raúl Paz* y Cristian Jara**

Fecha de recepción: agosto 2014
Fecha de aceptación: noviembre 2014

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar la forma en que se instalan los debates en torno a la agricultura familiar en la Argentina de los últimos años. El interés por conceptualizarla está presente en el ámbito académico, técnico y político. Por otra parte, el artículo intenta mostrar las dificultades de cuantificación en relación con la heterogeneidad espacial y la diversidad de actores que integran la agricultura familiar en el país. Para ello, se realizará una breve comparación entre la región más rica de Argentina (la pampeana) y una de las regiones más pobres (el noroeste). Asimismo, se aborda los resultados del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) en la provincia de Santiago del Estero a los efectos de presentar ciertas líneas metodológicas tendientes a una mejor conceptualización del sector.

Palabras clave: agricultura familiar; cuantificación; RENAF (Registro de la Agricultura Familiar); Argentina.

Abstract

This paper aims to analyze the debates about family farming in Argentina during the last years, particularly the need to quantify and characterize the sector. The interest in conceptualization can be found in the academic, technical and politic fields. The article tries to show the spatial heterogeneity and diversity of actors of family farming. Therefore, it includes a brief comparison between the richest region of Argentina (The Pampas) and one of the poorest regions (Northwest). In relation to this, the results of the RENAF (National Registry of Family Farming) in the province of Santiago del Estero are used to characterize the sector and present certain methodological lines aimed at a better conceptualization.

Key words: family farming; quantification; RENAF (registration of family farming); Argentina.

* Raúl Paz es Doctor en Ciencias Agrarias. Investigador del CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Técnica), Docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Coordinador del Equipo de Investigación de Sociología Rural. Correo electrónico: pazraul5@hotmail.com

** Cristian Jara es Doctor en Humanidades y becario del CONICET. Magister en Estudios Sociales para América Latina. Equipo de Investigación de Sociología Rural. Correo electrónico: cristianjara_cl@hotmail.com

Introducción

En diciembre de 2003, la Coordinadora de Organizaciones de la Producción Familiar del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) solicita, en la Cumbre de Presidentes de Montevideo, la creación de un grupo *ad hoc* para que proponga una agenda de políticas diferenciales. Así es que surge la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), lo cual constituye una de las primeras señales que pone en discusión el término *agricultura familiar* en Argentina (Márquez, 2007).

Históricamente, los sistemas oficiales orientados a la registración de datos, como los censos nacionales agropecuarios, han carecido de variables que permitan una mejor identificación de la agricultura familiar, contribuyendo a su invisibilidad.



Este logro regional fue seguido por la creación del FONAF (Foro Nacional de la Agricultura Familiar) en Buenos Aires, que se concretó en 2005. Posteriormente, en el tercer plenario del FONAF de 2007, se anunciará la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), impulsado a partir de la Resolución 25/07 del MERCOSUR.

De esta forma, el sector de los pequeños productores fue paulatinamente visibilizado en la agenda de las políticas del Estado. Dicho reconocimiento también es fruto de una histórica lucha de los movimientos sociales agrarios y la voluntad política que se generó a partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación. Lo cual se evidencia en la creación de una nueva institucionalidad (con entidades como la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en 2008).

En este contexto, una de las preocupaciones por parte de los diseñadores de políticas públicas ha sido precisamente la necesidad de cuantificar y caracterizar al sector. Aquellos desafíos abrieron intensos debates en el ámbito académico, en el ámbito técnico y en el ámbito político.

En la academia, se desarrollaron varios esfuerzos por interpretar a la agricultura familiar¹ y su heterogeneidad. El interés por conceptualizarla ha sido controversial, y ha influido notablemente en las esferas políticas donde se definen las acciones de intervención estatal (Soverna, Tsakoumagkos y Paz, 2008; López y Prividera, 2011; Ramilo y Prividera, 2013).

En el campo técnico-operativo también se observan serias dificultades por compatibilizar los marcos conceptuales con las cuestiones operativas. Históricamente, los sistemas oficiales orientados a la registración de datos, como los censos nacionales agropecuarios, han carecido de variables que permitan una mejor identificación de la agricultura familiar, contribuyendo

¹ El artículo de Craviotti (2012) analiza la diversidad de conceptos, enfoques, metodologías y dimensiones de análisis para abordar los estudios del sector de la agricultura familiar.

a su invisibilidad, en cuanto han ocultado su potencial productivo y sus posibilidades de jugar un papel más activo en la construcción de un desarrollo endógeno sostenible (Paz, 2008).

Por lo anteriormente expuesto, este artículo analiza los recientes intentos de cuantificación de la agricultura familiar en Argentina y su caracterización socioeconómica. Para ello se recurre a dos de las definiciones más difundidas en el país. La primera corresponde a Obschatko, Foti y Román (2007), surgida de los requerimientos del PROINDER (Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios) y la otra definición corresponde al Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF). En un segundo momento, el artículo trata de mostrar, brevemente, la heterogeneidad de la estructura agraria argentina. En la tercera parte del artículo se aborda los resultados del RENAF en la provincia de Santiago del Estero², a los efectos de presentar ciertas líneas metodológicas tendientes a captar esa diversidad.

La difusión y los usos políticos de la expresión agricultura familiar

En los países desarrollados, el concepto de agricultura familiar se acuñó durante la primera mitad del siglo XX. En cambio, en América Latina, el concepto más utilizado y desarrollado ha sido el de *campesinado*. Las luchas agrarias en todo el continente permitieron visibilizar al sector campesino como un sector social sometido históricamente a situaciones de inequidad, debido en gran parte a las estructuras agrarias caracterizadas por la existencia del modelo latifundista. Con el propósito de resaltar la existencia de una estructura agraria dicotómica y desigual, el concepto de campesino se hizo equivalente al de *minifundista* (Salcedo, De la O y Guzmán, 2014)

Sin embargo, relegar el término campesino por otros como “pequeños productores” o, ligado al tamaño de la parcela, “minifundistas” lleva implícito una visión economicista que recorta el sentido de la acción excluyendo los aspectos culturales y políticos.

Durante las décadas de los 70, se produce un resurgimiento de las teorías de Chayanov y su difusión en la región, con el consecuente auge de los análisis teóricos que intentaron profundizar los estudios sobre su permanencia, su racionalidad no capitalista y su papel en la generación de productos agropecuarios para el sistema capitalista. No obstante, desde la década de los 80, la agricultura campesina quedó rezagada en la región bajo la hegemonía del neoliberalismo, mediante el impulso de la agricultura empresarial, especialmente de exportación. Por lo general, los gobiernos de aquellos años veían en la pequeña agricultura a un sector pobre, sin posibilidades de desarrollo y destinatarios de políticas focalizadas.

2 Actualmente Santiago del Estero presenta el mayor número de RENAF relevados y procesados con respecto a total del país. El Censo Nacional Agropecuario de 2002 da cuenta de 20 949 explotaciones agropecuarias para la provincia y el RENAF en la actualidad tiene 17 561 encuestas de agricultores familiares, representando el 84% del total de explotaciones en la estructura agraria provincial.

No obstante, la instalación en la agenda del MERCOSUR de la *agricultura familiar* a principios del siglo XXI es un síntoma de que se trata de una categoría política emergente, con creciente legitimidad social. En este marco, uno de los lugares comunes es la consideración de que se trata de una realidad heterogénea, pero a la hora de interpretar la realidad, no están descartadas las concepciones duales. Si se adopta una concepción dual de la estructura agraria (dividida, por ejemplo, entre campesinos y agronegocios, estilo económico y estilo moderno, unidades no competitivas y competitivas) se pierde de vista la variada situación en que las unidades familiares producen y se reproducen: “De adoptarse una visión dualista, de igual modo serán las propuestas de políticas: para unos habrá políticas compensatorias y para otros, productivas” (Soverna, Tsakoumagkos y Paz, 2008).

Por tanto, en las páginas siguientes se ofrece una mirada panorámica de las tentativas por cuantificar esa complejidad que es la agricultura familiar, las diferencias regionales y la diversidad de racionalidades productivas existentes en Argentina.

Los primeros esfuerzos de cuantificación y las definiciones del PROINDER y el FONAF

En el año 2006, el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) de la SAGPyA (Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación), propició la necesidad de definir y cuantificar a la pequeña producción agropecuaria en base a información del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002. Para ello, se convocó al IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) que armó un grupo *ad hoc* y produjo un documento en el que se adopta una definición de pequeños productores que por su amplitud puede asimilarse al de agricultura familiar. Allí se identifican tres tipos de pequeños productores diferenciados por la escala de las explotaciones agropecuarias (tierra y/o capital), teniendo en cuenta diferencias regionales.

La definición operativa adoptada por el estudio (Obschatko, Foti y Roman, 2007) quedó subordinada a las posibilidades que ofrecen los datos de los censos agropecuarios y considera pequeño productor a quien dirige la explotación agropecuaria, trabaja directamente en ella y no posee trabajadores no familiares remunerados permanentes. Sobre este recorte, se agregaron restricciones: una superficie máxima total que pudiera en las mejores condiciones tecnológicas ser manejada con el trabajo directo del productor, el de su familia y el de personal contratado transitoriamente o la utilización de contratistas; una superficie máxima cultivada en las mismas condiciones (en ambos casos diferenciada por regiones) y, además, se excluyeron aquellas explotaciones agropecuarias (EAPs) que tuvieran como forma jurídica a la Sociedad Anónima o a la Sociedad en Comandita por Acciones. Con esta metodología, se identificaron 218 868 EAP (65,6% del total país) que ocupaban en 2002, el 13,5% (23 196 642 hectáreas) de la superficie total.

Asimismo, se definieron tres tipos de pequeños productores utilizando indicadores de nivel de capitalización según posesión de tractor, número de unidades ganaderas, superficie efectivamente regada, superficie implantada con frutales y superficie con invernáculos.

Cuadro 1. Tipos de pequeños productores según los criterios del IICA-PROINDER

Tipo de PP	Cantidad	% sobre total de PP	Superficie promedio
PP capitalizado	47 032	21	242
Estrato intermedio	58 602	27	107
PP de subsistencia	113 234	52	52
Total	218 868	100	133,6

Fuente: Obschatko, Foti y Román (2007).

Por su parte, el FONAF (2006) propone una definición cualitativa sobre la Agricultura Familiar, considerándola como:

[...] una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias (FONAF, 2006: 9).

El FONAF tiene en cuenta la diversidad de actores (campesino, chacarero, colono, sin tierra, los trabajadores rurales y pueblos originarios) y actividades (productivas, extractivas y de servicios) que se realizan, pero fundamentalmente rescata una “forma de vida”, una “cuestión cultural”. La necesidad de establecer categorías de agricultores familiares para orientar políticas diferenciales lleva a operacionalizar el concepto a partir de varios indicadores: destino de la producción (autoconsumo, mercado), lugar de residencia (predial, extrapredial rural, urbana), ingresos extraprediales (% del total de ingresos), ingresos netos (estratificados en base al costo de la canasta básica, con un tope de 15 canastas básicas mensuales), mano de obra familiar (en trabajo, gerenciamiento y administración, o comunidades aborígenes) y empleo de mano de obra complementaria (transitoria y/o permanente con un tope de 3 trabajadores permanentes). En consecuencia, las categorías resultantes son cinco:

- *Categoría A:* Subsistencia: producen sólo para autoconsumo, tienen ingresos netos totales máximos de 2 canastas básicas, de los cuales el 100% pueden ser extra prediales.
- *Categoría B:* Reproducción simple: desde esta categoría en adelante siempre hay producción para el mercado y para el autoconsumo; el ingreso total es de hasta 4 canastas básicas, del cual el 70% puede ser extra predial.

- *Categoría C:* Reproducción ampliada con nivel bajo de capitalización: los ingresos pueden llegar a 6 canastas, y de ellos el 50% pueden ser extra prediales y pueden tener un trabajador permanente (en las próximas categorías, éstos últimos irán en aumento).
- *Categoría D:* Reproducción ampliada con nivel medio de capitalización: con ingresos máximos equivalentes a 10 canastas, de los cuáles el 30% pueden ser extra prediales.
- *Categoría E:* Capitalizado con capacidad de reproducción y crecimiento: los ingresos llegan a 15 canastas y el peso de los ingresos extra prediales tiende a ser muy bajo (15% como máximo); y pueden tener hasta 3 trabajadores permanentes.

La definición del foro es más amplia, puesto que incluye desde los trabajadores sin tierra hasta las unidades capitalizadas que tienen con un máximo de tres trabajadores remunerados no familiares permanentes, lo cual eleva el techo de la agricultura familiar.



contratación de mano de obra no familiar permanente en la concepción del FONAF, que establece una diferencia cualitativa con la del IICA-PROINDER. Podría interpretarse que si los trabajadores asalariados son muy pocos no perdería centralidad el trabajo familiar. Sin embargo, bajo las condiciones tecnológicas actuales, con los tres trabajadores que admiten las categorías establecidas por el FONAF, incluiría a empresas agropecuarias (Soverna Tsakoumagkos y Paz, 2008).

Igualmente, existe discrepancia entre los criterios establecidos por el FONAF y los finalmente adoptados por el RENAF. Por ejemplo, el límite establecido para ingresar al registro es la utilización de un máximo de dos trabajadores permanentes.

En suma, la definición del foro es más amplia, puesto que incluye desde los trabajadores sin tierra hasta las unidades capitalizadas que tienen con un máximo de tres trabajadores remunerados no familiares permanentes, lo cual eleva el techo de la agricultura familiar.

En las definiciones presentadas hay elementos comunes y diferencias conceptuales y operacionales. Ambas definiciones mantienen en común la centralidad del trabajo y del gerenciamiento familiar de la unidad de producción. A partir de allí pueden identificarse diferencias sustanciales (Soverna, Tsakoumagkos y Paz, 2008).

La definición conceptual de agricultura familiar del IICA-PROINDER remite a una unidad productiva que existe en función de la producción agropecuaria y forestal gestionada por una familia. En cambio la definición conceptual del FONAF hace referencia a elementos culturales, a un estilo de vida a la transmisión de valores.

Por otro lado, hay divergencias en la delimitación misma del universo. La primera es la posibilidad de

La heterogeneidad de la agricultura familiar en Argentina: una panorámica de la región pampeana y del noroeste argentino

En Argentina existe una desigual conformación económica y social que se expresa en las irregulares formas de penetración capitalista en el agro. En este trabajo se hará una breve referencia a esta estructura agraria dual y la conformación de múltiples sujetos que integran la agricultura familiar en el país, a partir de la comparación entre la región pampeana y la Región NOA³ (Noroeste Argentino).

La pampa húmeda, ubicada en el centro del país, ha sido históricamente una región donde el capitalismo se ha desarrollado con mayor intensidad no solo por la presencia de los más importantes puertos y distritos industriales sino también por un esquema productivo de ganadería vacuna de alta calidad y cultivos de cereales, orientado a la exportación. Al clima templado y la disponibilidad de agua de sus llanuras se le sumaron, en las últimas décadas, las innovaciones tecnológicas (como ser la siembra directa y las semillas transgénicas) y modelos de inversión centrado, principalmente, en la producción de soja. Lo cual significó una reactivación del modelo agroexportador tradicional.

Por su parte, la región del NOA (Noroeste Argentino) constituye en sí misma una gran diversidad agroecológica y socioeconómica, lo cual dificulta las generalizaciones, pero que tiene en común el menor desarrollo del capitalismo en relación con la región pampeana y la persistencia significativa de pequeñas explotaciones agropecuarias en tensión con el latifundio. Por ejemplo, mientras que en los valles fértiles se desarrolla una agricultura intensiva de caña de azúcar, tabaco y olivo, los campesinos de la Puna y del monte chaqueño practican la ganadería de subsistencia y el uso comunitario del bosque (Paz, de Dios y Gutiérrez, 2014).

Ésta desigual conformación de las regiones también se asocia con la distribución y concentración diferencial de los pequeños productores en el espacio rural argentino. El Cuadro 2 muestra la magnitud con que se presenta la pequeña producción en las regiones pampeana y del noroeste.

Cuadro 2. Número de Explotaciones Agropecuarias (EAPs) y superficie media, para el total de pequeños productores (PP) en la región pampeana y noroeste

Región	Explotaciones Agropecuarias Totales		Total de Explotaciones Agropecuarias de Pequeños Productores		
	<i>EAPs</i>	<i>Superficie Media</i>	<i>EAPs</i>	<i>Superficie Media</i>	<i>% con respecto al total</i>
Pampeana	138 828	533	58 741	145	42%
NOA	67 373	393	54 684	56	81%
País	332 057	588	218 868	107	

Fuente: Obschatko, Foti y Román (2007) y INDEC (2007)

3 Características similares a la región NOA (compuestas por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca) tiene la región NEA (Noreste) y una parte importante de la región Cuyo.

Al analizar la participación del total de las EAPs de pequeños productores con respecto al total para cada región, se observa que el 81% de las explotaciones de la región del noroeste son de pequeños productores; mientras que para la región pampeana es sólo del 42%.

A esta distribución más concentrada de la pequeña producción en la región del NOA, es importante también considerar la heterogeneidad al interior del propio sector. Tal diferenciación es reconocida tanto en ámbitos académicos como en técnico-políticos y queda materializada en el documento del IICA-PROINDER con el uso de los tres tipos y en el documento del FONAF con la conceptualización de las cinco categorías de productores.

Cuadro 3. Número de Explotaciones Agropecuarias (EAPs) y superficie media, para los distintos tipos de pequeños productores (PP) en la región pampeana y noroeste

Región	TIPO 1 (capitalizado)			TIPO 2 (intermedio)			TIPO 3 (subsistencia)		
	EAPs	%	Superficie Media	EAPs	%	Superficie Media	EAPs	%	Superficie Media
Pampeana	21 760	36	236	20 649	35	113	16 332	29	72
NOA	4 778	8	162	10 722	20	85	39 184	72	37
País	47 032	21	242	58 602	27	107	113 234	52	52

Fuente: Obschatko, Foti y Román (2007) y INDEC (2007)

Mirando la información en relación a los tres tipos, se observa la fuerte presencia del Tipo 1 y 2 para la región pampeana, mientras que es el Tipo 3 (el más pobre del sector agrario) el que prevalece fuertemente en la región del noroeste. Estos datos, aunque generales, no solo denotan la magnitud y las características con que se presenta la pequeña producción en estas regiones, sino que además explica la particular desigualdad de la transformación capitalista en el agro argentino y sus implicancias en el desarrollo: los campesinos (Tipo 3) ubicados en la región del noroeste y los agricultores familiares más capitalizados (Tipo 1 y 2) en la región pampeana.

Al comparar los datos del CNA 2002 con el anterior realizado en 1988 (CNA88), se observa que la caída del número de explotaciones agropecuarias alcanzó el 21% en todo el país, lo cual equivale a 89 146 explotaciones (Lazzarini, 2004). La desaparición de cerca del 65% con 57 426 explotaciones queda explicada por la propia región pampeana.

Contrariamente, la región del noroeste en su conjunto presenta una disminución sólo del 7% (4 810 explotaciones). Ahora bien, si se analiza individualmente por las provincias que componen la región, se observa que Santiago del Estero ha mantenido constante sus explotaciones, mientras que Salta y Jujuy han incrementado en un 12% y 5%, respectivamente. Es en este contexto donde se abren distintas líneas de argumentación para explicar

tales procesos⁴ y las diferentes preocupaciones conceptuales por entender la agricultura familiar en las distintas regiones.

Sin embargo, el debate académico se ha concentrado principalmente en la región pampeana y ha tenido como preocupación central los cambios que ha experimentado la explotación familiar capitalizada (Tipo 1 y Tipo 2) en el marco de los procesos de transformación agraria reciente (Gras, 2009; Graciano y Lázaro, 2007; Cloquell, Propersi, Preda y De Nicola, 2007; Craviotti y Gras, 2006; López y Prividera, 2011; Ramilo y Prividera, 2013). Una cuestión clave fue, por ejemplo, que la expansión de la producción de soja en grandes extensiones hizo que muchos chacareros o agricultores familiares dejen de producir para comenzar a alquilar sus tierras. De esta forma, hoy es materia de profundos debates las estrategias de reproducción de estos pequeños o medianos propietarios que se convirtieron en rentistas.

En cambio, la composición de los actores agrarios en el noroeste es muy distinta y como consecuencia la preocupación académica está puesta más bien en la persistencia de las lógicas campesinas, el distanciamiento del mercado, la valoración de los recursos locales, los movimientos sociales agrarios y la construcción de conductas defensiva o de *resistencia campesina* (Van Der Ploeg, 2010; Paz y Jara, 2012; Rodríguez y Jara, 2013), donde el manejo de ciertas actividades productivas y en especial el uso del recurso pecuario constituyen su principal basamento. Un trabajo en la Puna jujeña (Paz *et al.*, 2011) busca analizar la diferenciación y la forma que asumen los procesos de mercantilización en el cambio agrario de los pastores puneños, donde estos actores agrarios despliegan estrategias para garantizar la reproducción de su modo de vida en un contexto caracterizado por la marginalidad y hostilidad agroecológica. La base de la persistencia por parte de estos actores agrarios, al igual que muchos campesinos ubicados en amplios espacios (como los montes chaqueños, por ejemplo), radica en las grandes extensiones de tierra asociada a la presencia de un sistema pecuario considerable junto a un proceso de escasa mercantilización. La dimensión pecuaria y su movilidad en grandes extensiones, resultan elementos claves para el mantenimiento de estos sistemas, donde los procesos de mercantilización/no mercantilización son comprendidos en las estrategias productivas y reproductivas.

Una cuestión clave fue, por ejemplo, que la expansión de la producción de soja en grandes extensiones hizo que muchos chacareros o agricultores familiares dejen de producir para comenzar a alquilar sus tierras.



4 No es objetivo del artículo buscar explicar los procesos de transformación en estas regiones, pero sí entregar elementos que permitan entender la especificidad de los actuales ejes del debate sobre la agricultura familiar para cada región. Para quien le interese profundizar sobre los distintos niveles de transformación agraria y su influencia en los procesos de diferenciación de los distintos actores que componen la agricultura familiar ver Paz (2008 y 2011).

Así, el debate académico sobre la agricultura familiar en Argentina presenta especificidades que son impulsadas tanto por la heterogeneidad espacial como por la diversidad de actores que conforman el propio sector. Esta característica le otorga cierta complejidad tanto en el ámbito conceptual-académico como técnico-político y abre varios frentes de discusión con sus respectivas implicancias en las acciones institucionales.

Los resultados parciales del RENAF

Desde la conformación del FONAF, se expresa la necesidad de contar con mejor información sobre el sector y se propone la creación de un Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Esta iniciativa se concreta en el año 2007 con la creación de dicho registro mediante Resolución N° 255/07 de la SAGPyA.

A mayo de 2014, el RENAF lleva ejecutados 166 537 registros (explotaciones agropecuarias) a nivel país (RENAF, 2014). El formulario aplicado para el registro fue elaborado a partir de una planilla ya existente en el Ministerio de Agricultura. Posteriormente, se convocó al FONAF para su revisión y para la incorporación de temáticas que no estaban contempladas. La unidad de análisis son los Núcleos de Agricultores Familiares (NAF), definida operativamente como:

Aquellas personas o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas el concepto equivale al de comunidad. (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina, 2007: 11)

Cabe aclarar que una de las limitaciones del RENAF es que, en la práctica, se registran principalmente a los productores beneficiarios de programas del Estado, mientras que para el resto de los productores la inscripción es voluntaria, lo cual deja entrever un sesgo significativo ya que hay una parte del sector que no ha sido registrada. En efecto, se desprende la importancia del papel de los técnicos y demás mediadores del Estado en la visibilidad del sector y en su reconocimiento como productores familiares. De este modo, los mediadores (tales como técnicos, ONG, iglesias) continúan siendo un factor clave en la (re) construcción y redefinición de las identidades de los sujetos del agro argentino (Schiavoni, 2005).

En un informe publicado por el RENAF (2014), se procesó algunos datos sobre el peso y las características de la agricultura familiar a nivel país y por regiones. Allí se presentan resultados del registro de 86 721 Núcleos de Agricultores Familiares (NAF). La información tiene un carácter preliminar, en tanto no se han completado controles de consistencia y verificación de toda la información. Además hay un nivel de agregación que está dado por datos totales y promedio solamente.

En cuanto a las actividades realizadas en el predio por NAF se puede confirmar el peso de la actividad pecuaria, que es realizada por el 77% de las explotaciones familiares. Mientras que la agricultura es realizada por un 69% de las mismas. Luego le siguen, en menor peso, la agroindustria (16%), la artesanía (9%), la recolección (9%), la caza (3%), la pesca y la acuicultura (4%) y el turismo rural (1%).

En cuanto a la producción animal, se puede observar que a nivel país, la cría de aves tiene una importancia central, pues es realizada por el 70% de los agricultores familiares, seguido de la cría de ganado vacuno (46%), porcino (42%) y caprino (35%).

Por otra parte, la actividad agrícola es la segunda actividad predial más difundida en los NAF y se puede observar que más de la mitad practica la horticultura, seguida por cereales, frutas, legumbres y cultivos industriales (como el algodón).

A diferencia de los anteriores registros, el RENAF ofrece una aproximación general sobre la producción que tiene destino el autocosumo o su colocación en el mercado. En todas las regiones, la producción destinada para el mercado supera el 70% del total declarado. Sin embargo, la producción para subsistencia sigue siendo importante en los agricultores familiares del NOA (Noroeste Argentino) y el NEA (Noreste Argentino), con un 28% y 29% respectivamente.

En suma, cabe reiterar que se tratan de datos preliminares, puesto que todavía hay provincias que continúan procesando sus datos. Uno de los distritos que más ha avanzado en cuanto al registro y su posterior procesamiento es Santiago del Estero. El tratamiento de la información proveniente de las encuestas fue realizado desde un paquete estadístico y se aplicó una metodología diferente a la utilizada por el centro de procesamiento nacional.

Sin embargo, la producción para subsistencia sigue siendo importante en los agricultores familiares del NOA (Noroeste Argentino) y el NEA (Noreste Argentino), con un 28% y 29% respectivamente.



Algunos datos estadísticos sobre la agricultura familiar en Santiago del Estero⁵

Hasta noviembre de 2014, habían 17 561 familias registradas por el FOPAF (Foro Provincial de la Agricultura Familiar) en la Provincia de Santiago del Estero. Con los mismos indicadores utilizados por Obschatko, Foti y Román (2007) para determinar los tres tipos

⁵ Por razones de espacio en este artículo se presenta algunos números de la agricultura familiar en Santiago del Estero. Se puede ver con más detalle y de manera exhaustiva en Paz, de Dios y Gutiérrez (2014)

de pequeños productores, se procesó la información de la base de datos del RENAF. De la comparación se obtuvo que los tipos 1 y 2 pierden peso relativo en relación al tipo 3 de menor capitalización, que alcanza al 93% de los NAF relevados.

Cuadro 4. Participación porcentual de los Tipos de Pequeños Productores aplicando la metodología usada en Obschatko et al. (2007) y para la base de datos del RENAF

Tipos	Obschatko et al. (2007) sobre el CNA 2002 en %	Base de datos del RENAF Santiago del Estero en %
Tipo 1	12	2
Tipo 2	16	5
Tipo 3	72	93
Total	100	100

Fuente: Paz, de Dios y Gutiérrez (2014).

En cuanto a las actividades productivas, un poco más del 60%, despliegan una combinación de actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, de recolección de frutos del monte y agroindustriales. Se destaca la complementación entre la agricultura y la ganadería en el 37,1% de los NAF.

Por otra parte, la actividad pecuaria es la más difundida, ya que un 90,6% de los NAF se dedica a la cría de animales, ya sea en forma exclusiva o en combinación con otras actividades. La segunda actividad en importancia es la agrícola, ya que un 50,9% de los NAF la realiza, aunque son relativamente pocos los NAF que hacen agricultura en forma exclusiva. La mayoría combina la actividad agrícola con actividades pecuarias y de aprovechamiento del monte, que aparece como un espacio natural diversificado que permite otras actividades como la recolección de frutos, la caza, la obtención de madera, carbón y postes.

Otra consideración que surge del procesamiento es que solo el 12,3% de los NAF realizan alguna actividad agroindustrial. Es factible reconocer que el incremento de este tipo de actividades, que agregan valor en origen, resulta un desafío pendiente para el desarrollo de la agricultura familiar en la provincia.

En consecuencia, el manejo y el uso del recurso pecuario sigue siendo un dato clave al momento de entender la vigencia del sector de la agricultura familiar. El autoconsumo está cubierto fundamentalmente por especies menores y los ingresos monetarios se originan principalmente con la venta de animales provenientes de las especies bovinas y caprinas.

La actividad agrícola está presente en poco más de la mitad de los NAF relevados y la superficie cultivada total fue de 24 484 hectáreas. Cabe aclarar que la aptitud de las tierras para la agricultura varía según las zonas, en algunos casos se aprovechan las zonas bajas para captar mayor humedad y se los protege de la entrada de los animales mediante cercos o ramas.

Otro aspecto clave para dimensionar a la agricultura familiar en Santiago del Estero es la forma en que se constituye su ingreso familiar.

Cuadro 5. Ingreso monetario anual de los NAF según tipo de ingreso y participación porcentual con respecto al ingreso monetario total

Tipo de ingreso monetario	Total anual en \$	%	NAF según tipo de ingreso	Ingreso Promedio por NAF en \$
Por prestaciones sociales	90 638 831	39	8 854	10 237
Por trabajo extrapredial y servicios	56 159 374	24	8 294	6 771
Por la producción agrícola	28 631 710	12	6 854	4 177
Por la producción pecuaria	43 538 034	19	8 525	3 331
Por la producción agroindustrial	11 173 726	5	1 427	7 830
Por la producción artesanal	2 206 103	1	848	2 602
Total	232 347 779	100	13 072	17 774

Fuente: Paz, de Dios y Gutiérrez (2014).

Los ingresos extraprediales (originados en las prestaciones sociales del Estado y en la venta de fuerza de trabajo) representan un 63% del ingreso monetario total; contra un 37% que proviene del trabajo predial. De este modo, se abre nuevamente un viejo debate sobre los procesos de descampesinización y la pérdida de sus capacidades para vivir casi exclusivamente de la producción agropecuaria. Analizando las fuentes de ingresos se puede decir que el Estado ha jugado un rol importante en la ampliación de la mercantilización de la agricultura familiar a través de la introducción de formas estandarizadas de intercambio de valor⁶.

Por otro lado, hay que hacer referencia a la falta de seguridad jurídica sobre la tierra en que trabaja por generaciones. Del total de NAF, solo un 31% (4 072) están bajo el régimen de propiedad privada o en condominio hereditario indiviso (sucesión indivisa); mientras que el 67% restante (8 740) son ocupantes o poseedores de tierras fiscales o privadas, con o sin permiso. Solo el 2% (260) presenta distintas formas de arrendamiento, aparcería o mediería. La combinación de la tenencia precaria de la tierra y el proceso de avance de la frontera agropecuaria han derivado en una alta conflictividad de la estructura agraria santiagueña. Según un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de las Comunidades Campesinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, entre el año 2004 y el año 2011 se registraron unos 420 reclamos por conflictos producidos a raíz del problema de tierras.

6 Cabe aclarar que el sector campesino o de la agricultura familiar, ha sido tradicionalmente postergado en el acceso al sistema previsional. Esta situación comienza a revertirse en la última década, la cual se caracteriza por el aumento del rol del Estado como rector de las políticas sociales y por la tendencia a la universalización de la seguridad social mediante un conjunto de reformas que, combinando instrumentos contributivos y no contributivos, apuntaron a la inclusión social a tal punto que un 68% de los NAF reciben algún tipo de prestación por parte del Estado.

Algunas consideraciones finales

Dos han sido los esfuerzos por cuantificar y caracterizar la agricultura familiar. En primer lugar, se encuentra el documento del PROINDER-IICA, que utilizó datos secundarios provenientes del CNA 2002 que no fueron pensados en su origen para captar cuantitativamente a este sector; más bien hubo un esfuerzo por aproximar las definiciones conceptuales a cuestiones más operativas en relación a las variables ya relevadas en el censo.

En cambio, el segundo intento por cuantificar la agricultura familiar lo constituye el RENAF, es decir un registro que nació y fue pensado para relevar específicamente a la agricultura familiar. Tal vez lo más cuestionable es que su relevamiento no haya sido hecho por barrido, sino más bien a partir del conocimiento de los técnicos, instituciones y las organizaciones de agricultores familiares sobre la cantidad de productores que se estiman que existe en cada provincia. Pese a ello, constituye el único instrumento que está entregando información bastante cercana a la realidad del sector.

El otro aspecto a tener en cuenta es el reconocimiento tanto de la heterogeneidad espacial como de la diversidad de sujetos que integran la agricultura familiar en la Argentina. El sector no es para nada homogéneo y requiere su reconocimiento a los

El sector no es para nada homogéneo y requiere su reconocimiento a los efectos de generar políticas públicas diferenciales para los distintos actores sociales que lo componen.



efectos de generar políticas públicas diferenciales para los distintos actores sociales que lo componen. Así también hay que advertir de tales heterogeneidades al momento de pensar en el rol de la agricultura familiar en el modelo de desarrollo a seguir en el país. Así por ejemplo, uno de los temas centrales en el debate internacional sobre la agricultura familiar es su capacidad para alimentar al mundo. El procesamiento de los datos del RENAF en Santiago del Estero o el trabajo de Paz, *et al.* (2011) sobre la potencialidad de los sistemas pastoriles ubicados en la puna jujeña, muestran un alto grado de presencia y difusión de la actividad pecuaria, lo cual hace pensar en una producción que se adapta muy bien a las condiciones agroecológicas, socioeconómicas y ambientales en la que se desenvuelve la agricultura familiar. También abre una línea de reflexión en términos de aportes de proteína animal y su capacidad para el sostenimiento, por parte de este sector, de sus posibilidades reales y potenciales para lograr la soberanía alimentaria. En contraposición, la actividad agrícola en general resulta poco relevante, ya que poco más de la mitad de los NAF la realiza, usualmente en combinación con la actividad pecuaria y el aprovechamiento del monte. La superficie sembrada total con maíz, alfalfa y algodón principalmente, es muy pequeña si se la compara con la superficie sembrada por otros

actores productivos de la provincia. En contraste la región pampeana presenta un mayor potencial en la producción agrícola más que en la pecuaria (RENAF, 2014).

Mientras que la agricultura familiar en la región pampeana está condicionada por los procesos de concentración de la tierra y las imposibilidades de los pequeños agricultores para expandirse o generar procesos de diversificación de ingresos, Santiago del Estero, una provincia extra pampeana, presenta otras problemáticas. La configuración de su estructura agraria se caracteriza por la presencia de grandes extensiones y marginalidad de sus tierras, asociadas a la situación jurídica irregular de las mismas, el predominio de formas de tenencia distintas a las de apropiación privada, mercados de trabajo en el que pervive la cultura del patronazgo, sistemas informales de comercialización, una fuerte valoración del autoconsumo y procesos productivos extensivos con escasa o nula incorporación de tecnología e inversión.

Por consiguiente, existe un desafío para las instituciones públicas que se dedican a impulsar el desarrollo rural que deben ajustar sus líneas de trabajo a la *sintonía fina* que propone el gobierno nacional. Si una de las principales aspiraciones es tener un Estado más presente y eficiente, que contribuya a mejorar las condiciones de vida en los territorios rurales, es fácil descubrir la importancia del tipo de estudios materializado en este documento. Es decir reconocer la diversidad, la heterogeneidad, la historia y evolución de un sector social es una condición indispensable para actuar con eficacia en la política pública.

Los autores son conscientes de las limitaciones de la descripción realizada, especialmente porque se hace a partir de un número de registros que todavía no cubre el total de los NAF y sobre todo porque se trabaja con un nivel de agregación (como el uso de datos totales y datos promedio) que oculta la diversidad que también existe entre los agricultores familiares con diferentes sistemas productivos o que residen en zonas agroecológicas muy diferentes. Para que los datos provenientes del RENAF muestren su verdadero potencial se requiere de abordajes metodológicos de procesamiento donde las tipologías de los sistemas de producción, combinadas con sistemas de información geográfica y estudios de casos constituyan la base de ese abordaje.

Bibliografía

- Craviotti, Clara y Carla Gras (2006). “De desafiliaciones y desligamientos: Trayectorias de productores familiares expulsados de la agricultura pampeana”. *Revista Desarrollo Económico*, N°. 181, pp. 117-34.
- Craviotti, Clara (2012). “Los enfoques centrados en las prácticas de los productores familiares”. *Revista Internacional de Sociología* (RIS), Vol.70, N° 3, pp. 643-664..
- Cloquell, Silvia, Patricia Propersi, Graciela Preda y Mónica De Nicola (2007). *Familias rurales: el fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura*. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones.

- FONAF (2006). *Documento elaborado por las Organizaciones representativas del sector productor agropecuario familiar*. Mendoza: PRODERNOA.
- Graciano, Osvaldo y Silvia Lázaro (2007). *La Argentina Rural del Siglo XX. Fuentes, problemas y métodos*. Buenos Aires: La Colmena,
- Gras, Carla (2009). "Changing Patterns in Family Farming: The Case of the Pampa Region, Argentina". *Journal of Agrarian Change*, N°. 9 (3), pp. 345-364
- INDEC (2007). *Resultado General del Censo Nacional Agropecuario 2002*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Lazzarini, Andrés (2004). "Notas sobre los primeros resultados del Censo Nacional Agropecuario 2002". *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, No. 20, pp. 117-126, PIEA, Buenos Aires.
- López, Natalia y Guido Prividera (2011). *Repensar la agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana*. Buenos Aires: CICCUS.
- Márquez, Susana (2007). *Un año del Foro. Crónica, realizaciones y perspectivas del ejercicio de diálogo político desarrollada por el foro Nacional de la Agricultura familiar*. Visita el 14 de junio de 2013 en www.proinder.gov.ar.
- Obschatko, Edith, María Foti y Román, Marcela (2007). *Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al CNA 2002*. Buenos Aires: IICA.
- Paz, Raúl (2006). "El campesinado en el agro argentino: ¿Repensando el debate teórico o un intento de reconceptualización?". *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, N°. 81, pp. 65-85.
- _____ (2008). "Mitos y realidades sobre la agricultura familiar en Argentina: reflexiones para su discusión". *Revista Problemas del Desarrollo*, N°. 153, pp. 57-81.
- _____ (2011). "Agricultura familiar en el agro argentino: una contribución al debate sobre el futuro del campesinado". *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, N°. 91, pp. 49-70.
- Paz, Raúl, Fredy Sosa, Hugo Lamas, Fernando Echazú y Laura Califano (2011). *Diversidad, mercantilización y potencial productivo en la Puna Jujeña (Argentina)*. Jujuy: INTA
- Paz, Raúl y Cristian Jara (2012). "El campesino en Santiago del Estero (Argentina): la pobreza de un sector que se resiste a desaparecer (1988-2002)". *Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural*, N°. 12, pp. 149-176.
- Paz, Raúl, Rubén de Dios y Marta Gutiérrez (2014). *La agricultura Familiar en Santiago del Estero. Su cuantificación y análisis a partir de los datos del Registro Nacional de Agricultura Familiar*. Tucumán: MAGNA-INDES-CEPAF.
- Ramilo, Diego y Guido Prividera (2013). *La agricultura familiar en la Argentina. Diferentes abordajes para su estudio*. Buenos Aires: INTA.
- RENAF (2014). *Caracterización estadística por Región*. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Foro Nacional de la Agricultura Familiar. Argentina.

- Rodríguez, Ramiro y Cristian Jara (2013). “Más allá del productivismo capitalista: Eficiencia y Agricultura Familiar en la reactualización de viejos debates teóricos de los estudios agrarios”. *Revista de Economía Agrícola*, Vol. 60, N° 1, pp. 53-66.
- Salcedo, Salomón, Ana Paula De la O y Lya Guzmán (2014). “El concepto de agricultura familiar en América Latina y el Caribe”. En *Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política*, Salomón Salcedo y Lya Guzmán (Eds.): 17-33. Santiago de Chile: FAO.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina (2007). Resolución 255. Créanse el “Registro Nacional de Agricultura Familiar y la Unidad de Registro Nacional de Agricultura Familiar”. Buenos Aires.
- Schiavoni, Gabriela (2005). “La construcción de los ‘sin tierra’ en Misiones, Argentina”. *Revista Theomai*. En <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero12/artschiavoni12.htm>
- Soverna, Susana, Pedro Tsakoumagkos y Raúl Paz (2008). *Revisando la definición de agricultura familia.*, Serie Documentos de Capacitación. Buenos Aires: PROINDER.
- Van der Ploeg, Jan (2010). “The Peasantries of the Twenty-First Century: The Commoditisation Debate Revisited”. *Journal of Peasant Studies*, N°. 37, pp. 11-30.



Reseñas

Movimientos sociales rurales en América Latina: en el ojo de la tormenta

(Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods)

Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods, editado por Carmen Diana Deere y Frederick S. Royce. Gainesville, FL: University Press of Florida, 2009. Pp. 357. US\$ 75.00 (hb). ISBN 978-0-8130-3332-7

¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas? Estado, movimientos sociales campesinos y soberanía alimentaria, editado por Jordi Gascón y Xavier Montagut. Barcelona: Icaria Editorial, 2010. Pp. 264. €17 (pb). ISBN 978-84-9888-228-5

Campesinato e agronegocio na América Latina: a questão agrária atual, editado por Bernardo Mançano Fernandes. São Paulo: Conselho Latino-americano de Ciências Sociais and Expressão Popular, 2008. Pp. vii+424. US\$ 11.00 (pb) ISBN 85-7743-0857

Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Raúl Zibechi. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. Pp. 314. US\$ 11.60 (pb). ISBN 978-9972-834-25-7

Palabras claves: movimientos sociales agrarios, América Latina, neoliberalismo, agroindustria.

Introducción

Actualmente los movimientos campesinos en América Latina presentan un carácter vivaz académica y políticamente. Durante las últimas dos décadas, los movimientos sociales rurales han sido el sustento de la izquierda latinoamericana, logrando agitar las agendas de gobiernos en algunos países del continente. Se han presentado como la vanguardia de la movilización social en contra del neoliberalismo; han derribado gobiernos; han provisto apoyo a gobiernos nacionalistas de izquierda y populistas; y se han involucrado en la lucha global en contra de las transnacionales de agroindustria a través de la *Vía Campesina* o la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En varios países de la región, movimientos indígenas y campesinos han logrado niveles sin precedentes de unidad y cohesión. El catalizador de su unidad ha sido su oposición al neoliberalismo, al

* Texto original: Vergara-Camus, L. (2013), Rural Social Movements in Latin America: In the Eye of the Storm. *Journal of Agrarian Change*, 13: 590–606. doi:10.1111/joac.12030
Traducción: Caitlin Dube, Estudiante de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural, FLACSO-Ecuador.

cual consideran como la fuente de su actual estado de empobrecimiento y marginalización. Frente a dicha situación, como ejemplo, está surgiendo actualmente un modelo alternativo de desarrollo campesino que gira alrededor del concepto de soberanía alimentaria. Sus estrategias pueden haber sido diferentes –por ejemplo, en la manera en que se relacionan con el poder del Estado y las alianzas con partidos políticos– pero sus formas de movilización –incluyendo las marchas nacionales, la organización de las reuniones y encuentros de activistas, tierra y ocupaciones de edificios públicos, y los retos legales frente las decisiones del gobierno a conceder concesiones a las grandes corporaciones privadas– son muy similares.

Sin embargo, estas observaciones no deben ser tomadas como una tendencia regional. Los movimientos sociales campesinos en Latinoamérica durante las últimas dos décadas han presentado trayectorias diversas. Por ejemplo, existen movimientos rurales fragmentados y débiles como sucede en México (de Grammont y MacKinlay, 2009), América Central (Edelman, 2008), Perú, Chile y el Cono sur; y movimientos más dinámicos y eficaces como en Bolivia, Ecuador y Brasil, donde han forzado algún tipo de políticas pro-campesino. Así para los investigadores y activistas, muchas preguntas surgen de las distintas trayectorias y resultados. ¿Cuáles han sido los logros reales de estos movimientos? ¿Qué tipo de políticas agrícolas alternativas han propuesto? ¿Qué efectos han logrado en sus demandas al gobierno central?

El presente ensayo-reseña explora cuatro publicaciones recientes sobre los movimientos sociales agrarios en América Latina. Se pretende identificar sucintamente los logros y problemas de los movimientos sociales agrarios, así como los temas, metodologías y marcos teóricos que los académicos han usado para estudiarlos. Empezaré con proveer un breve repaso del contenido, el objetivo y la originalidad de cada libro, y continuaré con una discusión sobre las tendencias, limitaciones y brechas de cada uno de estos. Finalmente, se realizará un comentario final sobre el conjunto de lo descrito.

Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods, editado por Carmen Diana Deere y Frederick S. Royce, es un libro de valor porque presenta un panorama completo de las luchas, logros y propuestas de los movimientos rurales sociales en toda América Latina. El libro está dividido en cuatro secciones que cubren todos los temas principales del desarrollo rural contemporáneo (tierra, autonomía indígena, participación de la mujer, migración, activismo transfronterizo y comercio justo) mediante estudios de casos específicos. La primera sección detalla las características y batallas más centrales que definen el movimiento campesino actual en América Latina. La segunda sección examina las nuevas luchas por la reforma agraria y la autonomía territorial. La tercera sección se enfoca en la búsqueda de una subsistencia sustentable a través de la movilización en contra de la industria extractivista y proyectos de infraestructura. El libro termina con algunos ejemplos de cómo los campesinos se han organizado a través de las fronteras, vinculándose con otros actores y usando redes transnacionales para influir con cambios en varias localidades. Los editores han hecho una excelente selección de estudios de caso, y han logrado un buen

balance entre artículos de académicos y de líderes de movimientos sociales rurales. El libro es una lectura obligatoria para cualquier persona interesada en los movimientos rurales sociales en América Latina, ya que ilustra una descripción detallada de los movimientos o luchas, y las características claves para entender un posible modelo campesino alternativo de desarrollo. Si bien los análisis son excesivamente positivos y a veces no críticos, sirven como un excelente punto de partida para la investigación. Sin embargo, puesto que los capítulos son bastantes cortos, muchas de las contribuciones son débiles en términos de la discusión teórica o de perspectiva comparada.

¿Cambio de rumbo de las políticas agrarias latinoamericanas? Estados, movimientos sociales campesinos y soberanía alimentaria, editado por Jordi Gascón y Xavier Montagut, en el cual se exhibe el trabajo de varios autores académicos rurales tales como Miguel Altieri, Víctor Bretón y Peter Rosset, entre otros; además, provee algunas respuestas a varias preguntas planteadas por el libro editado por Deere y Royce. Su objetivo es claramente intentar entender y explicar por qué y cómo ciertos movimientos rurales fueron exitosos en reorientar las políticas estatales agrícolas hacia el principio de soberanía alimentaria de la *Vía Campesina* en Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela. El libro está organizado en tres puntos focales: primero, ver las “ventajas” inherentes de la agricultura campesina de pequeña escala en contraste con la agricultura industrial de gran escala; segundo, analizar los logros, contradicciones y retos de la estrategia de los movimientos campesinos en cuanto al Estado; y finalmente la adopción de un enfoque histórico que busca identificar la peculiaridad de la situación actual en comparación con el periodo de reformas distributivas de tierra durante la era de ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones). Aparte de participar en la sociología rural crítica, los autores no comparten una línea teórica particular ni abordan un debate teórico específico. El conocimiento extensivo de sus estudios de casos, produce un análisis sofisticado y una evaluación crítica de las políticas estatales actuales de los gobiernos progresistas y su relación con los movimientos campesinos. Las posiciones sobre estos gobiernos y la manera en que los movimientos rurales se han relacionado con ellos varían de optimista (Fernando Mayoga y Miguel Urioste) a crítica pero entusiasta (Juan Pablo Muñoz, Peter Rosset y Jordi Gascón) y plenamente crítica (Víctor Bretón). La conclusión central del libro es que los movimientos campesinos de América Latina han logrado una gran cantidad de sus objetivos de defender su manera de vivir a través de la movilización y/o contribuir con la elección de gobiernos de izquierda. No obstante, es demasiado pronto concluir que esto puede ser la base real para la protección de la agricultura campesina y la emergencia de un modelo de desarrollo diferente (*no desarrollado*).

Campesino e agronegócio na América Latina: a questao agrária atual, editado por el geógrafo brasileiro Bernardo Mançano Fernandes, es el resultado de un seminario de investigación patrocinado por el Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales (CLACSO) que junta a los académicos rurales y a los investigadores jóvenes de toda la región. El libro es escrito en español y portugués y es una representación bastante fiel de la diversidad de

perspectivas dentro de los estudios rurales de América Latina. El libro incluye capítulos que buscan abordar temas teóricos; capítulos sobre las formas de control ejercido por grandes agroindustrias en sectores específicos como la producción de naranjas, biocombustibles o agua; capítulos que analizan las políticas específicas en un país particular de América Latina; y, finalmente, capítulos que examinan las formas de resistencia y alternativas presentadas por los movimientos campesinos. En comparación a los dos libros mencionados previamente, los contribuidores de *Campesinos e agrocegiócio na América Latina* comparten un enfoque de economía política ecléctica, parcialmente de la teoría marxista, y más explícitamente de conceptos neoliberales para su análisis. Ellos también sostienen el discurso de política neoliberal dominante de las agroindustrias a un escrutinio serio a través de contrastarlo con la verdadera situación de la marginalización de los productores campesinos. Adicionalmente, para explicar la naturaleza de la lucha actual entre los campesinos y las agroindustrias, la mayoría de los autores destacan la importancia de la especificidad social de las familias campesinas de ser productores de alimentos que dependen mayormente de la labor familiar, y de cómo estén situados en territorios específicos. Este libro será más satisfactorio para los lectores con mayor inclinación teórica.

Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento recopila varios de los artículos de Raúl Zibechi sobre algunos de los movimientos sociales más importantes de América Latina de las últimas dos décadas. De una manera un tanto impresionista pero original, el libro analiza los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, el movimiento Sin Tierra en Brasil, el movimiento Zapatista en Chiapas, el movimiento Piquetero y las fábricas ocupadas en Argentina, la gente Mapuche de Chile, el conflicto armado Colombiano, el movimiento de los habitantes urbanos en Uruguay y el ascenso de los gobiernos progresivos en la región. El criterio para el éxito del libro de Zibechi, más que el impacto político, es el modo de ejemplificar la habilidad de los movimientos de mantenerse autónomos y organizar una alternativa desde abajo. Zibechi ve tres trayectorias en la relación entre los movimientos y los gobiernos: (1) situaciones en que los movimientos se mantienen fuertes porque están confrontado gobiernos neo liberales de derecha (Chiapas, Chile y Colombia); (2) situaciones en que los movimientos están volviéndose más fragmentados porque están confrontando gobiernos de izquierda que están aplicando versiones ligeras de neoliberalismo (Brasil y Ecuador); y (3) situaciones en que los movimientos han sido capaces de influir en gobiernos de izquierda debido a su relación orgánica con el partido político gobernante (Bolivia). El análisis de Zibechi presenta una diversidad de enfoques teóricos, tanto de Marx, Scott, Guha y Foucault, además de académicos latinoamericanos reconocidos que han aportado desde la perspectiva de la “colonialidad del poder”, tales como Aníbal Quijano, Edgardo Lander y Silvia Rivera. En este sentido, el trabajo de Zibechi resulta interesante y perspicaz, pero a la vez un tanto problemático ya que sus ideas y conceptos, aunque metodológicamente son muy originales e incisivos, no son suficientemente desarrollados y teorizados. Sus ideas se estancan al nivel de interpretación más

que demostración. Este libro, a pesar de sus limitaciones, debería ser tomado seriamente porque es una buena representación del “giro autónomo¹” en el análisis de los movimientos sociales en América Latina.

“Campesinismo”: tierra, agricultura familiar de pequeña escala, agroindustrias y territorio

El primer gran tema que destaca de la investigación de los movimientos sociales de América Latina es que la gran mayoría de los académicos ven a los campesinos como una clase que, independientemente de su heterogeneidad, ha logrado un nivel de conciencia política significativa a partir de su relación peculiar con la tierra, la agricultura y el territorio. Anette Demarais, por ejemplo, en su escrito sobre la *Vía Campesina* en *Rural Social Movements in Latin America*, destaca —a través del uso de los testimonios recogidos durante el trabajo de campo— la creciente unidad transnacional facilitada por la emergencia de un tipo de ideología campesina que gira alrededor de la relación tierra, lugar y territorio, el principio de la soberanía alimentaria, el intercambio de las experiencias agrícolas, y las luchas entre agricultores pequeños. Su capítulo sugiere que más allá que la importancia de las diferencias entre los productores familiares del Sur y del Norte, los campesinos buscan terreno común en la politizada “identidad ligada al lugar”. Debido a esto, ellos consideran que tienen el derecho de permanecer en la tierra y la obligación de producir alimentos (p. 46-7). En la misma línea, Bernardo Mançano Fernandes y Cliff Welch, en sus capítulos sobre el control de la producción de naranjas de las agroindustrias en los EEUU y Brasil en *Campesinato e agronegócio no América Latina*, rastrean como ambos países, en momentos distintos, productores de pequeña escala fueron gradualmente desplazados por las compañías de procesamiento. Fernandes y Welch y otros colaboradores en el libro, como Pilar Lazárraga y Carlos Vicaflares, también reconocen la diferencia de la producción campesina como una forma de vivir, enfatizando la importancia del auto-consumo, la labor familiar no remunerada, las relaciones no capitalistas y las perspectivas comunitarias. Irónicamente, Fernandes y Welch muestran como este “campesinismo” también fue instrumentalizado en el caso de la producción del jugo de naranja en Florida. Aquí, la agroindustria usó características de la producción campesina para presentar el jugo de naranja como un producto hecho por los

1 El término “autonomía” dentro de los movimientos campesinos y la erudición rural en América Latina se remonta a la década de 1980 y se refiere a la demanda y lucha por la independencia política del Estado y los partidos políticos. El concepto también abarca las diferentes estrategias de los movimientos campesinos enfocados en ganar más control sobre las distintas etapas de la producción agrícola. El actual “giro autónomo” tiene un origen distinto, pero converge en algunos elementos. Se refiere tanto a un tipo de interpretación de la naturaleza de los movimientos sociales en América Latina como a la estrategia política que encuadra el dilema entre la reforma y la revolución por el rechazo del poder estatal como el mecanismo principal para el cambio social radical. Autonomistas han llamado para reemplazar el centralismo estatal con el enfoque en la transformación de las relaciones de poder dentro de la sociedad civil y en la vida diaria de los miembros de los movimientos sociales (ver Álvarez y Escobar 1992; Zibechi 1999; Holway 2002).

pequeños productores de familias en sus campañas de publicidad (p. 57). Sin embargo, los agricultores o campesinos pueden haber tenido un lugar en las campañas publicitarias de la agroindustria, pero sólo pueden integrarse a las cadenas de alimentos agroindustriales en una posición subordinada.

El análisis de cómo la agroindustria controla la agricultura se ha convertido en uno de los puntos focales de algunos de las mejores investigaciones sobre los movimientos rurales, y los movimientos en sí han contribuido a atraer la atención de los académicos y las activistas en las agroindustrias. En el quinto capítulo de *Rural Social Movements in Latin America*, los representantes de MST de Brasil, Daniel Correa y Andréia Borges Ferreira, señalan cinco batallas importantes en la lucha campesina en contra de la agroindustria. Primero, la batalla sobre el control de la naturaleza en su conjunto, donde la agenda de las organizaciones campesinas debería ser de proteger los recursos y la promoción de los derechos de la alimentación sana. La segunda trata del acceso a la tierra para los agricultores familiares pequeños para que puedan apoyar la vida y el interés de la sociedad en general, en vez de las ganancias. El tercer punto focal gira en torno al principio de la soberanía alimentaria, en el cual se pone de relieve el derecho de la gente a defender su propia política alimentaria y el derecho de los pequeños agricultores a vender sus productos a precios justos, y también del consumidor de decidir qué quiere comer. La cuarta batalla es la de las semillas. Se opone el derecho y obligación de los campesinos de producir sus propias semillas al control e imposición de los organismos genéticamente modificado (OMG) de las corporaciones multinacionales. La batalla final es por las redes de producción y comercialización que serían controlados por las familias agrícolas pequeñas, en la cual la motivación de ganancias serían reemplazados por las necesidades de la gente y la diferencia cultural (p. 119-120).

Sobre el libro *Campesinato e agronegócio na América Latina* que aborda el poder creciente de la agroindustria más directamente, el capítulo de Horacio Mackinlay sobre México expresa vívidamente el alcance multifacético de la agroindustria sobre agricultura. Después de rastrear cómo el sector privado nacional de agricultura se reorganizó y estableció vínculos con las corporaciones de agroindustria en los EEUU que influyen en el proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN), Mackinlay esboza el estado del control del mercado por las grandes empresas familiares y corporaciones multinacionales de varios cultivos (maíz, cebada, frutas y verduras, tabaco, etc.) y llega a la conclusión que la agroindustria no ha adoptado una estrategia particular. Aunque sí ha sido capaz de modificar el ambiente institucional claramente (notablemente los derechos de propiedad y las regulaciones de comercio) a su favor, la agroindustria no ha tomado el control completo de la tierra y la producción. Dependiendo de los requisitos de cada cultivo, la agroindustria decidirá el tipo de acuerdo que tendría que establecer con los pequeños productores, que van desde alquilar la tierra para la producción directa a contratar la agricultura, facilitando el crédito a los pequeños productores para la producción, a simplemente comprar la producción en el mercado abierto. La tendencia general, sin em-

bargo, es que la agroindustria establece las reglas y los campesinos las aceptan con muy poca libertad. Las razones para esta situación son múltiples, pero las respuestas propuestas por los distintos autores pueden ser agrupadas en tres: la distinta naturaleza de la producción agroindustrial dentro del neoliberalismo de América Latina; el rol de las políticas estatales en promocionar la agroindustria; y el discurso dominante en la eficiencia de la agroindustria, que es adversa a los productores de pequeña escala.

El capítulo de Norma Giarracca y Miguel Teubal sobre la agricultura argentina en *Campesinato e agronegócio no América Latina* también presenta un excelente resumen del rol que la agricultura y los productores familiares juegan en el modelo de desarrollo de ISI y describen cómo estos han cambiado fundamentalmente con el neoliberalismo. Ellos muestran que la dictadura militar fue clave en esta transición porque destruyó las bases sociales del modelo ISI, aplastando a la vez el poder de negociación de los obreros asalariados y de los productores agrícolas familiares (p. 148-50). Además, ellos argumentan que el conflicto intra-clase en la cima, que culminó en la década de 1990 durante la presidencia de Carlos Menem, también modificó las condiciones de la producción agrícola y forzó a los terratenientes tradicionales a subordinarse a la agroindustria y el sector financiero. Según Giarracca y Teubal, la agroindustria ahora ha expandido su control sobre la agricultura argentina a través de la adopción de una serie de estrategias, tales como la provisión de insumos y paquetes de tecnología, compra de tierras, agricultura bajo contrato, y el control sobre la comercialización y procesamiento. No obstante, esto no parece ocurrir en México, y Brasil, donde las múltiples formas de subordinación de las familias agrícolas adoptadas por las agroindustrias parecen caer dentro de una tendencia general, ejemplificado por la producción de soya en lo cual las grandes empresas agrícolas integran el sector financiero y se especializan en la producción de “*commodities*” para exportar, a la vez que adoptan estrategias que privilegian la economía de escala que, consecuentemente, eliminan o marginalizan los pequeños productores familiares (p. 154-5).

La adopción del neoliberalismo por los Estados de América Latina desde 1980 y el surgimiento de la agroindustria han llevado a muchos académicos a encontrar maneras de intentar alejarse de una defensa romántica de los campesinos y dar paso al modelo de desarrollo de campesinos de pequeña escala. En los libros revisados, el capítulo de Peter Rosset en *Rural Social Movements in Latin America* aborda esta tarea, demostrando que la pequeña agricultura familiar puede ser más productiva y tener mayor impacto sobre el desarrollo socio-económico que la agricultura industrial de gran escala, además protegiendo el medio ambiente. Del mismo modo, el capítulo de Miguel Altieri en ¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas? demuestra con gran cantidad de evidencia, mayormente relacionado a la sustentabilidad ambiental y la diversidad bio-ecológica, las ventajas de la agricultura de pequeña escala y agro-ecológica. Aunque el debate entre la agricultura de pequeña o gran escala está muy lejos de concluir, los académicos tienden a aceptar que la promoción de la agricultura de pequeña escala pueda, por lo menos, tener un efecto relativamente positivo

sobre la mitigación de la pobreza rural, dado un compromiso de apoyo de parte del Estado. El problema más contencioso tiene que ver con que si la agricultura de pequeña escala es suficientemente productiva y competitiva, debajo del régimen alimentario global actual dominado por la agroindustria, para ser la base para la agricultura moderna. Considerando la escala de los subsidios y la producción que reciben los grandes agricultores, este último debate sigue planteando la cuestión de la función del Estado. La cuestión más importante es porque los Estados no han decidido apoyar la producción campesina. Una breve (si bien simplista) respuesta sería la presión sobre los países en desarrollo de las instituciones financieras internacionales a expandir la producción de los cultivos para la exportación a gran escala, y donde la agroindustria presenta muchas condiciones para lograr dicho requerimiento.

Activistas y académicos que observan este elevado control de las agroindustrias sobre la agricultura, a pesar de las ventajas importantes de la pequeña producción familiar, se ha convertido de forma natural al rol de las decisiones y políticas del Estado. La gran mayoría de los académicos en los cuatro libros revisados identifican el impacto de la desregulación y la liberalización de la agricultura en los 80 y 90 como un momento crucial. También hay un claro consenso sobre las consecuencias negativas de estas políticas sobre las familias campesinas y los pequeños productores familiares. Hay una diferencia, no obstante, entre los académicos de influencia marxista y los representantes de movimientos sociales, por un lado, y los académicos con otras influencias teóricas por otro. En *Campesinato e agronegócio na América Latina* y en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, los autores presentan el cambio en las políticas estatales como decisiones políticas intencionales determinadas por grupos específicos que controlaron el Estado a fin de fomentar sus intereses clasistas. En *Rural Social Movements in Latin America*, la mayoría de los académicos no cuestionan las razones para el cambio en el modelo de la política agraria y parecen tomarlas como dadas. La diferencia en perspectiva y explicación se da entre los representantes de los movimientos sociales, quienes presentan sus luchas, demandas y propuestas claramente en términos de clase; y los académicos, quienes frecuentemente se limitan a reportar sobre las luchas y sacan conclusiones limitadas de clase.

Sin embargo muchos académicos proponen políticas alternativas, que sean centradas en el Estado y en la sociedad civil con intención de beneficiar a los pequeños productores. Las propuestas de política presentados por los movimientos campesinos son bastante directas: revertir las reformas neoliberales, bloquear la expansión de la agroindustria y las corporaciones multinacionales, y desarrollar un nuevo modelo de agricultura basado en el apoyo estatal para promocionar a los pequeños productores familiares (ver el capítulo de Rosset, Tiney y Saisari en *Rural Social Movements in Latin America*). Otras propuestas de menor intensidad, siguiendo la agenda de buena gobernanza del post-Consenso de Washington, simplemente argumentan a favor de la participación de las comunidades rurales en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas específicas. Esto no es sin contradicciones. El capítulo de Mary Allegretti y Marianne Schminck en *Rural Social Movements in Latin America*

sobre el rol del movimiento de los caucheros de la Amazonía de Brasil en el desarrollo del programa estatal nacional de la planificación del uso de tierra y los servicios ambientales, llamado *Proambiente*, es excelente para mostrar las contradicciones detrás de la adopción de la propuesta de políticas de movimientos sociales por el Estado. Los autores muestran como la lucha específica de los caucheros y su decisión de discurso y alianzas llevó a la aparición de una propuesta de crear un fondo de reserva extractiva sustentable que combinaba la planificación participativa del uso de la tierra, preservación y desarrollo de las técnicas agro-ecológicas y la compensación financiera a los campesinos por los servicios ambientales del Estado. Ellas también examinan las contradicciones que emergen cuando la propuesta de un contexto específico fue cambiada a una política estatal gracias a la fuerza política del movimiento social. Como han mostrado otras investigaciones comparando varias experiencias del manejo comunitario de los recursos naturales por todo el mundo en desarrollo (Dressler et al. 2010), la conclusión de Allegretti y Schmink es que la adopción por el Estado de una política alternativa que emana de un movimiento social localizado y su subsiguiente “trasplante” a las diferentes regiones y contextos pueda conducir a una política de arriba hacia abajo más o menos vacía. Este método de subir y ampliar la iniciativa de los caucheros no generó el dinamismo político que el movimiento desencadenó en primera instancia, y que habría sido necesario en otra parte la política de reserva para satisfacer realmente sus objetivos. Considerando el hecho de que los movimientos sociales en Brasil no han tenido el poder e influencia sobre el Partido Obrero y el gobierno como otros movimientos rurales tienen sobre su partido de alianza y el gobierno, en lugares como Bolivia por ejemplo, el problema en realidad se trata del poder de los diferentes actores y las decisiones tomadas por los políticos de izquierda. En la misma línea con la mayoría de los contribuidores de *Rural Social Movements in Latin America*, el problema del poder de clases y su rol en las políticas de partidos emergen aquí, pero los autores lo no hacen suficiente frente.

Cada vez más, influido por la creciente importancia que el análisis de discurso ha adquirido en las ciencias sociales, para poder atajar la naturaleza contradictoria (y frecuentemente inapropiada) de las políticas estatales, muchos académicos rurales están dirigiendo su atención hacia la manera en que estas políticas han sido presentadas y justificadas. En *Campesinato e agronegocio no América Latina* examinan el discurso estatal y desafían los supuestos sobre el cual se basan las políticas agrícolas y los programas rurales. En el capítulo de Pilar Lizárraga y Carlos Vicaflares sobre las visiones competitivas de desarrollo rural en Tarija, Bolivia, analizan el contenido del discurso estatal detrás del programa local para estimular los negocios rurales. Usando los conceptos de hegemonía y el sentido común de Gramsci, Lizárraga y Vicaflares argumentan que la crisis del Estado a nivel nacional facilitó la ruptura en la hegemonía neoliberal que permitió a las organizaciones campesinas cuestionar las ideas dominantes, racistas y coloniales de desarrollo rural que celebran el empresario moderno (blanco) y quienes desacreditan a los campesinos (indígenas) como atrasados e ineficientes (p. 228-9). En Tarija, sin embargo, el bloque en el poder no fue

desplazado y las perspectivas neo-colonial neoliberal de desarrollo rural permanecieron en los programas que profesan generar el desarrollo económico. Los autores argumentan, no obstante, que el programa representa un proyecto de clase claro porque está fundado en términos individualistas y atomísticos, en forma contraria a cómo los campesinos conciben y se apropian del territorio. El espacio en el programa estatal es concebido como un “espacio vacío” y la proyección de lo local es hacia lo global; por eso existe el fomento de la ganadería extensiva. En contraste, las organizaciones campesinas conciben el espacio local en términos del acceso directo a los recursos (tierra, agua y biodiversidad) para el fin de subsistencia y el privilegio de la comunidad y el mercado local (p. 236-7). En el mismo libro, el capítulo de Jorge Montenegro Gómez habla sobre la visión de desarrollo rural promovido por la organización inter-americana inter-nacional, llegando a la misma conclusión. Examina cómo las instituciones han incorporado el concepto de capital social y la idea de participación en el modelo neoliberal de desarrollo. Montenegro Gómez argumenta que estas instituciones reproducen una concepción “plana” del espacio, conceptualizándolo como armoniosa, sin actores antagonicos y conflictos de intereses (p. 266-7). El discurso de participación representa, según Montenegro Gómez, una nueva forma de control social orientado a desmovilizar y desintegrar los movimientos sociales, dado que representan una amenaza a las reglas de la burocracia estatal y los imperativos financieros de los fondos del Estado (p. 265).

La investigación más prometedora sobre la agricultura campesina y los movimientos campesinos toma el espacio y el territorio en serio. Aparte del trabajo del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes (2005), Raúl Zibechi es uno de los autores quien ha subrayado consistentemente la importancia del control territorial para la emergencia y consolidación de una alternativa al neoliberalismo. Según él, hay siete características de los movimientos sociales anti-neoliberales en América Latina y los hacen únicamente alternativas (p. 21-7)². El primero y más importante son los movimientos que han logrado territorializarse en un espacio físico específico y organizarse alrededor de las comunidades que conforman espacios de auto-gobernanza. Segundo, la autonomía de los movimientos de los partidos políticos y el Estado se basa en su habilidad de asegurar recursos para la subsistencia material de sus miembros. Tercero, la revalorización de la cultura y la identidad han sido centrales para consolidar la movilización de los movimientos. Cuarto, los movimientos han desarrollado la habilidad de formar sus propios intelectuales orgánicos. Quinto, el nuevo rol de las mujeres ha transformado los papeles de género tradicionales al interior de las comunidades y los movimientos. La sexta característica es que los movimientos se han preocupado particularmente con la organización del trabajo (buscando formas de trabajo no alienado y probando el trabajo colectivo de distintas formas) y su relación con la naturaleza. Finalmente, las formas de movilización han sido marcadas por

2 Estos son el movimiento Zapatista en Chiapas, el movimiento Sin-Tierras en Brasil, el movimiento Piquetero y las fábricas ocupadas en Argentina, y los movimientos campesinos indígenas en Bolivia y Ecuador.

la “auto-afirmación”, según Zibechi, de un tipo de subjetividad basado en la experiencia, en lugar de categorías doctrinarias tradicionales dominantes en la izquierda. Según Zibechi, la creación de los movimientos de la “nueva territorialidad” es la característica más importante, porque es donde los miembros de los movimientos toman el control de sus vidas diarias y sobre la cual todas las otras características se materializan. Esto es también posible porque las formas de organización política que los movimientos han adoptados son basadas en una reconfiguración de la unidad de familia extendida que “crea un nuevo espacio doméstico que no es privado ni público, pero algo nuevo que encapsula los dos” (p. 47). Zibechi observa que los movimientos están empezando a convertir estos espacios en alternativas para el sistema dominante, porque ellos están en espacios de subsistencia y acción política, y también porque construyen relaciones no capitalistas sobre ellos (p. 48).

Mi propia investigación, sobre experiencias alternativas de desarrollo emergiendo de la lucha por la tierra del movimiento Zapatista en Chiapas y el MST en Brasil (Vegara-Camus 2009, 2011), apunta a conclusiones muy similares a las de Zibechi. Desde la perspectiva de los autores quienes enfatizan la naturaleza no capitalista de *algunos aspectos* de la producción campesina, por lo menos dos temas necesitan ser investigados y no asumidos: la naturaleza de las relaciones sociales de producción y las potencias y limitaciones de las relaciones no capitalistas de producción como un escalón a construir una alternativa al neoliberalismo. Algunos autores, como varios contribuidores al libro *Campesinato e agronegocio na América Latina*, argumentan que los elementos no capitalistas de la producción campesina, sin importar su integración a las relaciones capitalistas, es una fuente de resistencia al capitalismo y, dependiendo de las acciones de los movimientos campesinos mismos, *pueden ser* (pero no son necesarios) la base para un modelo de desarrollo alternativo. La mayoría también reconocería que la naturaleza no capitalista de la producción campesina *no es absoluta* y donde también surgen muchas contradicciones, especialmente cuando uno intenta construir relaciones alternativas de producción o distribución al interior del mercado capitalista. En este contexto, cuestiones de estrategias de resistencia y de redes de comercialización alternativas no son tan fácilmente contestadas y no hay una respuesta mágica a este tema. Los libros revisados estudian varias opciones tales como la creación de grupos corporativistas de presión (Fernandes y Welch en *Campesinato e agronegocio na América Latina*), redes de comercio justo (Conroy en *Rural Social Movements in Latin America*), mercados de granjeros locales (García Guerreiro en *Campesinato e agronegocio na América Latina*), ecoturismo (Solís Librado en *Rural Social Movements in Latin America*) y la provisión de servicios ambientales (Allegretti y Schmink en *Rural Social Movements in Latin America*), entre otros. Sin embargo, considerando la diferencia de la producción campesina y la importancia de la tierra en la movilización campesina y la identidad política, la reforma agraria y la protección del acceso de los campesinos a la tierra son otra vez un tema central en la discusión sobre modelos alternativos de desarrollo rural en América Latina.

Reforma agraria, propiedad, Estado y desarrollo alternativo

Adicionalmente al capítulo previamente mencionado de Peter Rosset en *Rural Social Movements in Latin America*, varios académicos que han contribuido en la elaboración de los textos revisados asumen el rol de evaluar las reformas agrarias actuales en América Latina con motivo a enfocarse en los modelos teóricos que los han inspirado. La conclusión general es que, con la posible excepción de Bolivia y Venezuela, ninguna ley de reforma agraria en la región puede actuar como un modelo alternativo de desarrollo rural porque la mayoría de las políticas rurales son guiadas por un sesgo conceptual pro-mercado neoliberal (ver los capítulos de Milfred López, Jorge Montenegro Gómez, y Sergio Pereira Leite y Rodrigo Viera de Avila en *Campesinato e agronegócio no América Latina*). En el caso de Bolivia, el capítulo de Miguel Urioste en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?* Destaca que la ley de reforma agraria de Evo Morales representa una mezcla de los logros históricos y retrocesos (p. 140-1). Aquí el Estado recuperó alguna capacidad de reclamar tierra a través de auditorías que pueden determinar si una propiedad realiza su función socio-económico. La ley también estipula que la tierra debería ser destinada a los campesinos sin tierra. Sin embargo, otras partes de la ley indican que en los casos de expropiación, los terratenientes serían compensados con los precios de mercado, y lo más importante es que el límite legal a la tenencia de la tierra está ahora fijado en 5 000 hectáreas. Una concesión adicional importante a los grandes terratenientes es que las propiedades más grandes que 5 000 hectáreas registradas *antes* que la ley no son sujetos a este límite (Cunha y Goncalves 2010, 188). Esto, combinado con el hecho de que las auditorías han probado ser una manera ineficiente de recuperar la tierra en el pasado, indica que la reforma agraria verdadera sería difícil de llevarse a cabo en Bolivia.

Según el gobierno, 23,46 millones de hectáreas tendrían que ser distribuidas a aproximadamente 100 000 familias (Cunha y Goncalves 2010, 188). No obstante, otra contradicción evidente es cuando consideramos el tipo de tierra que ha sido distribuida. Como en muchos otros países Latinoamericanos en el pasado, el Estado boliviano ha usado la tierra pública para distribuir cerca de la mitad (9 millones hectáreas) a las comunidades indígenas en las tierras bajas de la Amazonia. Esto, sin embargo, es conflictivo con las expectativas de los migrantes indígenas de las tierras altas andinas, quienes ahora ven la oportunidad de acceder a la tierra. La única posible opción para los campesinos indígenas del oeste se basa en el proceso de criticar la legitimidad de los títulos de propiedad de los grandes terratenientes, donde el gobierno de Evo Morales ha hecho poco progreso (p. 146). Algunos dirían que las condiciones políticas no fueron listas para una reforma agraria radical.

Resulta interesante que en la mayoría de las investigaciones sobre la reforma agraria, si los capítulos fueron escritos por los representantes de los movimientos rurales o los académicos, las cláusulas constitucionales que atribuyen una función social a la propiedad se resaltan como mecanismos particularmente importantes para la posible creación de una al-

ternativa al neoliberalismo. Sin embargo, asombrosamente, pocos investigadores se enfocan en estas cláusulas constitucionales como su sujeto principal de estudio. La función social del estudio fue, por ejemplo, instrumental en el éxito de la movilización y distribución de la tierra en Brasil, o se volvió una manera de institucionalizar las demandas de los campesinos para las tierras en los países como Bolivia y Ecuador. Varios autores también mencionan que la función social de la propiedad, en combinación con otros principios como la soberanía alimentaria o *sumak kawsay* (*buen vivir en español*), consagrados en la constitución nacional podrían ser el instrumento para habilitar el cambio social y posiblemente formar la base de las políticas pos-neoliberales. La nueva constitución de Bolivia incorpora el principio de la soberanía alimentaria para asuntos de políticas agrícolas y de la función social de la propiedad para temas relacionados con el acceso a recursos. En Ecuador, bajo el mandato del presidente Correa, la constitución también incorpora nociones de la soberanía alimentaria y de *sumak kawsay* para temas socio-económicos en general, como los principios rectores del modelo de desarrollo e intervención del Estado (ver los capítulos de Juan Pablo Muñoz en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, p. 158-64).³ Según Muñoz, esta incorporación sugiere el principio de la era pos-neoliberal, porque la idea de *buen vivir* implica “desarrollo equitativo y sustentable” basado en “la solidaridad en vez de la competencia, equidad en vez de disparidad social, y protección ambiental en vez de su destrucción” (p. 160-1). En términos de las políticas agrícolas, la adopción del enfoque de la soberanía alimentaria en la constitución sugiere un mejoramiento en comparación con el concepto de la seguridad alimentaria, porque proclama buscar la autosuficiencia alimentaria al privilegiar los pequeños productores sustentables. Muñoz sigue siendo escéptico, no obstante, porque los principios constitucionales no fueron acompañados con un compromiso que garantiza los derechos y acceso a la tierra, el agua y la protección de la biodiversidad, los cuales son fundamentales para la consolidación de un modelo alternativo de desarrollo. A pesar de que él parece estar suspendiendo su juicio sobre el gobierno de Correa, Muñoz ve estos desarrollos recientes como indicativos de una decisión clara de una redistribución de la riqueza parcial de parte del Estado y estableciendo vínculos autoritarios y clientelistas a los movimientos social que se están debilitando (p. 156-7). El capítulo concluyente de Jordi Gascón en *¿Cambio de rumbo de las políticas agrarias latinoamericanas?* también apunta a varias contradicciones en las políticas actuales de Ecuador, tales como la inclusión de ciertas enmiendas que permiten la importación de transgénicos, la legalización de la ocupación de los manglares por las empresas camaroneras, y la posibilidad de la producción de biocombustibles con los cultivos alimentarios (p. 242).

3 Porque es muy reciente, la adopción de *sumak kawsay* o *buen vivir* es uno de los principios rectores de su modelo de desarrollo para algunos gobiernos latinoamericanos que no ha sido analizado académicamente y su aplicación aún no se ha visto. Para discusiones preliminares pero interesantes, ver Esteva (2010), Walch (2010), Becker (2011), Gudynas (2011), Thomson (2011), Arsel (2012) y Arsel y Avila Angel (2012).

Ecuador no es el único caso donde los movimientos sociales rurales han hecho progresos en un frente –por ejemplo, el reconocimiento constitucional de ciertos privilegios y derechos – pero han fallado en forzar a los gobiernos en transformar las políticas agrarias significativamente. Jeffrey Webber ha desestimado el progreso de la Asamblea Constitucional y las reformas constitucionales en Bolivia, dado que las políticas actuales del gobierno de Evo Morales representan un turno hacia el neoliberalismo reconstituido (2012, 169). Es verdad que las políticas de Evo Morales no han intentado cambiar el enfoque de la agricultura boliviana de la producción comercial de gran escala hacia metas de autosuficiencia basado en la agricultura de pequeña escala. Con la excepción de Cuba, debido a sus circunstancias altamente extraordinarias, esto no ha sido el caso de ningún país latinoamericano hasta ahora. ¿Eso quiere decir que los gobiernos de izquierda no se alejan del neoliberalismo o que los actuales logros limitados no pueden convertirse en trampolín para los movimientos sociales rurales para impulsar el abandono del neoliberalismo?

Mark Becker (2011) ha mostrado qué tan dinámica y compleja es la batalla para incluir concepciones indígenas y derechos en la constitución de Ecuador. Argumentó que no deberíamos, subestimar el significado de tal propósito. Aunque las leyes claves, como la ley minera, han mantenido su carácter neoliberal, la habilidad del Estado de intervenir ha incrementado. Los autores analizan la creación de la iniciativa Yasuní-ITT del gobierno de Correa, que propone dejar las reservas de petróleo sin explotar a cambio de las compensaciones financieras de la comunidad internacional, y combina el despliegue de la noción indígena de la *Pacha Mama* (madre tierra) con la mercantilización neoliberal, lo cual ha suscitado la preocupación sobre el carácter contradictoria de las políticas de Correa, además de su estatismo (Arsel 2012, 154; Arsel y Avila Ángel 2012, 220-3). Queda claro que el reconocimiento constitucional del principio de la soberanía alimentaria o *buen vivir* no es en sí suficiente. Pero como la historia reciente de los movimientos sociales rurales atestigua, las leyes y las cláusulas constitucionales han sido usadas exitosamente por los movimientos rurales para forzar cambios en la política. Los avances futuros dependerán de la habilidad de los movimientos rurales de afectar el balance de las fuerzas de clase dentro de la sociedad y el Estado.

Campesinos, políticas, Estado, cambio social y autonomía

En su libro clásico *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Barrington Moore (1966) concluyó que las revueltas campesinas fueron raramente favorables para los campesinos. Afirmó: “los campesinos han provisto la dinamita para derribar el edificio antiguo. Para el trabajo subsiguiente de la reconstrucción, no han traído nada; sino que han sido – hasta en Francia – sus primeras víctimas” (Moore 1966: 480). ¿Podríamos decir lo mismo sobre los movimientos campesinos de América Latina hoy en día? La literatura examinada para esta revisión no es unánime, pero la mayoría de los autores no estarían de acuerdo con Barring-

ton Moore, porque muchos movimientos por toda América Latina han pasado de la protesta a la propuesta. La cuestión de que si han tenido un impacto verdadero sobre las políticas y si éstas terminan siendo beneficiosas, presentan múltiples respuestas. Por un lado, sorprendentemente, los activistas de los movimientos sociales están muy lejos de ser complacientes hacia los gobiernos progresivos que ellos han ayudado a elegir. La mayoría de ellos reconocen la importancia de lograr un alto nivel de unidad dentro del movimiento para poder movilizar exitosamente y forzar al gobierno a tomar ciertas decisiones o adoptar ciertas políticas. Los capítulos escritos por los líderes de los movimientos sociales en *Rural Social Movements in Latin America* muestran el nivel de autonomía de los partidos políticos y el Estado que los movimientos rurales han podido lograr, pero también cómo han sido capaces de formar coaliciones con los partidos políticos para confrontar o acceder al poder estatal.

El capítulo escrito por George Ann Potter y Leonida Zurita, el ex secretario ejecutivo del Coordinador de las Mujeres Campesinas de los Trópicos (COCAMTROP) de Bolivia y actual senador alternativo para el Movimiento Hacia el Socialismo (MAS), ejemplifica cómo incluso los movimientos que han sido incorporados en el partido de gobierno y el Estado no les han dado un cheque en blanco. Potter y Zurita orgullosamente subrayan, por ejemplo, que el incremento en el número de candidatas femeninas para el MAS fue un resultado de la presión del movimiento de mujeres dentro del partido. Las mujeres lograron 35 por ciento de las delegadas elegidas a la asamblea constitucional en 2007 y forman 48 por ciento de las delegadas del MAS, también la nominación de varias mujeres indígenas campesinas a posiciones ministeriales importantes son vistos como victorias que todavía necesitan ser transformados en plataformas para la organización de mujeres sobre “temas de mujeres” (p. 242). Del mismo modo, según Saisari Silvestre, el coordinador nacional del Movimiento indígena, campesino, y de trabajadores sin tierra de Bolivia (MST-Bolivia), la ley de reforma agraria de Evo Morales, aunque no es perfecta, es importante porque se está expandiendo “las provisiones para la tierra para revertir al Estado si la tierra no es usada para un fin socio-económico”, y porque permite a los movimientos sociales rurales iniciar y participar en el proceso de auditorías de las propiedades (p. 134). El análisis de Peter Rosset sobre los límites de la reforma agraria de Evo Morales hace eco de los movimientos sociales para recordarnos que el Estado boliviano ha sido tradicionalmente débil en confrontar a las terratenientes grandes. Adicionalmente, Evo Morales está situado en una posición incómoda porque una parte importante de los latifundios bolivianos están en las manos del capital brasileño y por ende, irónicamente, defendidos por el Estado brasileiro (entrevista en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?* p. 202). Según él, incluso si el campesino boliviano y el movimiento social han sido capaces de movilizar una gran cantidad de gente, no tienen la capacidad de ocupar la tierra, como en el caso del MST de Brasil. En estas circunstancias, con el fin de evitar sucesiones regionales o un *coup d'état*, Evo Morales necesita ser muy cauteloso. Los movimientos rurales por toda la región entienden que las políticas, incluso las de los gobiernos aliados, son el resultado de la balanza de

poder en un punto determinado en el tiempo, y por ende han sido movilizado no sólo para mostrar su apoyo sino también para presionar a sus respectivos gobiernos a llevar a cabo la reforma agraria o implementar las políticas agrícolas favorables. Esto también ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo del MST en Brasil, incluso en lugares donde el Partido del Trabajador (PT) gobernaba un Estado en particular o el gobierno federal. Como el capítulo de Miguel Carter sobre el MST de Brasil en *Rural Social Movements in Latin America* donde destaca correctamente que uno de los factores más importantes para explicar el éxito de la organización ha sido su habilidad de realizar una movilización masiva y combinarlo con una estrategia creativa que incluye manifestaciones de larga distancia, demostraciones en la calle y campos de protesta que pasan de la confrontación a la negociación. El MST, por ejemplo, continuaba usando la ocupación de los edificios públicos como una de sus tácticas claves para atraer la atención pública sobre la falta de apoyo para los pequeños terratenientes en un estado como el de Rio Grande do Sul, el cual era gobernado por el PT a través de los años a principios del 2000. Del mismo modo, durante la presidencia de Lula (2003-2011), el movimiento también organizó varias manifestaciones en Brasilia para presionar al presidente a acelerar la reforma agraria y la financiación focalizada hacia los productores campesinos familiares.

Lo que queda claro de la literatura revisada –aunque ningún texto en particular lo argumenta directamente, excepto el capítulo concluyente de Jordi Gascón en *¿Cambios de Rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*– es que las especificaciones nacionales tienen importancia en la habilidad de los movimientos sociales para presionar a sus políticos exitosamente. El grado de autonomía (o falta de autonomía) que los políticos tienen respecto a las agroindustrias también es un factor para entender las políticas estatales y las acciones de los “gobiernos progresivos” – como atestigua el caso de la presidencia de Lula en detrimento de los movimientos rurales. El núcleo de la materia gira en torno a la naturaleza del poder estatal y las diferentes estrategias que los movimientos rurales han adoptado hacia ellas.

El problema delicado es la relación entre los movimientos sociales, los partidos políticos y los gobiernos de izquierda o progresivos que han sido sujeto de un acalorado debate al interior de la izquierda latinoamericana por varias décadas. Las Zapatistas, con su estrategia política innovadora de no “tomar” el poder del Estado para desarrollar experiencias de auto-gobernanza, dieron a este debate una nueva dimensión. La experiencia pragmática del MST en Brasil, la incorporación de los activistas de movimientos sociales en la gerencia de las políticas estatales en Ecuador y la integración de los líderes de movimientos sociales en el gobierno de Bolivia, bajo Evo Morales, han planteado numerosas cuestiones prácticas y teóricas. Para Fernando Mayorga, en *¿Cambios de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, la relación entre los movimientos sociales y el actual Estado en Bolivia no puede ser entendida usando conceptos de autonomía o cooptación. Lo que tenemos en frente de nosotros es una “coalición inestable” porque ciertos movimientos, tal como el de los cocaleros, son la base de apoyo orgánica y permanente del MAS. Otros, como algunos

sindicatos y cooperativas, se han aliado circunstancialmente con el gobierno, mientras otros grupos, particularmente el de la Central Obrero Boliviana, se han suscrito a la agenda del MAS pero han permanecido independientes y no han entrado en los círculos internos de poder. Finalmente, ciertas organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) han actuado alternativamente como grupos de aliados o interesados durante la Asamblea Constituyente. Mayorga, sin embargo, señala un proceso incipiente de institucionalización de la relación entre los movimientos y el Estado que empezó en 2007 y 2008, en el contexto de la Asamblea Constituyente con la firma del Pacto de Unidad por la mayoría de los campesinos y los movimientos indígenas y la creación de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). El CONALCAM era crucial para la movilización de los sectores populares en contra de la oposición de la oligarquía regional del gobierno de Evo Morales durante el primer año de su mandato. Sin embargo, la relación entre los movimientos sociales y el Estado tiene contradicciones, porque a pesar de que hay un intercambio dinámico entre ellos, el presidente de turno parece estar cultivando una relación directa con los movimientos que no necesariamente atraviesa el gobierno o el CONALCAM (94-5). El espectro de clientelismo sale a la superficie aquí, pero según la literatura, en ningún lugar ha sido más agudo y devastador que para los movimientos sociales en Ecuador.

Una de las experiencias de los movimientos rurales que llamó la atención de los académicos era de hecho la experiencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), porque jugó un rol crucial (aunque controversial) en la lucha en contra del neoliberalismo y la caída de los gobiernos de la derecha. Un académico ecuatoriano, Victor Bretón, en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, rastrea la alianza política de la CONAIE con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) y lo ve como la culminación de un proceso largo de neutralización del potencial rebelde del movimiento campesino indígena. Usando su conocimiento extensivo del campo Ecuatoriano, Bretón argumenta que la Reforma Agraria de 1960 y 1970, que fue en realidad un proceso de colonización de la nueva tierra, irónicamente desmovilizó al movimiento campesino y facilitó el surgimiento de una nueva élite indígena. Con la implementación del neoliberalismo, esta élite indígena empezó a enfatizar la etnicidad indígena como una herramienta movilizadora para la creación de un nuevo movimiento pan-indígena. Más tarde, una facción de esta élite jugó el rol de mediador entre el Estado y la población rural, a través de la creación de una plétora de ONG, vinculada a los programas de desarrollo financiados desde el extranjero. Esta facción del liderazgo indígena fue transformada en lo que Charles Hale (2004) ha llamado el 'indio permitido' y se hizo parte del aparato de poder del multiculturalismo neoliberal (69). Esto, según Bretón, llevó al 'sobre-etnicización' de los problemas del desarrollo rural que han terminado por ocultar los procesos de concentración de la tierra y la proletarianización lumpen de un grande sector de la fuerza laboral rural ecuatoriana.

Llegando a conclusiones similares, pero trabajando con la idea de gobernabilidad y bio-poder de Foucault, Raúl Zibechi sostiene que el peligro más importante para los movimientos

hoy es el estar hinchados por la lógica del Estado y las políticas institucionales, y el proceso de perder su autonomía. Según él, la experiencia de la CONAIE ejemplifica este peligro. Haber estado en primera línea de varios levantamientos y prácticas democráticas de base en la década de 1990, sus líderes –sin consultar a sus miembros– adoptaron una estrategia estatista (289) que contradujo la potencial alternativa del movimiento. En el otro extremo, la ruta tomada por los Zapatistas de Chiapas es, para Zibechi, la forma ‘más coherente y explícita’ de hacer políticas (145) en América Latina. Peter Rosset (entrevistado en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*) es más pragmático. Él cree que elegir los gobiernos de izquierda ha sido un paso importante, pero que los movimientos necesitan ser capaces de mantener su autonomía para adoptar una posición de ‘apoyo constructivo’ de las políticas apropiadas más que una crítica y presión cuando no están. Desde la perspectiva de los movimientos campesinos una de las condiciones fundamentales debería ser la garantía de compra a los productores campesinos en vez de la agroindustria (195). El debate sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado o sus estrategias hacia el poder estatal está muy lejos de tener un fin. Los tres autores citados representan la diversidad de opiniones sobre este asunto.

El caso de Ecuador es, sin embargo, muy distinto al de Bolivia, principalmente porque Correa, no tiene una trayectoria de activista en los movimientos sociales. Su relación con los movimientos sociales es por ende mucho más ambigua y su estilo de gobernanza es más remaneciente de los políticos populistas de América Latina. Juan Pablo Muñoz caracteriza el gobierno actual de Correa como un “gobierno en desarrollo con vocación social, rociado con una buena dosis de moralidad cristiana con una nueva forma de caudillismo, además de una retórica anti-imperialista y revolucionaria’ (157). No obstante, Correa respondió al movimiento campesino e indígena al llamar a una Asamblea Constituyente, y después consagrando el principio de la soberanía alimentaria en la Constitución ecuatoriana. Sin embargo, en oposición a esta, las leyes de minería de Correa siguen a las industrias extractivistas que frecuentemente invaden en los territorios indígenas. Los movimientos han reaccionado distintamente a la ambigua política de Correa. Esta vez, la CONAIE ha mantenido una distancia de cualquier alianza formal con Correa y ha criticado sus leyes de soberanía alimentaria por ser demasiado indulgentes con las semillas transgénicas. La CONAIE incluso ha reclamado su rol de liderazgo del pasado llamando con éxito a una movilización de masas en contra de estas medidas del gobierno de Correa el 22 de Marzo 2012. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negra (FENOCIN), no teniendo experiencia anterior de cooperación con el gobierno, ha decidido no oponerse a Correa, y algunos de sus líderes tomaron posiciones dentro del Estado porque vieron al gobierno progresivo como una oportunidad de lograr ciertas reformas (Entrevista con Rosset, 205)⁴.

Esto parece ser la regla general de la región. Movimientos rurales toman la decisión sobre si colaboran o no con los partidos políticos, y el Estado se basa en sus propias expe-

4 Desde la Asamblea Constituyente, la FENOCIN se ha alejado gradualmente del gobierno de Correa hasta que finalmente se rompió en el congreso nacional de Marzo, 2013.

riencias con ellos y rara vez en relación con motivos ideológicos. Lo que las experiencias recientes y los dilemas en Ecuador, Bolivia y Brasil en menor medida sugieren es que los movimientos rurales sociales parecen estar entrando en un nuevo y mucho más complejo ciclo de movilización: un ciclo que les coloca en oposición a los gobiernos y partidos aliados que no han implementado reformas necesarias para apoyar los productores campesinos, pero también un ciclo en el cual los líderes de los movimientos intentan empujar un cambio desde el Estado. Este nuevo ciclo está destinado a proporcionar más material para la acalorada discusión entre los autonomistas radicales y los académicos centrados en el Estado. Dependiendo del concepto de gobernabilidad de Foucault para desacreditar los intentos de los movimientos sociales de llevar a cabo el cambio social, como Zibechi ha dicho recientemente, no provee una vía fructífera para el análisis. Tiende a depender del Estado, para transformarlo en una estructura que impone una lógica específica sobre todos los agentes involucrados dentro del mismo. Al hacerlo, también postula estrategias anti-Estado como superiores a otras estrategias, en vez de verlos como los resultados de unos procesos particulares y decisiones internas de los movimientos sociales.

Comentarios sobre la escolaridad de los movimientos rurales sociales en América Latina

En general, el estado de arte de la escolaridad de los movimientos agrarios parecen estar siguiendo el dinamismo de los movimientos agrarios, pero sus limitaciones son el reflejo de la naturaleza fragmentada del mundo académico. Debido a la importancia de los movimientos rural en las políticas latinoamericanas, una gran cantidad de investigaciones involucran enfoques multidisciplinarios y trabajos de campo intensivo. Esto tiene la ventaja de proveer descripciones muy detalladas de una gran variedad de casos. La desventaja es que en este caso era de sobre-especialización académica, la mayoría de la escolaridad está organizada alrededor de un solo caso de estudios que a menudo no entraban en debate o diálogo con los resultados de otros estudios de casos. La mayoría de la investigación simplemente intenta identificar las tendencias en vez de examinarlas a través de estudios comparativos que tengan el objetivo claro de explicar lo que tienen en común y las diferencias además de las trayectorias divergentes. Además, el uso de la teoría parece desigual. Solo una minoría de los investigadores está preocupada con aplicar un marco teórico abarcador y coherente para entender sus casos de estudio. La mayoría de la escolaridad revisada en esta reseña, con la excepción de Giarracca y Teubal, Horacio Mackinlay, Bernardo Mançano Fernandes y Cliff Welch, Jordi Gascón y Raúl Zibechi, adoptan una perspectiva que es demasiado enfocado en la actual coyuntura neoliberal, en vez de tomar una perspectiva histórica que podría interrogar el rol de la coyuntura global sobre los procesos nacionales de movilización. La mayoría de la escolaridad también mira a los movimientos sociales

más o menos en aislamiento de sus adversarios, sea los oficiales estatales, agro-negocios o los terratenientes tradicionales y sus aliados. Claramente, hay una brecha de investigación sobre los resultados dinámicos y las limitaciones de las políticas de conflicto y alianzas de los movimientos rurales sociales en relación con los otros actores.

Porque buscan insertar procesos específicos en las tendencias más grandes y entender los resultados políticos en términos de balanza del poder, los enfoques teóricos que se acercan a una perspectiva más holística son los que todavía adoptan un enfoque de economía política clasista para los movimientos rurales. Acercamientos de economía política históricamente informados, que entretejen los procesos globales y locales y consideran seriamente entenderlo como el resultado de una lucha entre las clases al nivel nacional. Todavía son los acercamientos que nos permiten entender los procesos rurales en todas sus complejidades. El reto para los académicos rurales es proporcionar una explicación detallada de la naturaleza del árbol (el estudio de caso de un sector específico o movimiento) sin perder la vida del bosque (las dinámicas constantes y cambiantes del campo de una nación específica adentro de la actual globalización de la agricultura).

Finalmente, una gran porción de la escolaridad revisada en este ensayo se ha enfocado en las políticas estatales o las estrategias de los movimientos rurales hacia el Estado. Sin embargo, muy pocos académicos tratan explícitamente la concepción del Estado o se refieren a las discusiones teóricas alrededor de la teoría del Estado. Pocos académicos intentan a teorizar qué es específico o particular sobre la forma en que el Estado asume el conflicto social sobre los recursos. Mientras en el libro editado por Carmen Diana Deere y Frederick Royce, *Rural Social Movements in Latin America*, el análisis de las políticas estatales por los representantes del movimiento social y los académicos activistas contrastan con la concepción pluralista del Estado. A causa de la centralidad del Estado en la mayoría de las investigaciones, ya sea explícitamente reconocido o no, parece que hay una necesidad de traer de vuelta al Estado (otra vez), no solamente teóricamente pero también a través de una discusión teóricamente sofisticada sobre la naturaleza y el rol del Estado en el proceso continuo de la globalización neoliberal del campo, o en los emergentes modelos de desarrollo post-neoliberales.

Considerando la extrema complejidad del proceso de transformación rural en América Latina y la diversidad de experiencias organizacionales y estrategias políticas de movimientos rurales, un solo libro no podría proporcionar una imagen completa de los nuevos rostros del campo en América Latina. Por ende, activistas, estudiantes y académicos debería leer *Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods* para tener una idea clara de esta diversidad. Deberían leer *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?* Estado, movimientos sociales campesinos y soberanía alimentarias para entender cuáles han sido los principales logros o retrocesos políticos de los movimientos rurales sociales más 'exitosos' que se han vinculado con el Estado a través de alianzas con partidos políticos, y qué nuevas contradicciones están emergiendo de estas alianzas in-

cómodas. *Campesinato e agronegocio na América Latina: a questiao agraria atual* es una lectura obligada para cualquiera que busque un análisis teóricamente informado sobre los discursos y estrategias de los agro-negocios y los gobiernos, así como las respuestas de los movimientos campesinos. Finalmente, *Autonomías y Emancipaciones. América Latina en Movimiento* debería ser consultada por los interesados ya que refleja la potencial alternativa de algunos de los más importantes movimientos sociales en la región.

Leandro Vergara-Camus,
Departamento de Estudios de Desarrollo,
Facultad de Estudios Orientales y Africanos,
Universidad de Londres.

Bibliografía

- Alvarez, S. y A. Escobar, ed. (1992). *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*. Boulder, CO: Westview Press.
- Arsel, M. (2012). 'Between "Marx and Markets"? The State, the "Left Turn" and Nature in Ecuador'. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 103 (2): 150–63.
- Arsel, M. y N. Avila Angel (2012). ' "Stating" Nature's Role in Ecuadorian Development: Civil Society and the Yasuní-ITT Initiative'. *Journal of Developing Societies*, 28 (2): 203–27.
- Becker, M. (2011). 'Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador'. *Latin American Perspectives*, 38 (1): 47–62.
- Cunha, C.M. y R.S. Gonçalves (2010). 'The National Development Plan as Political Economy Strategy in Evo Morales's Bolivia: Accomplishments and Limitations'. *Latin American Perspectives*, 37 (4): 177–96.
- De Grammont, H.C. y H. MacKinlay (2009). 'Campesino and Indigenous Social Organizations Facing Democratic Transition in Mexico, 1938–2006'. *Latin American Perspectives*, 36 (4): 21–40.
- Dressler, W., B. Buscher, B. Schoon, D. Brockington, T. Hayes, C. Kull, J. McCarthy and K. Shrestha, (2010). 'From Hope to Crisis and Back Again? A Critical History of the Global CBNRM Narrative'. *Environmental Conservation*, 37 (1): 1–11.
- Edelman, M. (2008). 'Transnational Organizing in Agrarian Central America: Histories, Challenges, Prospects'. *Journal of Agrarian Change*, 8 (2–3): 229–57.
- Esteva, G. (2010). 'From the Bottom-Up: New Institutional Arrangements in Latin America'. *Development*, 53 (1): 64–9.
- Fernandes, B.M. (2005). 'The Occupation as a Form of Access to Land in Brazil: A Theoretical and Methodological Contribution'. In *Reclaiming the Land: The Resurgence of*

- Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, eds S. Moyo and P. Yeros, 311–40. London: Zed Books.
- Gudynas, E. (2011). 'Buen vivir: Today's Tomorrow'. *Development*, 54 (4): 441–7
- Hale, C. (2004). 'Rethinking Indigenous Politics in the Era of the "Indio Permitido" '. *NACLA Report on the Americas*, 32 (2): 16–21.
- Holloway, J. (2002). *Change the World without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*. London: Pluto.
- Moore, B. Jr, (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Thomson, B. (2011). 'Pachakuti: Indigenous Perspectives, *buen vivir*, *sumaq kawsay* and Degrowth'. *Development*, 54 (4): 448–54.
- Vergara-Camus, L. (2011). 'Globalisation, tierra, subsistencia y autonomía'. *Revista Mexicana de Sociología*, 73 (3): 387–414.
- Vergara-Camus, L. (2009). 'The MST and the EZLN's Struggle for Land: New Forms of Peasant Rebellions'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (9): 365–91.
- Walsh, C. (2010). 'Development as *buen vivir*: Institutional Arrangements and (De)colonial Entanglements'. *Development*, 53 (1): 15–21.
- Webber, J. (2012). 'From Left-Indigenous Insurrection to Reconstituted Neoliberalism in Bolivia: Political Economy, Indigenous Liberation, and Class Struggle, 2000–2011'. In *The New Latin American Left: Cracks in the Empire*, eds J. Webber and B. Carr, 149–89. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Zibechi, R. (1999). *La Mirada horizontal: movimientos sociales y emancipación*. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad.

Agriculturas familiares y perspectivas hacia el futuro*

(Agricultures familiales et mondes à venir)

Jean Michel Sourisseau (Ed)



El año 2014 marca un hito para la agricultura mundial. En efecto, se trata del año en el que la FAO ha reconocido públicamente la importancia de la Agricultura Familiar a nivel mundial, y que ha intentado abrir un debate acerca del re direccionamiento de las políticas agrícolas y sociales con el fin de promover este tipo de agricultura y comprender sus desafíos. Durante el mismo año se publica este libro, el cual nos revela desde su título, que el debate no debe centrarse en la Agricultura Familiar sino en “las agriculturas familiares” debido a su diversidad y roles fundamentales en el desarrollo agrario. Los diferentes autores que participan en la construcción de esta obra plantean redefinir y comprender a las agriculturas familiares utilizando criterios de diferenciación específicos, de igual manera, presentan las contribuciones de esta forma

de agricultura en las dinámicas territoriales y elaboran, al mismo tiempo, reflexiones muy interesantes en torno a los desafíos futuros en materia social y económica en los cuales la agricultura familiar podría jugar un rol predominante.

En primer lugar, para entender la problemática que gira en torno al campesinado actual y a las agriculturas familiares, los autores identifican a este tipo de agricultura como una categoría política y de análisis comprensible a partir de una definición “robusta” que permita estadísticamente medir su peso y sus contribuciones. Solamente, a partir de este punto, se podrán plantear políticas públicas “específicas y diferenciadas”. Para los autores, intentar caracterizar las explotaciones familiares utilizando la definición de explotación agrícola propuesta por la FAO es insuficiente, ya que esta última no toma en cuenta, por ejemplo,

* Reseña preparada por Diego Martínez Godoy, Doctor (c), AgroParisTech.
Correo electrónico: diego.martinez87@hotmail.com

los diversos usos del suelo en la explotación, que dependen de estrategias familiares y que van más allá de las actividades agrícolas.

En segundo lugar, también se recomienda sobrepasar los discursos políticos, militantes y fundamentalistas que tratan la problemática como un debate polarizado entre la agricultura familiar y la agricultura empresarial, ya que esta visión contrastada no correspondería a las realidades del mundo rural. Para lograr la “robustez objetiva” buscada en el análisis, los investigadores proponen la idea de un gradiente de situaciones en el cual se describa los diferentes tipos de agricultura, yendo desde el “ideal tipo campesino” hasta el límite de la agricultura capitalista. El principal criterio que nos permite identificar las diversas situaciones en el gradiente corresponde a la “relación salarial” y principalmente al uso del “trabajo asalariado permanente”. En efecto, se trata de una variable estructural que nos permite diferenciar tres tipos de explotación: empresarial, patronal y familiar. A esta clasificación se suman otros criterios de diferenciación de menor peso como el uso del capital, las modalidades de gestión, la existencia de agricultura para el autoconsumo y el estatuto jurídico adoptado en cada tipo de explotación.

El lado innovador del planteamiento radica en el uso de un factor discriminante como la “relación salarial” ya que permite una caracterización que facilita la lectura sobre las dinámicas de transformación de las agriculturas y de los efectos de las políticas sobre estas transformaciones. De esta manera, se presenta en el libro a la agricultura familiar como “el término que designa una de las formas de organización de la producción agrícola y agrupa a explotaciones que poseen lazos orgánicos entre la familia y la unidad de producción y dada la utilización del trabajo familiar, excluye la figura de asalariado permanente. Los lazos se materializan por la incorporación del capital productivo en el patrimonio familiar y por la combinación de lógicas domésticas de producción, mercantiles y no mercantiles... así como también en las decisiones de repartición de productos entre consumos finales, consumos intermedios, inversiones y procesos de acumulación.” (Belieres et al, 2013).

Como complemento, los autores presentan el criterio del tamaño de la explotación como un factor no discriminante en las explotaciones familiares de los países desarrollados, pero sí como un criterio de diferenciación a tomar en cuenta en el análisis de las explotaciones familiares de los países que mantengan economías en desarrollo. Así mismo, en el libro se pretende dejar de lado hipótesis erróneas construidas sobre las agriculturas familiares. Por ejemplo, con respecto a la idea de una agricultura familiar sinónimo de pobreza, los autores afirman que en condiciones de políticas agrícolas favorables, las agriculturas familiares podrían contribuir eficazmente a las dinámicas de acumulación de riqueza. Enseguida, en torno a las afirmaciones sobre las agriculturas familiares únicamente centradas en el autoconsumo, se afirma la inserción mayoritaria de este tipo de agricultura en los mercados, sin embargo, la producción para la subsistencia o para el intercambio no mercantil no debe ser un criterio peyorativo, pues este se considera una estrategia familiar que ha permitido ajustes eficaces capaces de limitar impactos de crisis económicas y/o dese-

quilibrios climáticos. Esta última idea es fundamental para llegar a demostrar la resiliencia de la agricultura familiar en un contexto global.

La diversidad de las agriculturas familiares es un tema presentado en el libro como un postulado central. Este fenómeno es explicado por el funcionamiento de la familia más que por el funcionamiento de las estructuras de explotación agrícola. Utilizando seis criterios razonados bajo el ángulo del acceso a los recursos en tierra y a los recursos en propiedad común, se plantea en el libro, una matriz de lectura que nos facilitaría la diferenciación de las grandes formas de agriculturas familiares identificables en cada uno de los contextos locales y en función a problemáticas específicas. Los seis criterios que estructuran la matriz hacen referencia a la seguridad de acceso a recursos, a la capacidad de inversión de la familia, a la existencia de autoconsumo, a las diferentes modalidades de inserción en los mercados, a la pluri-actividad y, finalmente, al nivel de diversificación o de especialización agrícola.

A nivel estadístico, los autores del libro afirman que es difícil medir una contribución de las agriculturas familiares, sin embargo, bajo una óptica territorial, el análisis toma otro rumbo. Se presume, en la obra dirigida por Sourisseau, que los lazos entre los territorios y las estrategias llevadas a cabo por los agricultores familiares son estrechas. En efecto, el rol central de la agricultura en la estructuración de los territorios es un hecho y, apoyándose en los trabajos de Gumuchian y Pecqueur (2007), se afirma en la obra que las agriculturas familiares estarían en el corazón de las dinámicas territoriales, las cuales provienen de “la movilización de recursos específicos materiales o inmateriales por parte de los actores individuales o colectivos”. También es posible diferenciar las dinámicas territoriales propias de las agriculturas familiares en función de la distancia existente con los espacios urbanos. De esta manera, se vuelve factible para los autores proponer cuatro categorías de espacios rurales en los cuales se analizan los diferentes aportes y contribuciones de las agriculturas familiares en las dinámicas territoriales.

De manera resumida, en las zonas rurales marginales y frentes pioneros, pese a la presencia de firmas agro industriales, las estrategias familiares de los agricultores siempre van a ser un motor importante para el desarrollo local, sin embargo, éstas se ven limitadas dada las formas de producción impuestas en el territorio, provocando la desestructuración de sistemas de producción local y la rápida degradación de los suelos. Para los autores, es fundamental modificar la base de los sistemas de producción, lo cual dependerá de los contextos legales de cada Estado pero también de la inserción y consolidación de la agricultura familiar en las dinámicas territoriales. Por el contrario, en los “Espacios Rurales Típicos”, se mezclan distintas situaciones con rasgos comunes en las cuales las actividades agrícolas son predominantes tanto en materia de empleo como en superficie ocupada. En este tipo de espacios, las agriculturas familiares son mayoritarias, así como también, los valores culturales y sistemas políticos estarían altamente influenciados por el mundo agrícola. En estas zonas, la agricultura familiar contribuye a múltiples funciones sociales, económicas

y medio ambientales, las cuales constituyen un solo bloque con la dimensión identitaria. Por ejemplo, este territorio es propicio a la generación de “sistemas agroalimentarios localizados” (SYAL), a través de los cuales se puede generar “un motor para la activación y valorización de recursos territoriales existentes debido a la masiva presencia de agriculturas familiares”. (Sourisseau, 2014: 117)

Sin embargo, es pertinente abordar en un punto aparte, dos variantes del “Espacio Rural Típico” correspondiente a los espacios dominados por las “firmas agro-industriales”, y a los espacios de cohabitación entre agriculturas familiares y formas patronales e industriales. Efectivamente, estos casos serían pertinentes para ilustrar gran parte de las situaciones recurrentes en el Ecuador. El primero muestra el razonamiento únicamente productivo por parte de la firma hacia el territorio, la cual impone una “estrategia extractivista al servicio de sus intereses”; en este caso el rol de las agriculturas familiares se ve disminuido y gran parte de la población agrícola, empleada por las firmas, se encuentra en un estado de proletarización. El segundo se refiere a los casos donde las agriculturas familiares “coexisten bajo lógicas tanto de complementariedad como de dominación o conflictos según las diferentes situaciones”. Un ejemplo negativo de coexistencia vendría a ser el caso de la agricultura de contrato en donde las relaciones de dominación son visibles dando como resultado una “cuasi proletarización de los agricultores familiares” que a su vez sería causa de empobrecimiento. Por el contrario, el libro también expone casos en los cuales la coexistencia (agriculturas familiares y agriculturas industriales) constituye complementariedades capaces de construir relaciones sociales favorables a la consolidación de los territorios.

Las zonas agrícolas urbanas y periurbanas también constituyen territorios en los cuales las agriculturas familiares han ido tomando peso de manera creciente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. En efecto, los autores plantean la idea que ante la ausencia de protección social, la agricultura se ha vuelto una necesidad vital. En situaciones de crisis políticas o económicas, la agricultura familiar presente en zonas urbanas y periurbanas ha significado fuentes de empleo y de ingresos sin grandes inversiones iniciales, y a su vez, ha permitido luchar contra la pobreza. Los autores citan el ejemplo de Moscú, ciudad en la cual el número de familias productoras de frutas y legumbres pasó de 20% en 1965 a 70% en 1990. Los autores señalan que la actitud de los poderes públicos frente a este tipo de agricultura en medio urbano y periurbano es primordial, y se requiere un sistema de “planificación urbana, soporte financiero y estabilización de precios”, al igual que una “concepción de políticas agri-urbanas” capaces de reconocer el rol de las agriculturas familiares en medios urbanos.

Si bien la pertinencia del libro es evidente desde la primera y segunda parte, mediante la clarificación de conceptos y análisis del peso y contribuciones de las agriculturas familiares a nivel territorial, el estudio quedaría incompleto si no se tratase los desafíos actuales y futuros de este tipo de agricultura en relación a temas como la pobreza, el empleo, las energías renovables, la salud humana y animal, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. La

tercera parte del libro es presentada con un énfasis específico a las agriculturas familiares de los países del sur, ya que éstas serían las “principales víctimas de los efectos negativos de los procesos de desarrollo”. En efecto, según los autores, en los países desarrollados la agricultura familiar es considerada cada vez más como un componente económico y social capaz de gestionar las externalidades negativas del crecimiento económico, y frente a los poderes públicos, su reconocimiento es mayor. Sin embargo, se sostiene la idea que en los países en vías de desarrollo, en donde la agricultura familiar es la categoría socio económica dominante y donde el desarrollo intersectorial no es adecuado para responder a los problemas sociales generados por los flujos desordenados de migración, paradójicamente posee menos reconocimiento por parte de las autoridades.

Las interrogaciones que giran en torno a los desafíos, van de la mano con los temas señalados anteriormente: ¿Las agriculturas familiares capaces de crear y diversificar los ingresos familiares y contribuir enormemente a las dinámicas territoriales, son capaces de hacer frente ante la desigual transición demográfica y la evolución de la población agrícola de los países en desarrollo? ¿Cuáles serían las posibles respuestas de la agricultura familiar frente a las necesidades de los mercados internacionales? ¿Sería ésta última capaz de contribuir a la transición energética? ¿Son éstas capaces de enfrentar los desafíos sanitarios actuales, dada su enorme capacidad de gestión de recursos naturales? Para responder estas interrogaciones los autores sostienen la idea de que es necesario contextualizar los debates en función de niveles de desarrollo diferenciados y de realidades locales diferentes. Sin embargo, se advierte que estas interrogaciones acarrearán nuevos cuestionamientos, resueltos y no resueltos, que se encuentran en el desarrollo de la parte final de la obra, la cual se recomienda leerla sin moderación.

Diego Martínez Godoy,
Doctor (c), AgroParisTech

Bibliografía

- Belieres et al (2013), *Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques*, Montpellier, Paris, Cirad, AFD, MAAF, MAE, 306p.
- Sourisseau, Jean Michel (2014), *Agricultures Familiales et mondes à venir*, Editions Quae: Paris.

Revista Eutopía agradece a los siguientes
académicos e investigadores por su colaboración
con el presente número:

Francisco Rhon Dávila
Centro Andino de Acción Popular, Ecuador

Liisa North
Universidad de York, Canadá

Sergio Schneider
UFRGS, Brasil

Carmen Diana Deere
University of Florida, EEUU; FLACSO, Ecuador

Nasser Rebaï
FLACSO, Ecuador

Cristobal Kay
ISS, Holanda

Guillermo Neiman
FLACSO, Argentina

Clara Craviotti
FLACSO, Argentina

Fernando Guerrero
PUCE, Ecuador

Patrick Clark
Carleton University, Canada; FLACSO, Ecuador

Mónica Bendini
UNCOMA, Argentina

Diego Piñeiro
Universidad de la República, Uruguay

Arilson Favareto
Universidade do ABC, Brasil

Luciano Martínez Valle
FLACSO, Ecuador

Política editorial

EUTOPIA es una revista nueva dentro de las ciencias sociales de la región y busca, tal como su nombre lo evoca, la reflexión sobre lo que sucede en nuestra sociedad tomando como eje de análisis el territorio. Eu-topia proviene del griego: eu, bueno y topos lugar, literalmente significaría buen lugar y es justo sobre lo que buscamos reflexionar tanto a nivel de Ecuador como de América Latina. No basta con la teoría de moda del “buen vivir”, si no se dispone de un “buen lugar” para implementar una nueva forma de hacer economía, de recrear las relaciones de reciprocidad, de hacer política participativa, en concreto de construir una sociedad más justa y solidaria. La construcción de un “buen lugar”, no como una Utopía sino como algo real y viable es un reto en el cual es necesaria la incorporación activa del pensamiento social de avanzada en la región.

Los esfuerzos de esta revista buscan mostrar, tanto a académicos como a los *policy makers*, las nuevas reflexiones que existen sobre el territorio, el desarrollo, y las interpretaciones que provienen desde la economía, la sociología y las demás ciencias sociales. Al mismo tiempo, estos esfuerzos también están orientados hacia rescatar lo que hace la gente en los territorios, para revalorizar su rol no solo económico, sino también su potencialidad de cambio. En un mundo cada vez más globalizado, existe la tendencia a pensar que las soluciones nos llegarán algún momento desde fuera y seguimos con el sueño de construir una sociedad similar a la de los países avanzados, cuando justamente estos se encuentran en crisis y miran los senderos por lo que transitamos lenta y difícilmente en la construcción de territorios más vivibles, es decir, eutópicos.

La presente es una publicación de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural, de la FLACSO-Sede Ecuador.

Contenidos:

- *Dossier*: esta sección está dedicada a desarrollar un tema específico previamente aprobado por el Comité Editorial de la revista.
- *Estudio de Caso*: esta sección está dedicada a presentar investigaciones sobre territorios particulares.
- *Contra-punto*: esta sección está dedicada a un tema de debate (pueden ser respuestas u observaciones a los artículos anteriores)
- *Reseña*: sección de crítica bibliográfica, provee información sobre las últimas publicaciones en el campo de los estudios del desarrollo económico y territorial.

Las personas interesadas en publicar artículos en la revista Eutopía deberán ingresar a la página www.eutopia.org.ec, seguir las instrucciones y normas de publicación y edición.

Selección de artículos

- 1.1 Los artículos deberán ser originales, inéditos y no estar aprobados para su publicación en otras revistas.
- 1.2 El autor interesado deberá enviar su artículo a la Revista Eutopía a través de la página www.eutopia.org.ec, donde deberá registrarse en la página y llenar el formulario solicitado; al final de éste, marcar la opción AUTOR y guardar.
- 1.3 El título del artículo no debe exceder las 15 palabras y debe estar en español o portugués y en *inglés*. Podrá ser modificado por los editores de la revista, previo acuerdo con los autores.
- 1.4 Los artículos deben estar precedidos de un resumen, en español o portugués y en *inglés*, no mayor a 800 caracteres con espacios (100 a 150 palabras).
- 1.5 Los autores deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) descriptores o palabras clave que reflejen el contenido del artículo.
- 1.6 La extensión de los artículos deberá considerar tanto el cuerpo del artículo como sus notas al pie y bibliografía, de modo que el número total de caracteres con espacios (cce) será el siguiente:

<i>Dossier:</i>	30.000 a 40.000 cce
<i>Estudio de caso:</i>	20.000 a 30.000 cce
<i>Contrapunto:</i>	20.000 a 30.000 cce
<i>Reseña:</i>	7.000 a 9.000 cce

- 1.7 Los artículos serán presentados en letra Times New Roman tamaño 12, márgenes 2,5 cm, a espacio sencillo y sin ningún tipo de sangrías o marcas de texto.
- 1.8 Los artículos podrán ser enviados en idioma español o portugués.
- 1.9 Para su evaluación y selección final, los artículos serán enviados a lectores anónimos, quienes emitirán un informe bajo el sistema de doble ciego o revisión por pares.
- 1.10 Eutopía se reserva el derecho a decidir sobre la publicación de los trabajos, así como el número y la sección en la que aparecerán.
- 1.11 Eutopía se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo.
- 1.12 Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como “recibidos” y notificados de su recepción al autor; los que no, serán devueltos a sus autores/as y serán declarados como “no recibidos”.

Norma editorial

La revista Eutopia *se ajusta a las consideraciones de las normas editoriales de FLACSO-Ecuador*, disponibles en: <http://www.flacso.org.ec/docs/normaseditoriales.pdf>.

Bibliografía

[caso un solo autor]

Apellido, Nombre (año). *Título del libro en letra cursiva*. Ciudad o País donde fue impreso: Editorial.

[caso dos autores]

Apellido, Nombre y Nombre Apellido (año). *Título del Libro en cursiva*. Ciudad o País donde fue impreso: Editorial.

[caso cuatro o más autores]

Apellido, Nombre, Nombre Apellido, Nombre Apellido y Nombre Apellido (año). *Título del libro en letra cursiva*. Ciudad País donde fue impreso: Editorial.

[caso capítulos de libros]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo en comillas dobles”. En *Título del libro en letra cursiva*, Nombre Apellido (Comp.): número de página. Ciudad País donde fue impreso: Editorial.

[caso de artículos de revista impresa]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre de la revista* y número: número de página.

[caso de artículos de revista digital]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre de la revista* número, dirección electrónica (visitada en mes día año).

[caso de artículo en revista popular]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre de la revista*, fecha de publicación

[caso de artículo en periódico]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre del periódico*, mes día, Sección. (en caso de utilizar varios artículos de periódico en los que no consten autor, ubicar en la sección DOCUMENTOS)

[caso de tesis]

Apellido, Nombre (año). “Nombre de la tesis”. Disertación doctoral (o el grado respectivo), Nombre de la Universidad

[caso de ponencia o seminario]

Apellido, Nombre (año). “Nombre de la ponencia”. Ponencia presentada en Nombre del Congreso, mes días, en Ciudad, País.

[caso de documentos electrónicos en página web o blog]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado en mes día año.

[caso de no contar con la fecha del documento]

Apellido, Nombre (s/f). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado en mes día año.

[caso de no contar con un autor y la información sea responsabilidad de alguna organización o similar]

Nombre de la organización (fecha). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado en mes día año.

DOSSIER

Diálogos del Sur. Conocimientos críticos y análisis sociopolítico entre África y América Latina
Presentación del Dossier

Cristina Cielo, Verónica Gago y Jorge Daniel Vásquez

Poder indio y poder negro: recepciones del pensamiento negro en Fausto Reinaga

Gustavo R. Cruz

El Instituto del Tercer Mundo de la Universidad de Buenos Aires (1973 - 1974)

Julieta Chinchilla

¿Nuevas o viejas relaciones? La cooperación técnica brasileña en Mozambique durante el gobierno de Lula da Silva

Elga Lessa de Almeida

La emigración cubana y saharauí. Entre la "traición" y la esperanza

Carmen Gómez Martín y Ahmed Correa Álvarez

Megaminería y desposesión en el Sur: un análisis comparativo

William Sacher

De lo nacional a lo transfronterizo. Resistencias a la estatalidad en África y Latinoamérica

Sergio Caballero Santos y Carlos Tabernerero Martín

Reconfigurando las ciudades africanas

AbdouMaliq Simone

VISUAL

Postales desde Guinea-Bissau

Juan Orrantía y Saly Fayad

TEMAS

Democracia, reconfiguración de amenazas y la paz sudamericana

Jorge Battaglini

Uruguay y su prospectiva de desarrollo.

Oportunidades y restricciones

Gerardo Caetano y Gustavo De Armas

RESEÑAS

Teoría desde el sur. O cómo los países centrales evolucionan hacia África

de Jean Comaroff y John L. Comaroff

Milton Leonel Caderón Vélez

The Spirit of the Laws in Mozambique

de Juan Obarrio

Andrés Ochoa

Etnicidad y globalización: las otavaleñas en casa y en el mundo

de Linda D'Amico

Mercedes Prieto

Entre el Desarrollo y el Buen Vivir: Recursos naturales y conflictos en los territorios indígenas

de Salvador Martí i Puig et ál. editores.

María René Barrientos Garrido

Número anterior:

ICONOS 50: Nuevas aproximaciones a la organización social del cuidado. Debates latinoamericanos

Número siguiente:

ICONOS 52: Interpretaciones sobre el Estado en América Latina

Incluida en los siguientes índices científicos: CLASE, e-revist@s, DIALNET, DOAJ, FLACSO-Andes, Fuente Académica-EBSCO, HAPI, IBSS, Social Science Journal y Sociology Collection-ProQuest, Informe Académico-Thompson Gale LatAm-Studies, LATINDEX, RedALYC, Sociological Abstracts-CSA-ProQuest, Ulrich's Periodical Directory.



Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador

Ventas y suscripciones: La Librería - FLACSO (lalibreria@flacso.edu.ec)

Canjes: Biblioteca FLACSO (xparedes@flacso.edu.ec) • Información y colaboraciones: (revistaiconos@flacso.edu.ec)

Revista Íconos: www.revistaiconos.ec



Dossier 16: Transgénicos y Sociedad

En Open Journal System FLACSO Andes

Editorial

Transgénicos y sociedad

Nicolás Cuví

Dossier

Lucha contra los pilares de los agronegocios en Argentina: transgénicos, agrotóxicos y CONABIA

Cecilia Carrizo, Mauricio Berger

Transgénicos, agroindustria y soberanía alimentaria

Xavier Alejandro León Vega

Los cultivos transgénicos y los paradigmas científicos de los que emergen a la luz de los derechos de la naturaleza

Elizabeth Bravo

Ensayo

Tráfinkutu: curadoras de semillas defendiendo la soberanía alimentaria

Dinelly Soto Soto, Nastassja Mancilla Ivaca, Víctor Hugo Valenzuela Sepúlveda

Nuestra portada: "Buena cosecha", tomada en el "pueblo de Santa María de Jesús, comunidad maya Kaqchikel, Volcán de Agua, Guatemala". Autor: Paul Alejandro Lorca Basáez

Septiembre 2014. ISSN: 1390-6631.

Disponible en: <http://www.flacsoandes.edu.ec/revistas/>

No. 15

ISSN: 1390-4299

URVIO

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Inteligencia criminal

Tema central

Glen Evans:

Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino

Carlos Agustín Bolaños:

Las experiencias de México durante la guerra contra el narcotráfico 2006-2012

José Manuel Ugarte:

Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana. Desarrollo, dilemas y dificultades

Andrés I. Ferratto:

Crimen organizado e inteligencia estratégica: desafíos para el siglo XXI

Eduardo E. Estévez:

Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires

Keymer Ávila:

Prevenir o investigar: el órgano de investigaciones en Venezuela

Daniel Sansó-Rubert Pascual:

Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios: algunas reflexiones

Misceláneo

Evelyn Louyse Godoy Postigo:

A construção social das favelas no Rio de Janeiro (Brasil) como territórios de violência

Entrevista

Daniel Pontón Cevallos: Entrevista a Marcelo Fabián Saín

Un debate ausente: la producción de inteligencia criminal en América Latina

Reseñas

Realizadas por: Alice Martini, Irerí Ceja Cárdenas

Urvio No. 14: **Trata de personas** • Urvio No. 16: **Justicia Transicional**

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, es una publicación semestral (junio y diciembre) y se incluye en los catálogos e índices científicos LATINDEX, EBSCO y FLACSO ANDES

Pedidos y suscripciones: La Librería – FLACSO (lalibreria@flacso.edu.ec)

Canje: Biblioteca – FLACSO (biblioteca@flacso.edu.ec)

A partir del número 14 la Revista Urvio será digital.

Encuéntrela en: <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/URVIO>

La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito-Ecuador. Teléfono: (00593) 2 3238888

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN • FLACSO sede Ecuador

mundosplurales

Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública • ISSN: 1390-9193
Volumen 1 • Número 1 • noviembre 2014



Artículos

La investigación en políticas públicas: ¿ingeniería social, argumentación o experimentación democrática?

André-Noël Roth

¿Qué es una capacidad?

Jean De Munck

Tecnología Social e Economía Solidaria:
construyendo a ponte

GAPI- Unicamp

¿Evaluar el trabajo de investigación?

Thomas Périlleux

Reseñas

Rosanvallon, Pierre

“La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad”

Servio Alberto Caicedo

Fischer, Frank

“Democracy and Expertise: Reorienting Policy Inquiry”

Ana María Fernández

André-Noël Roth Deubel

“Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación”

Verónica Vallejo



FLACSO
ECUADOR

Encuéntrela en: <http://www.flacsoandes.edu.ec/>